



POSICIONES, CRÍTICAS Y PROPUESTAS FRENTE AL PAÍS **(ENERO 2025 - MAYO 2026)**

Crónica de una Oposición Responsable

CRÉDITOS INSTITUCIONALES

Una publicación de la Comisión de Estrategia y Políticas Públicas del PLD

Danilo Medina · Presidente del Partido

Johnny Pujols · Secretario General

Juan Temístocles Montás · Vicepresidente de Estrategia

Zoraima Cuello · Vicepresidenta de Políticas Públicas

Yván Lorenzo · Vicepresidente de Relación Partido–Sociedad

La Comisión de Estrategia y Políticas Públicas fue creada por decisión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana el 9 de noviembre de 2024, como la instancia permanente responsable de estudiar con rigor los temas de coyuntura nacional que afectan la vida de los dominicanos y dominicanas, y de formular —con el respaldo técnico del Secretariado de Políticas Públicas y de los cuadros técnicos y profesionales del partido— las posiciones, críticas, observaciones, denuncias y propuestas con que el PLD ejerce su rol de oposición como interlocutor del interés del pueblo dominicano.

El Partido de la Liberación Dominicana gobernó la República Dominicana durante años de crecimiento sostenido, expansión de la clase media, drástica reducción de la pobreza y eliminación de la indigencia, ampliación de la infraestructura, ampliación de los servicios públicos, apoyo y desarrollo del campo, el turismo y la producción nacional, y modernización del Estado. Esa experiencia no se archiva cuando se está en la oposición: se pone al servicio del país. Un partido que sabe gobernar tiene el deber de ejercer una oposición a la altura de esa capacidad, y eso es lo que hemos hecho como partido.

Lo que hoy compartimos en este libro es resultado de ese método de trabajo. Cada rueda de prensa que aquí se recoge conforma la huella documental de un trabajo institucional metódico, sostenido durante más de un año, en el que cada señalamiento al Gobierno fue precedido por el análisis de los datos y la deliberación institucional, y acompañado por una propuesta concreta de solución. El lector encontrará, junto a la crítica, la alternativa; junto al diagnóstico, la ruta. Es la expresión de un partido que conoce el oficio de gobernar y que ejerce la oposición con la misma seriedad con que administró el Estado: señalando lo que está mal, pero sin renunciar a su obligación de proponer cómo se hace bien.

El Partido de la Liberación Dominicana asume así su rol opositor como un servicio al pueblo dominicano: acompañando sus demandas, documentando sus preocupaciones y ofreciendo, frente a cada problema, una solución técnica y responsable. Esta es la forma en que el partido entiende el servicio público, esté donde esté, en el rol que le corresponda en nuestra democracia.

Historia de logros, responsabilidad de futuro.

NOTA EDITORIAL

Este libro integra en una sola edición el contenido de las ruedas de prensa realizadas por el Partido de la Liberación Dominicana para uso de la militancia como aporte del PLD al pueblo dominicano.

La obra se organiza en dos partes. La primera reúne en orden cronológico, el texto íntegro de cada rueda de prensa. La Segunda Parte —el Compendio de Propuestas— extrae y reúne, agrupadas por área de gobierno, las propuestas formuladas por el partido, reproducidas exactamente como fueron enunciadas, indicando en cada caso la rueda de prensa de la cual fueron tomadas.

ÍNDICE GENERAL

	PRIMERA PARTE	1
01	EL PLD PRESENTA IRREGULARIDADES DEL BONO NAVIDEÑO 2024. ALERTA LA NO ENTREGA DE 600 MILLONES DE PESOS.	2
02	POSICIÓN OFICIAL DEL PARTIDO DE LA LIBERACIÓN DOMINICANA (PLD) SOBRE LAS DECLARACIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4
03	HABLEMOS LA VERDAD	6
04	EL PLD EXIGE AL GOBIERNO MÁS RESPONSABILIDAD FISCAL ANTE MÁS DEUDA Y MENOS FUTURO.	9
05	PLD ESTÁ DISPUESTO A CONTRIBUIR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA MIGRATORIA EFICAZ QUE PROTEJA LA SOBERANÍA DOMINICANA	11
06	PLD PRESENTA 8 PROPUESTAS PARA MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO.	13
07	PLD EXPRESA PREOCUPACIÓN POR IMPUESTO A LAS REMESAS Y SOLICITA ACCIÓN DIPLOMÁTICA DEL GOBIERNO	15
08	PLD PROPONE MEDIDAS URGENTES PARA ENFRENTAR LA CRISIS DE LA CANASTA FAMILIAR	17
09	EL PLD PROPONE MEDIDAS PARA RESCATAR EL BANANO DOMINICANO DEL COLAPSO	20
10	LA SECRETARÍA DE DOMINICANOS EN EL EXTERIOR DEL PLD EXPRESA SU PREOCUPACIÓN Y RESPALDO FIRME A LOS DOMINICANOS RESIDENTES EN PUERTO RICO ANTE LA SITUACIÓN MIGRATORIA.	22
11	PLD PROPONE MEJORAS A PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS. APUESTA A UNA REFORMA QUE FORTALEZCA EL DESARROLLO LOCAL Y LA COMPETITIVIDAD	24
12	EL PLD PROPONE MEDIDAS PARA FORTALECER LA REFORMA AGRARIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA	26
13	PLD PRESENTA PROPUESTAS PARA SOLUCIONAR CRISIS DEL SENASA.	28
14	POR UNA MOVILIDAD CON DIGNIDAD: PLD PRESENTA SOLUCIONES.	30
15	PLD PRESENTA MEDIDAS URGENTES PARA PROTEGER A LOS PRODUCTORES Y LA PRODUCCIÓN ARROCERA	32
16	PLD DENUNCIA COLAPSO AMBIENTAL EN RÍOS OZAMA E ISABELA: "LAS PROMESAS DE SANEAMIENTO SE AHOGARON EN LA INACCIÓN GUBERNAMENTAL	34
17	PLD DENUNCIA COLAPSO DEL SISTEMA EDUCATIVO Y PROPONE PLAN DE EMERGENCIA	36
18	PLD EVIDENCIA CON DATOS DESASTRE EN EL SISTEMA DE SALUD; PROPONE MEDIDAS URGENTES DE RESCATE	38
19	EL CAMBIO APAGÓ EL PAÍS: PLD PROPONE MEDIDAS URGENTES ANTE CRISIS ELÉCTRICA	41
20	PLD EXIGE SOLUCIONES REALES ANTE LA CRISIS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y EL ABANDONO A LAS FAMILIAS DOMINICANAS	43
21	PLD ALERTA POLÍTICA AGROPECUARIA DEL PRM ENCAMINA A MILES DE PRODUCTORES A LA QUIEBRA; PROPONE MEDIDAS URGENTES	45
22	VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL ESTADO DE DERECHO	47

23	PLD RECLAMA TRANSPARENCIA EN INABIE LLAMA AL GOBIERNO A INVESTIGAR TODOS LOS PROCESOS DESDE 2021	49
24	PLD DENUNCIA AUSENCIA DE OBRAS PROMETIDAS CON FONDOS DE AERODOM	52
25	PLD ADVIERTE SOBRE DETERIORO ECONÓMICO: “HOY LA DEUDA PESA MÁS Y EL PAÍS AVANZA MENOS	54
26	¿A QUÉ SE DEBE LA INERCIA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN QUE SOLO REBUSCA EN EL PASADO, IGNORANDO EL DESORDEN DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN?	59
27	PLD EXIGE AL PRM ROMPER VÍNCULOS CON LA NARCOPOLÍTICA Y EXPLICAR FINANCIAMIENTO DEL NARCOTRÁFICO	61
28	PLD DENUNCIA DESPLOME DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN; PRESENTA MEDIDAS URGENTES DE RESCATE	64
29	EL PARTIDO DE LA LIBERACIÓN DOMINICANA (PLD) DENUNCIA QUE EL GOBIERNO LLEVA A LOS ARROCEROS A LA RUINA; PROPONE MEDIDAS URGENTES DE RESCATE	66
30	PLD DENUNCIA DESPLOME DE LA ECONOMÍA GOLPEA A MIPYMES; PROPONE SOLUCIONES	68
31	PLD ACLARA EL GOBIERNO REINAUGURA CÁRCEL LA NUEVA VICTORIA AUMENTANDO EL COSTO EN RD\$3,000 MILLONES	70
32	PLD DENUNCIA DESCALABRO DEL SISTEMA DE SALUD Y EXIGE MAYOR TRANSPARENCIA	73
33	LA ACTUACIÓN DIFERENCIADA DEL MINISTERIO PÚBLICO: EVIDENCIAS DE UNA JUSTICIA SELECTIVA Y POLÍTICAMENTE ORIENTADA	75
34	PLD DENUNCIA CENA NAVIDEÑA 2025 ALCANZA COSTO RÉCORD DE RD\$16,825.14; PROPONE MEDIDAS URGENTES	77
35	PLD DENUNCIA FUSIÓN EN EDUCACIÓN BUSCA REDUCIR 4% PIB; TILDA MEDIDA DE “INACEPTABLE”	80
36	PLD EXIGE AL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGAR DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN QUE BROTAN EN TODOS LOS MEDIOS.	82
37	JÓVENES DENUNCIAN ABANDONO Y DESPRECIO DEL GOBIERNO PRM; EXIGEN POLÍTICAS INTEGRALES	84
38	PLD EXIGE TRANSPARENCIA E INTERVENCIÓN URGENTE PARA GARANTIZAR ATENCIÓN DIGNA EN HOSPITALES PÚBLICOS	87
39	PLD REPROCHA BAJA INVERSIÓN; TILDA AL PRM DE SER GOBIERNO DE “ANUNCIOS Y EXCUSAS”	89
40	PLD ALERTA GOBIERNO GASTÓ MÁS CUBRIENDO PÉRDIDAS ELÉCTRICAS QUE EN INVERSIÓN PÚBLICA	91
41	PLD EXIGE AL PRESIDENTE RESPUESTAS ANTE LA PÉRDIDA DEL RUMBO DEL PAÍS.	93
42	PLD ADVIERTE RETROCESO Y RUPTURA DE LA CONFIANZA: EL PAÍS DEBE RECUPERAR EL ORDEN	96
43	PLD TILDA EL 2025 DE NEFASTO PARA LA AGRICULTURA; CONDENA MALTRATO A PROFESIONALES AGROPECUARIOS	102
44	PLD DENUNCIA RETROCESOS EN EL BIENESTAR DE MUJERES Y LLAMA A FORTALECER POLÍTICAS PÚBLICAS	105
45	PLD RESPONDE: NO BASTA CON ANUNCIOS, GOBIERNO DEBE MOSTRAR REAL INTENCIÓN DE SACRIFICIO. PROPONE PLAN DE AUSTERIDAD Y AMPLIAR DECISIONES ESTRUCTURALES ANTE IMPACTO DEL CONFLICTO INTERNACIONAL.	107
46	PLD ASEGURA EL 2026 SE ENCAMINA A SER EL AÑO MÁS SANGRIENTO PARA MUJERES DOMINICANAS	109

47	PLD RESPALDA RECLAMO DE COMUNIDADES Y DENUNCIA AUSENCIA DEL GOBIERNO EN LA PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES	111
48	PLD DENUNCIA GOBIERNO PAGA RD\$ RD\$22,369 MILLONES EN ALQUILERES DE LOCALES EN CINCO AÑOS; DICE ES “UN DERROCHE QUE HIPOTECA EL PATRIMONIO PÚBLICO”	113
49	PLD ALERTA SOBRE GRAVE CRISIS DEL SECTOR AGROPECUARIA Y ACUSA AL GOBIERNO DE DESMANTELAR LA PRODUCCIÓN	115
50	PLD DENUNCIA CRISIS DE VIOLENCIA, INSEGURIDAD CIUDADANA Y AUSENCIA DE PLAN DE PREVENCIÓN DE PARTE DEL GOBIERNO	118
51	PLD DENUNCIA FALSO PLAN DE AUSTERIDAD Y ADVIERTE SOBRE RIESGO A LA COMPETENCIA DEMOCRATICA	120
52	PLD DENUNCIA DESPROTECCIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA FRENTE A LA INFLACIÓN Y EXIGE RESPUESTAS INMEDIATAS	123
53	PLD EXIGE MINISTERIO PÚBLICO PRESENTE AVANCES SOBRE SENASA Y SU VÍNCULO CON LA CAMPAÑA DEL PRM	125
54	PLD ASUME DEFENSA DE COMERCIANTES FRONTERIZOS ANTE AMENAZAS DE MODIFICAR LA DINÁMICA ECONÓMICA DE LA ZONA BAJO EL PRETEXTO DE “MODERNIZACIÓN”	127
	SEGUNDA PARTE	130
	ECONOMÍA, DEUDA Y FINANZAS PÚBLICAS	131
	COSTO DE VIDA, SALARIOS Y CLASE TRABAJADORA	135
	SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	137
	AGROPECUARIA Y PRODUCCIÓN NACIONAL	139
	EDUCACIÓN Y JUVENTUD	144
	SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS	145
	TRANSPARENCIA, JUSTICIA Y FISCALIZACIÓN	147
	MIGRACIÓN Y SOBERANÍA	149
	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS	151
	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	154
	DESARROLLO HUMANO Y POLÍTICAS SOCIALES	155
	MUJER Y POLÍTICAS DE GÉNERO	156

PARTIDO DE LA LIBERACIÓN DOMINICANA

PRIMERA PARTE

Ruedas de Prensa

Enero 2025 — Mayo 2026

TRANSPARENCIA, JUSTICIA Y FISCALIZACIÓN

01 EL PLD PRESENTA IRREGULARIDADES DEL BONO NAVIDEÑO 2024. ALERTA LA NO ENTREGA DE 600 MILLONES DE PESOS.

22 de enero 2025

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como una organización comprometida con el bienestar de la ciudadanía y con una trayectoria de más de dos décadas de liderazgo en la implementación de políticas sociales, presenta ante ustedes las irregularidades e inconsistencias detectadas en el Programa de Bonos Navideños 2024 del Gobierno Dominicano.

Estas observaciones son el resultado del análisis de la información proporcionada por el Gabinete de Políticas Sociales, en respuesta a la solicitud realizada por nuestro Partido en el mes de diciembre, en el marco de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.

Entre las principales inconsistencias detectadas se destaca que, aunque el gobierno anunció la distribución de 3 millones de tarjetas, los datos oficiales documentan la entrega de solo 2.6 millones. Aún no se ha informado a quiénes ni cuándo se distribuirán los RD\$600 millones de pesos correspondientes a las 400,000 tarjetas restantes, que no han sido asignadas a ninguna entidad.

Además, se observa una desviación del objetivo principal del programa, que debería estar enfocado en beneficiar a las personas más vulnerables. Sin embargo, más del 36 % de las tarjetas fueron gestionadas por instituciones sin un mandato social, como Bienes Nacionales, la Dirección General de Pasaportes, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, el INAPA, la OPRET, el INFOTEP, la DIGESETT, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, entre otras.

También se identifican incongruencias y falta de control en la gestión, incumpliendo los criterios establecidos en la Resolución Administrativa Núm. 0007-2020 del Gabinete de Políticas Sociales, que regula su ejecución. Por ejemplo, durante el espacio de La Semanal realizada en Santo Domingo Oeste

en diciembre de 2024, se aseguró que la “Brisita Navideña” se entregaba únicamente a personas que cumplieran con los requisitos definidos. Estos beneficiarios debían clasificarse en tres grupos: jubilados, desempleados y personas de bajos ingresos, además de hogares categorizados como ICV-1 e ICV-2 según la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).

No obstante, la resolución establece de manera explícita la exclusión de ciertos grupos, como los militares de alto rango a partir de coronel, pero la lista de entidades que recibieron las tarjetas del bono revela la asignación de 106,500 tarjetas a estamentos militares, lo que plantea interrogantes sobre su destino y justificación, y hace imprescindible una aclaración por parte de las autoridades responsables.

Además, dicha resolución estipula la exclusión de todos los beneficiarios que ya forman parte de otros programas sociales. Sin embargo, se reporta la entrega de 360,000 tarjetas a Supérate, lo que genera dudas sobre la coherencia en la selección de beneficiarios, considerando que estos se encuentran categorizados en el SIUBEN. Por ello, es importante que se explique esta aparente incongruencia y se detallen los criterios utilizados para las asignaciones.

El análisis del proceso de entrega de los bonos navideños 2024 pone de manifiesto una preocupante falta de rigor en su gestión, evidenciando:

Ausencia de criterios claros para la asignación de las cuotas a cada institución, lo que dificulta comprender la lógica detrás de la distribución de esos recursos económicos, ya que los criterios citados por el Gabinete de Políticas Sociales no garantizan que los bonos lleguen a las personas vulnerables.

Carencia de un registro público de beneficiarios, necesario para verificar la adecuada focalización de los bonos, además de la ausencia de un mecanismo de seguimiento para poder medir el impacto de este programa.

Y no existen mecanismos para establecer si se cumplió con eficacia y eficiencia los objetivos previstos.

Estas acciones evidencian un manejo discrecional de los recursos públicos y debilitan la confianza en el sistema de focalización social.

El PLD, está comprometido con la defensa de los más necesitamos. Como partido que diseñó e implementó mecanismos efectivos como el SIUBEN, ratificamos la importancia de utilizar herramientas de focalización que aseguren una distribución justa y eficiente de las ayudas sociales.

Por ello, proponemos al país un conjunto de soluciones para fortalecer los programas sociales:

En primer lugar, consideramos esencial reformar el sistema de ayudas sociales mediante el uso obligatorio del SIUBEN para la focalización, un sistema centralizado de verificación y la participación de la sociedad civil en la supervisión.

También abogamos por la creación de una Ley de Programas Sociales que garantice criterios técnicos claros para la selección de beneficiarios,

transparencia total mediante un registro público y la rendición de cuentas periódica.

Desarrollar una plataforma digital integral con datos abiertos, que permita a la ciudadanía monitorear en tiempo real la distribución de todas ayudas sociales que se realizan, asegurando así un control efectivo y público sobre los recursos destinados a estos fines.

Finalmente, hacemos un llamado a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República para que realicen auditorías exhaustivas de los programas sociales actuales. Al mismo tiempo, instamos a los medios de comunicación y a la ciudadanía, a mantenerse vigilantes, exigir transparencia y denunciar irregularidades. Los recursos públicos deben ser gestionados apegados a las normativas, con controles que eviten la discrecionalidad, con responsabilidad y destinados a quienes más lo necesitan.

El PLD reafirma su compromiso con los dominicanos y las dominicanas, trabajando desde nuestra experiencia y visión renovada, para restablecer la confianza en las políticas públicas, donde cada peso del presupuesto nacional, se utilice de manera transparente y eficiente, en beneficio de los más vulnerables y en pro de la justicia social.

TRANSPARENCIA, JUSTICIA Y FISCALIZACIÓN

02 POSICIÓN OFICIAL DEL PARTIDO DE LA LIBERACIÓN DOMINICANA (PLD) SOBRE LAS DECLARACIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

17 de febrero, 2025

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reitera su compromiso inquebrantable con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana. En este sentido, considera indispensable y urgente esclarecer las denuncias, basadas en documentos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos, sobre el uso de fondos internacionales en el país, en particular los otorgados por la USAID a Participación Ciudadana y su eventual impacto en la política nacional, especialmente en el proceso electoral del 2020.

Este no es un cuestionamiento arbitrario ni una disputa partidista. Se trata de un legítimo reclamo sobre el manejo de recursos extranjeros en la vida política nacional. La transparencia no puede ser selectiva ni interpretarse como un ataque cuando se solicita con fundamentos.

El PLD no ha señalado ni acusado a periodistas, comunicadores ni a ninguna persona en particular. No lo ha hecho ni lo hará. No practica la difamación, pero tampoco aceptará ser objeto de ella.

Es preocupante que organizaciones que en el pasado orquestaron campañas de descrédito contra el partido ahora intenten presentarse como víctimas. Sin embargo, el PLD no responderá con la misma moneda. No lo mueve el resentimiento ni la revancha, sino el bienestar del país.

Lo que no se permitirá es que se pretenda desviar la atención de un asunto de alto interés nacional: el uso de fondos internacionales en la política dominicana y la obligación de rendir cuentas sobre ellos.

Participación Ciudadana ha mantenido durante años un discurso de constante ataque contra el PLD. Su reacción actual confirma su agenda de deslegitimación contra el partido, pero la pregunta central sigue sin respuesta:

¿En qué se utilizaron los fondos de USAID?

¿Influyeron en la política nacional, en las elecciones del 2020 o en la agenda mediática del país?

¿Quiénes se beneficiaron de esos recursos y qué mecanismos de rendición de cuentas han aplicado?

La sociedad exige que Participación Ciudadana publique con total transparencia: Los destinatarios específicos de los fondos recibidos desde el 2015 hasta la fecha. Los programas y actividades financiados con estos recursos.

Los criterios de distribución y su impacto en la política nacional.

Participación Ciudadana no puede sentirse agraviada cuando se le solicita rendir cuentas. Si no hay nada que ocultar, no debería haber resistencia en presentar los documentos y detalles correspondientes.

Lo que está en juego es la confianza en las instituciones. Por ello, el PLD reitera: la transparencia debe ser un estándar universal.

El PLD no busca confrontación, sino que se une a la sociedad dominicana en la exigencia de respuestas. La democracia y la confianza ciudadana lo exigen.

03 HABLEMOS LA VERDAD

27 de febrero, 2025

Mensaje al pueblo dominicano del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en ocasión del aniversario de la Independencia Nacional y la Rendición de Cuentas del Presidente de la República.

Dominicanos y dominicanas,

Desde 1844, cada 27 de febrero, la patria nos convoca. La fecha, que marca el nacimiento de una nueva República para el mundo, nos convoca.

Convoca a cada dominicano y dominicana a reflexionar sobre la patria que construimos día a día. La República Dominicana que heredamos y la que legaremos a las futuras generaciones.

Hay tareas pendientes. ¡Urgentes! Y esta fecha, este día, 27 de febrero, nos convoca a reflexionar sobre esas tareas. Las tareas de liberación: de la educación, de la salud, de la democratización del crédito, del desarrollo agropecuario y, en fin, del bienestar colectivo.

El presidente de la República se ha presentado hoy para dar cuentas de las tareas que le fueron encomendadas. Habló de muchas cosas entre ellas medias verdades e inexactitudes con las que intentó maquillar la realidad que vive el pueblo dominicano. Es nuestra responsabilidad como partido y frente a la ciudadanía develar la verdad y exponer, con datos en mano, la realidad que este gobierno intenta esconder.

El Costo de la Vida se Dispara

La inflación acumulada no se combate con discursos, sino con políticas efectivas que hagan que el dinero rinda más en los bolsillos de la gente.

El gobierno del PRM y su presidente prometieron bajar el precio de los alimentos en 30% y lo que han hecho es exactamente lo contrario: subirlo más de un 48% en promedio.

El presidente habló de una producción récord de arroz, superando los 14 millones de quintales. ¿Cómo se explica entonces un aumento del 344%

en las importaciones de arroz? Si la producción es récord, ¿por qué se importa tanto? Los hechos desmienten el discurso oficial.

En lo que va de este gobierno, el arroz selecto, alimento esencial de los dominicanos, ha aumentado de 26 a 46 pesos, mientras productos básicos como el pollo, el cerdo, la leche, los huevos y los víveres han subido hasta un 68%, golpeando sin piedad a los hogares más vulnerables. Para muchas familias, la carne de res y el pescado han pasado de ser una opción a un lujo inalcanzable.

El Campo en Abandono

El campo dominicano, pilar de nuestra soberanía alimentaria, ha sido abandonado y golpeado deliberadamente para favorecer las importaciones y a un pequeño grupo de importadores. Se ha traicionado a nuestros productores, se ha debilitado el agro, y con ello, la seguridad alimentaria del país.

El gobierno falta a la verdad cuando habla de un 90% de sostenibilidad alimentaria, mientras en la realidad ha disparado las importaciones agroalimentarias en 2,222 millones de dólares, un aumento del 71%. No hay soberanía alimentaria cuando se abandona a nuestros productores y se pone la comida de los dominicanos en manos de importadores.

Esta política de importaciones desmedidas y el desprecio por el sector agropecuario desmienten el discurso sobre “Hambre Cero”. ¿Cómo puede hablarse de Hambre Cero en 2028 cuando cada día más familias tienen menos acceso a los alimentos esenciales? Cuando los precios suben sin control y la producción nacional se desploma.

Desempleo y Falta de Oportunidades

El Gobierno del PRM habla de empleos, pero más de la mitad de los empleos son informales, precarios, mal pagados y sin protección social. Los pocos empleos formales creados son el resultado del crecimiento innecesario y abusivo de la

nómina pública. Mientras los gastos en salud y alimentos superan con creces cualquier esfuerzo de incremento salarial, reduciendo la calidad de vida de los dominicanos.

Nuestros jóvenes, que son la esperanza de la Patria, enfrentan un panorama desolador, sin oportunidades dignas para desarrollarse.

El PRM desde el gobierno ha manejado cinco billones, es decir cinco millones de millones de pesos, el mayor presupuesto de nuestra historia, pero ninguno de los indicadores fundamentales del bienestar nacional ha mejorado.

¿Dónde están las obras y las infraestructuras que deberían transformar nuestra nación?

¿Dónde están aquellas que el PLD dejó casi listas y las que este gobierno del PRM anunció?

El presidente no se refirió a la gran cantidad de obras inconclusas y promesas incumplidas. Una de las más importantes es la solución vial en el km9 de la Autopista Duarte, no solo es una solución incompleta, sino que además se encuentra atrasada, la circunvalación de Bani, la de San Francisco de Macorís, la de Moca, la extensión de la Línea del Metro, en fin no se pudo mostrar una sola obra importante en estos 4 años.

Tampoco se refirió a los trabajos en las obras que debían realizarse con los recursos de la renegociación de AERODOM, Ni porque la inversión de capital se ha reducido drásticamente en su gobierno, la más baja en 60 años.

El País Atrapado en la Deuda

El endeudamiento ha crecido más en el Gobierno del PRM que en cualquier otro. La deuda crece para financiar el gasto corriente. Se compromete el futuro de nuestros hijos sin mejoras estructurales que lo justifiquen. Cada dominicano carga con una deuda en aumento, sin ver mejoras en su calidad de vida. No es solo el excesivo endeudamiento lo que condenamos, sino además la falta de resultados. Hace unos años la deuda la convertíamos en escuelas, hospitales, metros y carreteras. Hoy, solo vemos intereses acumulándose sin mejoras para la gente.

La transparencia no son símbolos, es también decir la VERDAD y en eso ha FALLADO EL GOBIERNO. La vida de la gente no se nutre con discursos, sino con hechos. No basta con prometer una y otra vez, con grandes anuncios, con propuestas, cuando se gobierna se esperan resultados.

Inseguridad en Aumento

El Gobierno del PRM mintió con la promesa de reducir la delincuencia a la mitad, con el esfumado Plan Giuliani.

El presidente habla de reducción en 20% de los feminicidios y homicidios de mujeres en los últimos cuatro años. El uso de un promedio pretende esconder que en 2024 hubo un incremento de feminicidios de 14.5%, respecto a 2019, no olvidemos además el funesto junio de 2024, donde 13 mujeres fueron asesinadas, y al día de esos están casos aun sin resolver. La tasa de homicidio 9.6 por cada 100 mil habitantes sigue siendo superior a la recibida por este gobierno en 2019 de 9.4.

Hoy, la inseguridad roba la tranquilidad de los hogares dominicanos. El país vive con miedo. No hay un solo dominicano que no haya sido víctima de la delincuencia o conozca a alguien que lo haya sido, mientras el gobierno del PRM da tumbos con políticas poco efectivas.

En cambio, se destruyen y abandonan proyectos clave, que sí dieron resultado, como el Sistema 911, dejando a la población sin respuesta ante emergencias.

Los barrios de nuestras ciudades y pueblos: abandonados. Sin programas de prevención del delito, sin políticas de seguridad que ataquen el problema de raíz y sin luz.

La seguridad no es solo más policías en la calle; es también oportunidades, es educación, es empleos, es salud. Es inversión en los jóvenes.

El Regreso de los Molestos Apagones

Los apagones que eran cosa del pasado, hoy son la triste realidad del presente. El PLD con valentía y determinación hizo las inversiones que tenían que hacerse, como Punta Catalina. Pero el Gobierno del PRM ha traído de vuelta el fantasma de los apagones.

El presidente habla de ampliación de la matriz energética y energías limpias, pero la única realidad que siente el pueblo es la desesperación de los negocios que cierran antes de tiempo, los hogares que se quedan sin luz y los recibos que no paran de subir.

Nos han hecho retroceder 20 años en el sector eléctrico, con un sistema energético en crisis, con enormes pérdidas y falta de inversión que no parece ser relevante para el gobierno.

Cómo es posible que las pérdidas eléctricas hayan pasado de 27% a más de 45% bajo su gestión? ¿Cómo van a reducir los apagones cuando el subsidio eléctrico ha explotado de 450 a 1,600 millones de dólares y sigue creciendo sin control?

La verdad es una: no hay plan, no hay soluciones, solo promesas vacías mientras el pueblo paga más por un servicio peor. ¿Ese fue el cambio que prometieron?

El presidente Luis Abinader anunció la decisión final de detener las operaciones en las Cuevas del Pomier, una medida que celebramos. Sin embargo, ese compromiso con el medio ambiente no es coherente cuando, al mismo tiempo, se otorgan permisos a empresas que contaminan nuestro aire y nuestras aguas sin aportar ningún beneficio real al país.

El gobierno debe actuar con la misma determinación sobre las barcazas en Los Negros de Azua, que están destruyendo nuestro ecosistema y encareciendo nuestra energía.

Este no es solo un reclamo de las comunidades afectadas, sino también de la Academia de Ciencias, la Comisión Ambiental de la UASD y múltiples sectores medioambientales, que han advertido con firmeza sobre el grave impacto ecológico en la zona. Presidente, tiene una gran oportunidad de cuidar nuestro medioambiente CERREMOS ESAS BARCAZAS.

Transporte en Caos

El caos del tráfico diario y la falta de inversión en transporte público afectan la calidad de vida de las familias dominicanas. El Gobierno del PRM

ha ahondado la brecha entre ricos y pobres con absoluta indolencia e indiferencia.

Educación en Crisis

El presidente habló de 72 nuevos centros educativos. Pero, ¿cómo puede hablar de 1,139 aulas cuando en 2020 se dejaron 11,000 en construcción? Es triste y vergonzoso.

En relación al programa CON BASE anunciado por el Presidente de la república, la realidad es muy distinta, las evaluaciones diagnosticas de 3er grado evidencian un retroceso en matemáticas pasando de 27.45% calificados como satisfactorios en 2017, a solo un 23.7% en 2023.

Lo más grave no es lo que dijo, sino lo que no dijo: por ejemplo, cuando un niño se queda sin escuela, no es solo un problema social, es un fracaso del gobierno. Un fracaso sin precedentes, con cerca de 100,000 niños fuera de las aulas y una parálisis total en la construcción y mantenimiento de la infraestructura escolar. Sin dudas, es espantoso y cruel.

Eso no se lo dice el Presidente al pueblo que lo sufre. Pero para eso estamos nosotros, para señalar la infamia, señalarla con tristeza, porque entendemos el dolor del pueblo, porque también lo sentimos. No venimos a hacer ruido, venimos a hacer memoria. Porque cuando un pueblo tiene memoria, no puede ser engañado para siempre.

Salud Inaccesible

El presidente hablo de hospitales remozados sin detallar cuales ni donde, pero no dijo nada respecto a la fuerte denuncia del CODUE y de la conferencia del episcopado sobre el deterioro y precariedad que impera en los servicios de Salud, la falta de medicamentos e insumos y la ausencia de políticas para enfrentar la situación del sector, especialmente la epidemia de salud mental.

El PLD: Compromiso con el Futuro de la Nación

Hoy, la realidad es que el PRM tiene al pueblo pasando un duro momento.

El país avanzó cuando hubo planificación y visión de futuro. Y eso es lo que hoy falta.

Y eso es lo que nosotros sabemos cómo recuperar.

El PLD se diferencia del PRM con hechos y resultados, apostando por una gestión eficiente, transparente y basada en la justicia social.

El futuro de la República exige un gobierno que honre el sacrificio de nuestros próceres y respete la dignidad de nuestro pueblo.

En este Día de la Independencia, el PLD reafirma su compromiso con la soberanía nacional, la participación democrática y la justicia social. Por qué la independencia no es solo un hecho de nuestra historia, es una lucha diaria por la dignidad del pueblo dominicano. ¡Es la lucha para que nunca más seamos esclavos, nunca, y mucho menos esclavos de la mentira, ni del miedo!

ECONOMÍA, DEUDA Y FINANZAS PÚBLICAS

04 EL PLD EXIGE AL GOBIERNO MÁS RESPONSABILIDAD FISCAL ANTE MÁS DEUDA Y MENOS FUTURO.*29 de abril, 2025*

El Partido de la Liberación Dominicana se dirige al país, para fijar su posición institucional ante la política migratoria actual, reafirmando su compromiso de dar continuidad al ideal de Juan Pablo Duarte de una nación soberana, justa y respetuosa de la dignidad humana.

Desde nuestra fundación, con la misión de materializar el proyecto duartiano, hemos demostrado y promovido como principio innegociable, el derecho soberano de la República Dominicana a controlar sus fronteras y regular sus flujos migratorios, enarbolando que la soberanía nacional se vuelve más sólida cuando se ejerce con criterios de transparencia, orden y pleno respeto a los derechos fundamentales.

En ese orden, advertimos que un Estado no se fortalece violando derechos humanos, ni construyendo políticas sobre la base del miedo, la discriminación o el oportunismo electoral.

Es por ello por lo que el PLD expresa su profunda preocupación por la ineficaz política migratoria actual. No se justifica que las actuaciones del gobierno atenten contra la dignidad de personas vulnerables, como mujeres embarazadas o menores de edad. Como organización, no compartimos políticas que estimulen un clima de xenofobia en la sociedad dominicana.

No se defiende la soberanía humillando al prójimo, sino protegiendo a su propio pueblo con políticas que procuren su bienestar y seguridad. Se defiende la soberanía con orden, legalidad, controles robustos y humanidad.

El Partido de la Liberación Dominicana le recuerda al Gobierno que Haití es el segundo destino de nuestras exportaciones y sostiene miles de empleos dominicanos. Un enfoque puramente confrontacional, sin canales regulados de

intercambio, afecta directamente a empresas y familias dominicanas que dependen de este comercio. A la vez que alertamos que medidas improvisadas erosionan la imagen internacional de la República Dominicana y generan tensiones sociales internas, exponiendo a nuestro país a condenas y cuestionamiento internacionales y a un deterioro de la convivencia democrática dentro de nuestras fronteras.

Ante la situación planteada, proponemos una política migratoria basada en:

Un sistema de control fronterizo moderno y efectivo, con verdaderas sanciones y consecuencias para quienes permiten el acceso irregular a nuestro territorio, junto al uso de tecnología de punta, que garantice una real protección del país y nuestra frontera.

La implementación de un Plan Nacional de Regularización ordenado y transparente, que permita identificar quienes se encuentran en nuestro territorio y aquellos que contribuyen a los sectores productivos.

El fortalecimiento de las relaciones diplomáticas para compartir la responsabilidad de la crisis haitiana con la comunidad internacional, evitando que República Dominicana cargue sola con esta situación y abogar por más facilidades para esa nación, iniciando por la eliminación de los aranceles impuestos del 10 % a sus exportaciones al territorio norteamericano.

Que toda acción migratoria se realice en estricto apego al marco de la Constitución dominicana, las leyes nacionales y a los procedimientos establecidos, garantizando transparencia y rendición de cuentas.

Y ante el llamado del Presidente de la República a los partidos políticos para construir un pacto

nacional, el PLD está dispuesto a dialogar y llegar a acuerdos en un tema como el migratorio, que es un tema país, procurando que este diálogo:

Se base en información verificable y transparente sobre migración irregular, repatriaciones y comercio binacional.

Que además del control fronterizo, incluya la estrategia de regularización, la cooperación internacional y el establecimiento de estrategias de desarrollo.

Que incluya a todos los sectores vinculados, desde productores nacionales, organizaciones civiles e instituciones académicas.

Se establezcan compromisos concretos con plazos definidos y mecanismos de seguimiento que aseguren el cumplimiento de los acuerdos, junto

a un calendario de trabajo concreto accesibles a toda la ciudadanía.

Declaración pública del Gobierno de que toda acción migratoria respetará la dignidad humana y rechazará la xenofobia.

El propósito del dialogo no puede ser bajo el interés político – electoral, sino basado en una política real de Estado, que se implemente de manera rigurosa y organizada, rindiendo cuentas de forma transparente.

El Partido de la Liberación Dominicana defiende una política migratoria firme, humana y orientada a soluciones estructurales. Decimos si a la soberanía, la dignidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional, en garantías de un Estado soberano y justo.

MIGRACIÓN Y SOBERANÍA

05 PLD ESTÁ DISPUESTO A CONTRIBUIR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA MIGRATORIA EFICAZ QUE PROTEJA LA SOBERANÍA DOMINICANA*29 de abril, 2025*

El Partido de la Liberación Dominicana se dirige al país, para fijar su posición institucional ante la política migratoria actual, reafirmando su compromiso de dar continuidad al ideal de Juan Pablo Duarte de una nación soberana, justa y respetuosa de la dignidad humana.

Desde nuestra fundación, con la misión de materializar el proyecto duartiano, hemos demostrado y promovido como principio innegociable, el derecho soberano de la República Dominicana a controlar sus fronteras y regular sus flujos migratorios, enarbolando que la soberanía nacional se vuelve más sólida cuando se ejerce con criterios de transparencia, orden y pleno respeto a los derechos fundamentales.

En ese orden, advertimos que un Estado no se fortalece violando derechos humanos, ni construyendo políticas sobre la base del miedo, la discriminación o el oportunismo electoral.

Es por ello por lo que el PLD expresa su profunda preocupación por la ineficaz política migratoria actual. No se justifica que las actuaciones del gobierno atenten contra la dignidad de personas vulnerables, como mujeres embarazadas o menores de edad. Como organización, no compartimos políticas que estimulen un clima de xenofobia en la sociedad dominicana.

No se defiende la soberanía humillando al prójimo, sino protegiendo a su propio pueblo con políticas que procuren su bienestar y seguridad. Se defiende la soberanía con orden, legalidad, controles robustos y humanidad.

El Partido de la Liberación Dominicana le recuerda al Gobierno que Haití es el segundo destino de nuestras exportaciones y sostiene miles de empleos dominicanos. Un enfoque puramente confrontacional, sin canales regulados de

intercambio, afecta directamente a empresas y familias dominicanas que dependen de este comercio. A la vez que alertamos que medidas improvisadas erosionan la imagen internacional de la República Dominicana y generan tensiones sociales internas, exponiendo a nuestro país a condenas y cuestionamiento internacionales y a un deterioro de la convivencia democrática dentro de nuestras fronteras.

Ante la situación planteada, proponemos una política migratoria basada en:

Un sistema de control fronterizo moderno y efectivo, con verdaderas sanciones y consecuencias para quienes permiten el acceso irregular a nuestro territorio, junto al uso de tecnología de punta, que garantice una real protección del país y nuestra frontera.

La implementación de un Plan Nacional de Regularización ordenado y transparente, que permita identificar quienes se encuentran en nuestro territorio y aquellos que contribuyen a los sectores productivos.

El fortalecimiento de las relaciones diplomáticas para compartir la responsabilidad de la crisis haitiana con la comunidad internacional, evitando que República Dominicana cargue sola con esta situación y abogar por más facilidades para esa nación, iniciando por la eliminación de los aranceles impuestos del 10 % a sus exportaciones al territorio norteamericano.

Que toda acción migratoria se realice en estricto apego al marco de la Constitución dominicana, las leyes nacionales y a los procedimientos establecidos, garantizando transparencia y rendición de cuentas.

Y ante el llamado del Presidente de la República a los partidos políticos para construir un pacto

nacional, el PLD está dispuesto a dialogar y llegar a acuerdos en un tema como el migratorio, que es un tema país, procurando que este diálogo:

Se base en información verificable y transparente sobre migración irregular, repatriaciones y comercio binacional.

Que además del control fronterizo, incluya la estrategia de regularización, la cooperación internacional y el establecimiento de estrategias de desarrollo.

Que incluya a todos los sectores vinculados, desde productores nacionales, organizaciones civiles e instituciones académicas.

Se establezcan compromisos concretos con plazos definidos y mecanismos de seguimiento que aseguren el cumplimiento de los acuerdos, junto

a un calendario de trabajo concreto accesibles a toda la ciudadanía.

Declaración pública del Gobierno de que toda acción migratoria respetará la dignidad humana y rechazará la xenofobia.

El propósito del dialogo no puede ser bajo el interés político – electoral, sino basado en una política real de Estado, que se implemente de manera rigurosa y organizada, rindiendo cuentas de forma transparente.

El Partido de la Liberación Dominicana defiende una política migratoria firme, humana y orientada a soluciones estructurales. Decimos sí a la soberanía, la dignidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional, en garantías de un Estado soberano y justo.

DESARROLLO HUMANO Y POLÍTICAS SOCIALES

06 PLD PRESENTA 8 PROPUESTAS PARA MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO.*19 de mayo, 2025*

Hoy comparecemos ante la sociedad dominicana para presentar una realidad que nos afecta a todos: la República Dominicana está experimentando un retroceso en su desarrollo humano justo cuando más necesitamos avanzar como nación.

El reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo revela que el país ha caído dos posiciones en el Índice de Desarrollo Humano, exponiendo el aumento de inequidades profundas en aspectos esenciales para nuestro progreso colectivo. Esto significa que los beneficios del crecimiento económico, no están llegando a la mayoría de las familias dominicanas, pues cuando el indicador se ajusta por desigualdad, nuestro nivel de desarrollo real disminuye hasta un alarmante 18.3%.

Esta brecha está teniendo un impacto devastador en la calidad y expectativa de vida de nuestro pueblo. Cuando una familia debe decidir entre medicamentos o alimentos porque la inflación ha disparado los precios básicos de la canasta familiar, el resultado es inevitable: un deterioro de la salud pública. La nutrición adecuada — base fundamental de una población saludable— se ha convertido en un privilegio en lugar de derecho, erosionando directamente la esperanza de vida de los dominicanos y dominicanas, especialmente de nuestros más vulnerables: madres gestantes, niños y adultos mayores.

Detrás de estas estadísticas hay historias reales que nos duelen como nación: Francina Muñoz, una joven madre de apenas 24 años y su bebé, quienes fallecieron durante el parto que debió ser rutinario en Fantino; Roberto Aquino en Monte Plata, cuya hija con 9 meses de gestación perdió la vida por déficit de atención médica; o Eugenia Bonilla, quien tras una cesárea programada, nunca regresó a abrazar a sus seres queridos. Estas tragedias evitables son el rostro humano de un sistema que ha abandonado su compromiso

fundamental con el bienestar ciudadano.

Este deterioro no es casualidad. Es el resultado de priorizar la imagen sobre el bienestar real de nuestra gente. Mientras se cortan cintas e inauguran obras sin impacto social, los indicadores fundamentales del bienestar humano continúan deteriorándose.

La ausencia de un plan integral y la creciente crisis del costo de vida están afectando a nuestras familias de maneras concretas:

Incremento desproporcionado en costos médicos: Según datos del Banco Central, entre diciembre 2020 y abril 2025, las consultas médicas han aumentado significativamente: pediatras 46%, ginecólogos 43% y cardiólogos 33%. Los servicios hospitalarios subieron 18% y los análisis de laboratorio 23%. Los medicamentos esenciales también han experimentado alzas importantes: tratamientos para la hipertensión 19%, antiinflamatorios 26%, insulina 20% y medicamentos para tiroides 25%. Estos aumentos han puesto la atención médica fuera del alcance de miles de familias dominicanas.

Desabastecimiento y discontinuidad en tratamientos: Para quienes viven con enfermedades crónicas, la situación es desesperante. Las Farmacias del Pueblo frecuentemente están desabastecidas mientras los tratamientos esenciales han sufrido incrementos del 30% en promedio, obligando a muchos pacientes a interrumpir terapias vitales.

Retroceso en los indicadores de salud materna: La tasa de mortalidad materna se mantiene en 124 por cada 100,000 nacidos vivos en 2024, muy por encima de la tasa de 94 reportada en 2019. Estas cifras son propias de países menos desarrollados. Cada número representa una madre dominicana que salió de su hogar para dar a luz y nunca regresó.

Un sistema sanitario sin inversión adecuada: El presupuesto en salud ha caído a un 1.7% del PIB. Esto se traduce en hospitales donde la climatización adecuada ha sido sustituida por abanicos y en equipamiento médico deteriorado sin mantenimiento. Esta realidad la conoce cualquier familia que ha visitado recientemente un hospital público.

Disparidad territorial en el acceso a la salud: Las familias de zonas rurales o de escasos recursos enfrentan barreras casi infranqueables para acceder a atención médica de calidad, profundizando las desigualdades existentes.

Como partido comprometido con el bienestar de las familias dominicanas, solicitamos al gobierno trabajar con una visión clara enfocada en reducir las desigualdades existentes, implementar un plan preventivo de salud y garantizar que cada dominicano con una enfermedad crónica reciba diagnóstico temprano y tratamiento oportuno.

Frente a estos desafíos, proponemos ocho acciones concretas:

Transformación integral del sistema de salud: Priorizar la atención primaria con iniciativas comunitarias en todo el país, fortaleciendo la educación sanitaria y la promoción de hábitos saludables.

Plan Nacional para la Salud Materna: Retomar el sistema de seguimiento para cada embarazo y garantizar atención prenatal universal de calidad, con énfasis en zonas vulnerables.

Estrategia para enfermedades crónicas: Asegurar disponibilidad de medicamentos esenciales,

combinando prevención, diagnóstico temprano y seguimiento continuo para evitar interrupciones en tratamientos vitales.

Hospitales autosuficientes: Recuperar el modelo eficiente de gestión hospitalaria implementado en nuestros gobiernos, mejorando administración de recursos y calidad de servicios.

Ampliación de la cobertura básica: Expandir la protección para incluir tratamientos y procedimientos no cubiertos que representan gastos considerables para las familias, especialmente aquellos con incrementos desproporcionados.

Inversión prioritaria en salud: Incrementar progresivamente el presupuesto sanitario desde el actual 1.7% del PIB hasta alcanzar estándares internacionales.

Plan específico para adultos mayores: Desarrollar una cobertura integral para nuestros envejecientes, revisando urgentemente la ley de seguridad social.

Reabastecimiento de las Farmacias del Pueblo: Recuperar este programa para garantizar medicamentos de calidad a precios justos, solucionando el desabastecimiento actual.

La República Dominicana puede y debe aspirar a más. Nuestras familias merecen un sistema de salud digno y un modelo de desarrollo verdaderamente inclusivo. No pedimos imposibles, sino acciones probadas que funcionaron en el pasado. Estamos listos para aportar soluciones y trabajar por el bienestar de todos los dominicanos y dominicanas.

MIGRACIÓN Y SOBERANÍA

07 PLD EXPRESA PREOCUPACIÓN POR IMPUESTO A LAS REMESAS Y SOLICITA ACCIÓN DIPLOMÁTICA DEL GOBIERNO.*26 de mayo, 2025*

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el jueves pasado un proyecto de ley que incluye, además de extensas reducciones de impuestos, aumentos en el gasto de defensa y seguridad fronteriza, y recortes significativos en programas sociales como Medicaid y SNAP, un impuesto del 3.5% sobre las remesas internacionales, medida que ha generado preocupación entre los países receptores y las comunidades migrantes.

Ahora se espera que sea conocido por el Senado de los Estados Unidos para convertirlo en ley. Los líderes republicanos del Senado han manifestado su intención de aprobar la legislación antes del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos.

El Partido de la Liberación Dominicana expresa por este medio nuestra preocupación y rechazo a la posible implementación de un impuesto del 3.5% sobre las remesas enviadas desde Estados Unidos por nuestros compatriotas, por ser una medida que establece una doble tributación para nuestros compatriotas, quienes tienen que pagar impuesto sobre la renta por el ingreso percibido y después tendrían que tributar nuevamente un 3.5% para enviar las remesas a sus familiares.

Además, las remesas están destinadas a apoyar a los sectores más pobres de la población de los países receptores, aun cuando estos residan fuera de los Estados Unidos, por lo que resulta un contrasentido que una de las naciones con uno de los niveles de ingreso per cápita más alto del mundo intente fortalecer su posición fiscal a costa de la población con más carencias de naciones, en general, también empobrecidas.

La pérdida de ingresos por esta medida representaría una amenaza que debilitaría las bases económicas y sociales de cientos de miles de hogares dominicanos y profundizaría la

preocupante inequidad que persiste en nuestro país.

Las remesas no son un privilegio: son el fruto del sacrificio de quienes emigraron en busca de un futuro mejor, y hoy sostienen con su trabajo a sus familias, a sus comunidades y al país entero. Penalizarlas es una muestra de falta de solidaridad de una nación como los Estados Unidos, que siempre se ha caracterizado por su benevolencia y apoyo a los más pobres.

De implementarse este impuesto, sumado a una comisión de transferencia del 7%, se podría reducir hasta en un 10.5% el ingreso neto que reciben los hogares dominicanos. En un país donde más de un millón de personas dependen directa o indirectamente de las remesas, este recorte equivale a empujar a miles de familias hacia la pobreza, frenar el consumo local y afectar negativamente la estabilidad del tipo de cambio y las reservas de divisas.

Téngase presente que la República Dominicana recibió en 2024 remesas por valor de US\$10,756 millones. De esa cantidad, el 85% vino de Estados Unidos. De manera que una reducción de un 10.5% significaría que el país perdería US\$960 millones en ingresos netos que antes llegaban a los hogares, cubriendo en muchos casos gastos escolares, de salud o alimentación.

Nos preocupa la tibieza con la que el gobierno ha reaccionado ante esta amenaza. No basta con declaraciones de ocasión. Se necesita una diplomacia activa, firme y regionalmente coordinada. El país debe alzar su voz en defensa de sus ciudadanos y ciudadanas migrantes, denunciar esta injusticia fiscal y trabajar con otros países del Caribe y Centroamérica para frenar colectivamente esta ofensiva contra los derechos económicos de nuestras comunidades en el exterior.

El PLD exige al gobierno dominicano que, en el

marco de su responsabilidad de protección a todos los habitantes de la isla, abogue ante las autoridades estadounidenses para que Haití sea exonerado de estas medidas tanto las arancelarias como del impuesto a las remesas, considerando la crítica situación humanitaria que atraviesa la nación hermana. Asimismo, demandamos que el gobierno presente de manera transparente al pueblo dominicano su plan estratégico para evitar la implementación de estas medidas perjudiciales y, en caso de que sean aprobadas, cuál será su estrategia para mitigar su impacto en nuestras familias y en la economía nacional.

Desde una visión progresista, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cree fielmente que el Estado dominicano tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos donde quiera

que estén. Esto implica reducir las comisiones de transferencia, crear incentivos para el uso de canales financieros formales, y promover mecanismos para que las remesas se transformen en ahorro, inversión y desarrollo local. Implica también exigir que la comunidad internacional respete el derecho de los pueblos a sostenerse dignamente sin ser castigados por su condición migrante.

El PLD le hace un llamado al gobierno dominicano a actuar, a construir alianzas con los países hermanos de la región, y a defender sin titubeos a nuestra diáspora. Los dominicanos y dominicanas en el exterior no son una fuente de ingreso para gravar: son parte de nuestra nación, y merecen respeto, protección y gratitud.

COSTO DE VIDA, SALARIOS Y CLASE TRABAJADORA

08 PLD PROPONE MEDIDAS URGENTES PARA ENFRENTAR LA CRISIS DE LA CANASTA FAMILIAR.*02 de junio, 2025*

El Partido de Liberación Dominicana (PLD), expresa su profunda preocupación y solidaridad con la mayoría de la población dominicana, agobiada y desamparada frente a los elevados incrementos de precios de los componentes de la canasta familiar y el consecuente deterioro de la calidad de vida de las familias, sobre todo, aquellas que viven en condiciones de vulnerabilidad.

El incremento acumulado en el Índice General de Precios al Consumidor de agosto de 2020 a abril de 2025, equivalente a un 29%, no describe el profundo impacto negativo que han provocado los aumentos de precios de los bienes más perentorios para el bienestar de la población.

Un análisis de los diferentes grupos de bienes que componen la canasta familiar permite establecer que el grupo Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, el más importante para las familias más empobrecidas, se incrementó casi un 50% en el mismo período indicado.

Esto significó que el precio de los alimentos se aceleró un 68% por encima del aumento promedio de los precios de los demás bienes y servicios que componen la canasta familiar. Lo anterior evidencia que la variación general del IPC no describe el sufrimiento de una proporción importante de las familias dominicanas a consecuencia de las alzas de precios y para las que, el renglón alimentos, constituye su prioridad fundamental.

Desde diciembre de 2020 a mayo de 2025, un grupo de alimentos esenciales de la dieta básica de los dominicanos han reflejado los siguientes aumentos de precios: arroz superior, de 23.2 pesos la libra a 42.4 pesos; habichuelas roja, de 68.3 pesos la libra a 92.0 pesos; el plátano verde de 23.6 pesos la unidad a 30 pesos; el pollo fresco de 60.5 pesos la libra a 80.3 pesos; la leche, de 76.7 pesos el litro a 94.6 pesos; huevos, de 5.9 pesos la unidad a 8.6 pesos; la papa, de 30.0 pesos

la libra a 51.0 pesos; la yuca, de 19.5 pesos por libra a 29.0, la batata de

22.6 a 42.6, el ñame, de 46.7 pesos la libra a 86.9 pesos, entre otros productos, según el Ministerio de Agricultura.

Con apropiado sarcasmo y sobrada razón las familias describen los lugares de expendio de alimentos, como “la casa del terror”.

El comportamiento de los precios de los alimentos no podía ser de otra manera frente al desprecio que ha manifestado el actual gobierno por el sector agropecuario nacional y sus políticas improvisadas, expresadas en las importaciones descontroladas de alimentos que, entre otras cosas, ha desestabilizado la producción nacional del arroz, las habichuelas, las carnes de pollo y cerdo, así como la cebolla, papa y leche, entre otros, lo que a la fecha ha arruinado un porcentaje importante de productores de estos rubros.

El alza de precios de los alimentos tiene un efecto perverso sobre todo la población más vulnerable, que destina la mayor parte de su presupuesto a la compra de alimentos, al tiempo que refleja la incapacidad del gobierno para diseñar y ejecutar una política agropecuaria que garantice la disponibilidad en el mercado nacional de alimentos suficientes, en tiempo oportuno y a precios asequible para la ciudadanía.

Todos hemos visto que el gobierno ha fracasado en todos los intentos de diseños de programas dirigidos a aumentar la producción agropecuaria y reducir los precios de los alimentos. Por ejemplo: fracasó el Programa Siembra RD, Combos del INESPRES, A Comer del Campo al Colmado, entre otros.

El sufrimiento provocado en las familias por la pérdida de poder de compra causado por las alzas de precios se percibe más doloroso cuando se

analiza el salario mínimo que disponen las familias más pobres, para satisfacer su canasta familiar de bienes y servicios.

Intentando dar respuesta al innegable deterioro que se aprecia en las condiciones de vida de los dominicanos, a finales del pasado mes de febrero el Comité Nacional de Salarios elevó un 12%, efectivo a partir del mes de abril, los salarios mínimos del sector privado no sectorizado.

Desafortunadamente para las familias dominicanas más pobres, correspondientes al primer y al segundo quintil del ingreso familiar, la inflación acumulada desde febrero del 2023, fecha del último

ajuste realizado a los salarios mínimos del sector privado hasta el mes de abril pasado, alcanzó en promedio 7.5 por ciento

Esto significa que el aumento en el salario real, es decir, descontando los incrementos de precios acumulados desde marzo de 2023 hasta abril de 2025, será de apenas 4.5% en promedio o, menos, para las familias más vulnerables, monto claramente insuficiente para compensar las aspiraciones de cualquier asalariado y peor aún si este se encuentra próximo o por debajo de la línea de pobreza.

Cuando se examina el poder de compra de los salarios aprobados para la micro y pequeñas empresas de RD\$15,860.00 y RD\$17,193.00 pesos, respectivamente, que se consideran salarios representativos de las familias que forman parte del primer y segundo quintil de la distribución del ingreso, con el costo correspondiente de su canasta familiar, se observa que al mes de abril pasado la canasta del primer quintil costaba RD\$27,968.00 pesos, lo que arroja un faltante para poder adquirir los bienes y servicios de esta canasta de unos RD\$12,108.00 pesos, en el caso del salario de la micro empresas y de aproximadamente RD\$10,775.00 pesos, respecto al salario mínimo de la pequeña empresa.

El faltante o brecha al que hacemos referencia se ha calculado a partir de las estadísticas que publica mensualmente el Banco Central sobre el costo de la canasta familiar por quintiles de ingreso. Por otra parte, se hace notar que tomando como

referencia esta última información y la distribución de los ocupados por tamaño de las empresas que publica la Oficina Nacional de Estadísticas, se estima que casi un 40% de la población asalariada se ve afectada por la incapacidad del salario para satisfacer sus necesidades expresadas en la canasta familiar.

En nuestro país, el salario promedio de los 2.3 millones de dominicanos que laboran en el sector formal a diciembre de 2024 fue de 36,045 pesos, mientras el costo de la canasta familiar correspondiente a esa misma fecha para una familia del tercer quintil, que incluye un porcentaje importante de la clase media y media baja, fue de RD\$42,781 pesos.

Lo expresado en el párrafo precedente significa que para familias con un único ingreso, caso de familias con un solo empleado como frecuentemente ocurre en el país, aún si percibiera el salario promedio del sector formal, estas familias estarían viviendo con un déficit en su presupuesto mensual de casi un 20%, por lo que puede afirmarse que viven en una condición de agobio, desasosiego, como resultado de la precariedad provocada por los bajos salarios y el elevado costo de la canasta familiar.

La realidad previamente descrita profundizará el estado de desilusión, de desesperanza que manifiestan amplios sectores de la ciudadanía en diferentes estudios llevados a cabo sobre la situación actual del país.

Mientras la población sufre el alto costo de los alimentos como resultado de los desaciertos en la política agropecuaria de una administración inepta e incapaz de conectar con las necesidades de la población, el gobierno continúa su endeudamiento desbocado para financiar parte de su gasto dispendioso en salarios para empleados pocos productivos, publicidad y otros gastos superfluos.

Considerando la triste realidad que golpea y baja la calidad de vida de la mayoría de las familias dominicanas, el PLD propone las siguientes medidas:

1. Diseñar y ejecutar una política de apoyo efectiva a la producción agropecuaria nacional, que garantice la implementación de tecnologías

para aumentar la productividad de los rubros agropecuarios.

2. Implementar programas dirigidos a aumentar la productividad laboral de los trabajadores dominicanos, con el propósito de contribuir a incrementar los ingresos de las familias dominicanas.
3. Ejecutar un programa de desarrollo de infraestructuras rurales, que incluya construcción de presas, canales de riego, rehabilitación de caminos vecinales e

interparcelarios, para aumentar las áreas de producción y reducir los costos de transporte de insumos y cosechas

El PLD no se conformará con denunciar esta crisis; presentamos soluciones concretas porque las familias dominicanas merecen un gobierno que trabaje para ellas, no contra ellas. Nuestro compromiso con el pueblo dominicano es inquebrantable y trabajamos para que se pueda devolver la esperanza a cada mesa dominicana y construir un país donde trabajar sea suficiente para vivir con dignidad.

AGROPECUARIA Y PRODUCCIÓN NACIONAL

09 EL PLD PROPONE MEDIDAS PARA RESCATAR EL BANANO DOMINICANO DEL COLAPSO.

09 de junio, 2025

El Partido de la Liberación Dominicana se presenta ante la sociedad dominicana para denunciar la grave crisis que atraviesa la producción bananera nacional, la cual es el resultado directo de la incapacidad gerencial, inoperancia y abandono del actual Gobierno hacia uno de los sectores más importantes del agro dominicano.

Se trata del rubro agropecuario que, hasta hace unos años, era el principal cultivo de exportación de la República Dominicana.

En apenas tres años, los últimos, las exportaciones de banano se han desplomado en un 44%, pasando de US\$363 millones en el 2021 a sólo US\$202.7 millones en el pasado año 2024. Esta tendencia catastrófica continúa en el 2025, llevando a la desaparición de cerca de 500 productores exportadores, equivalente al 20% del total, reduciendo la producción semanal de 400,000 cajas a casi la mitad, al tiempo que se han perdido 30 mil empleos.

El rendimiento por tarea cayó dramáticamente, de 2 cajas a solo 1.2 caja, mientras los costos de producción se han disparado en un 30%.

En este contexto, los productores enfrentan pérdidas millonarias, pues los ingresos actuales de ventas no logran compensar los costos y no existe ningún respaldo gubernamental, a pesar de ver cómo cargamentos completos son rechazados en los mercados de destino por la falta de mantenimiento en la cadena de frío, pérdidas que recaen directamente sobre los productores, sin respuesta del gobierno.

Esos mismos funcionarios insensibles, se ufanan de un supuesto aumento en la producción de bananos. Sin embargo, son sus propias cifras que los desmienten.

Y es que, al disminuir las exportaciones, en volúmenes tan significativos, el mercado local

debía estar saturado y los precios por el suelo, pero ha sido todo lo contrario, en ocasiones hasta se han registrado escasez que provocaron alzas al consumidor dominicano.

La crisis actual tiene responsables claros.

AGRODOSA mantiene una deuda superior a los RD\$170 millones de pesos con productores que pagaron religiosamente sus pólizas y fueron afectados por tornados en el 2024. A pesar de las promesas, el Gobierno ha ignorado sistemáticamente estos reclamos legítimos.

La falta de financiamiento para renovar plantaciones e introducir tecnologías ha dejado en el abandono a pequeños y medianos productores, mientras las nuevas normativas europeas exigen inversiones, especialmente relacionadas con inspecciones y auditorías, que el sector no puede costear sin apoyo estatal.

A ello se suma una infraestructura vial en estado crítico, con caminos inservibles y sin mantenimiento, lo que multiplica las pérdidas por transporte. Igualmente, persiste la falta de respuesta ante los daños y deficiencias en el sistema de riego, lo que agrava aún más la situación del sector productivo bananero.

La ausencia de un plan fitosanitario nacional ha permitido que plagas como el ácaro y la sigatoka negra devasten los cultivos, manchando los frutos y acelerando su maduración. Como resultado, muchos cargamentos son rechazados en Europa, y las exportaciones de banano orgánico, donde fuimos líderes mundiales, han caído un 40%.

La sequía obliga a irrigar las plantaciones cada 10 días, pero el alto costo del combustible permite hacerlo solo cada tres semanas, reduciendo dramáticamente la productividad.

Gran parte de los productores enfrenta un clima

de inseguridad e incertidumbre, sabiendo que, ante estos fenómenos atmosféricos, no contarán con la protección del gobierno. Esto se traduce en pérdidas económicas significativas y un mayor endeudamiento.

La República Dominicana ocupaba el puesto 21 entre los países productores de banano y era reconocida por la FAO como el principal productor caribeño de banano orgánico, controlando el 55% de la producción mundial. Hoy, esa realidad cambió dramáticamente: de 450 contenedores semanales en el 2021 hemos caído a apenas 260.

La situación laboral, agravada por la mala gestión gubernamental con los trabajadores haitianos, incluidos aquellos con documentación regularizada, ha profundizado la escasez de mano de obra en las fincas, completando el cuadro de abandono sectorial.

El PLD exige al Gobierno que asuma su responsabilidad y actúe inmediatamente ante esta situación; en este sentido, proponemos las siguientes medidas:

La implementación del “Proyecto Rescate de la Competitividad de la Industria del Banano” con financiamiento real para renovación, introducción de tecnologías y mantenimiento de plantaciones.

El pago inmediato de los RD\$170 millones adeudados por AGRODOSA. Además, es necesario destinar recursos suficientes para dar una respuesta rápida y efectiva ante los daños ocasionados por los frecuentes fenómenos naturales.

Establecer mecanismos aduanales ágiles que eviten contenedores varados, lo que interrumpe la cadena de frío.

Otorgar préstamos a bajas tasas de interés y ampliar los plazos a los productores afectados por eventos climáticos.

Reconstruir los caminos vecinales que permiten el acceso a fincas y reducir las pérdidas por transporte.

Diseñar e implementar un plan sanitario nacional integral, para combatir las plagas que afectan la calidad y producción del banano.

Conformar un equipo técnico multidisciplinario para apoyar a los productores en el cumplimiento de estándares internacionales requeridos por los mercados destino de las exportaciones de banano.

Igualmente, es fundamental apoyar a los productores ante inspecciones europeas excesivas. La República Dominicana no puede permitir que el banano, sector estratégico para la economía rural y las divisas nacionales, colapse por la indiferencia gubernamental.

El PLD mantiene su compromiso histórico con el campo dominicano y con todos los productores que hoy enfrentan y exigen acciones concretas antes de que sea demasiado tarde.

Es hora de que el Gobierno responda con la urgencia, responsabilidad, sensibilidad y eficacia para evitar el colapso total de uno de los sectores más importantes de la economía agrícola nacional, como es el banano.

La competitividad perdida se recupera con políticas efectivas, no con promesas vacías.

MIGRACIÓN Y SOBERANÍA

10 LA SECRETARÍA DE DOMINICANOS EN EL EXTERIOR DEL PLD EXPRESA SU PREOCUPACIÓN Y RESPALDO FIRME A LOS DOMINICANOS RESIDENTES EN PUERTO RICO ANTE LA SITUACIÓN MIGRATORIA.

16 de junio, 2025

La Secretaría de Dominicanos en el Exterior del PLD, expresa su preocupación y respaldo firme a la comunidad dominicana radicada en Puerto Rico debido a la imperante situación migratoria que viven y el agravante estado de indefensión por parte de las autoridades consulares dominicanas acreditadas en Puerto Rico y los diputados del PRM en el exterior, razón por la cual, los dominicanos se ven en la necesidad de acudir a los medios de comunicación masiva y redes sociales para denunciar la situación.

Ante el estado de intranquilidad en que se hallan los dominicanos radicados en Puerto Rico, consideramos que es injusta e innecesaria la indiferencia y el menosprecio por la gente que evidencia el gobierno presidido por Luis Abinader, sus autoridades diplomáticas, las consulares allí acreditadas y, los diputados del PRM en el exterior, al no asumir la responsabilidad que tienen los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de garantizar y velar por el derecho a la dignidad humana, acorde con el Artículo 38 de la Constitución Dominicana que indica: “El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”. Por tanto, el gobierno dominicano y los diputados del PRM en el exterior, están en la obligación de garantizar este derecho constitucional de los dominicanos, sin importar donde residan, porque la dignidad humana es un valor intrínseco de la persona y es un principio fundamental que sustenta y permite la construcción de todos los demás derechos humanos.

Respetamos el derecho soberano que tienen las autoridades federales y del gobierno de

Puerto Rico para trazar las políticas migratorias en sus territorios, pero instamos al gobierno del presidente Luis Abinader a que instruya inmediatamente a sus funcionarios diplomáticos y consulares para que asistan y colaboren con los dominicanos afectados. Asimismo, demandamos que los diputados del PRM en el exterior, ejerzan la función de representar a los dominicanos en el exterior y se sensibilicen con las necesidades y demandas de nuestros connacionales en el exterior.

La Secretaría de Dominicanos en el Exterior del PLD observa la necesidad de fortalecer el cuerpo consular dominicano acreditado en Puerto Rico y otras demarcaciones del exterior, que son receptoras de grandes cantidades de nuestros conciudadanos, por lo que, le recomendamos al gobierno dominicano que les dote de canales de mediación eficaces y personal jurídico con capacidades técnicas jurídicas en la materia.

Igualmente, solicitamos al gobierno dominicano que aproveche los espacios multilaterales regionales, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC), para abogar por la protección de la dignidad humana y los derechos de los migrantes caribeños.

Es necesario que los legisladores del PRM en el exterior conformen equipos jurídicos locales en las demarcaciones y se auxilien de organizaciones de los derechos humanos y de aquellas organizaciones que trabajan con derechos de los migrantes para impulsar un plan de apoyo jurídico y psicosocial para los dominicanos que se encuentran en sus respectivas demarcaciones y necesiten este tipo de ayuda.

La Secretaría de Dominicanos en el Exterior del PLD reitera su compromiso con la promoción,

defensa y mejora de las condiciones de vida de los dominicanos en el exterior, cuyos aportes económicos, sociales y culturales han sido fundamentales para el desarrollo nacional, por eso, no podemos permitir que el gobierno dominicano y sus legisladores en el exterior sigan abandonándoles a su suerte, frente al endurecimiento de las políticas migratorias de los países receptores de nuestros conciudadanos.

A la comunidad dominicana en el exterior les decimos: no están solos, la Secretaría de Dominicanos en el Exterior del PLD los acompaña y eleva su voz en todos los espacios necesarios para defender sus derechos y su dignidad humana,

por cuanto, todos los miembros del Partido organizados en el exterior, deben estar orientados al servicio y con actitud positiva para viabilizar y canalizar las inquietudes o situaciones que se presenten y afecten a nuestros conciudadanos en sus respectivas demarcaciones.

Finalmente, queremos citar una frase de George Washington que dice: “La perseverancia y el espíritu han hecho maravillas en todos los tiempos”. En este sentido, les invitamos a que: ¡Todos juntos, continuemos trabajando por un Estado más fuerte y solidario, capaz de proteger a todos los hijos de esta patria, dentro y fuera del territorio!

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

11 **PLD PROPONE MEJORAS A PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS. APUESTA A UNA REFORMA QUE FORTALEZCA EL DESARROLLO LOCAL Y LA COMPETITIVIDAD.**

23 de junio, 2025

El Partido de la Liberación Dominicana, comprometido con el desarrollo sostenible, la libertad de empresa y el bienestar de la población dominicana, comparece hoy ante los medios de comunicación para fijar su posición responsable, clara y firme en torno al proyecto de modificación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobado en el Senado y que actualmente está en discusión en la Cámara de Diputados.

Somos conscientes de que nuestro país necesita fortalecer su modelo de gestión integral de residuos sólidos, ampliar la inversión pública en los municipios y enfrentar el grave problema de la contaminación ambiental. En ese sentido, aplaudimos toda iniciativa que busque dotar a los ayuntamientos de herramientas para cumplir su rol y avanzar hacia un modelo en donde los productos se reutilicen, reparen, reciclen y se devuelvan a la economía.

Sin embargo, luego de escuchar y revisar los informes técnicos de los actores involucrados y afectados con el proyecto que en este momento se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados, tal como ha sido formulado, alertamos al país que el mismo incluye aspectos que deben ser revisados y mejorados a favor del sector productivo nacional, en especial de las micro, pequeñas y medianas empresas. A su vez, se plantean elementos que comprometen la institucionalidad democrática de la descentralización y reducen el rol municipal con una centralización del poder.

Tal y como se ha aprobado, el proyecto eleva de manera desproporcionada las contribuciones que las empresas deben pagar por el manejo de sus residuos, sin haberse realizado el estudio que considere el tamaño, el rubro o la capacidad de innovación ambiental de las mismas, y así evitar

que las nuevas tasas afecten la competitividad, incrementen los costos de producción y se traduzcan en mayores precios para el consumidor final. Abogamos porque el aparato productivo sea visto como un socio clave del desarrollo nacional.

A su vez, tal y como ha presentado en un informe técnico Pro-competencia, la imposición de un relleno sanitario por región del país, o utilizado de manera conjunta por varias provincias, municipios o distritos municipales de una misma región, elimina la posibilidad de otros proveedores en una región, sin considerar la demanda, eficiencia, operatividad y costos. Además, centralizar todo el flujo de dinero y contratos en un fideicomiso nacional podría vulnerar el principio de libre competencia.

Una ley moderna de residuos sólidos debe incentivar la inversión en tecnologías limpias y en procesos de reciclaje, apoyar a las MIPYMES en su transición hacia modelos de producción sostenibles, estimular la formalización de quienes ya operan en la gestión informal de residuos, y contener una visión estratégica del desarrollo productivo y del empleo verde.

Otro aspecto que observamos —y nos preguntamos— es por qué se posterga el arranque de la recogida selectiva por los ayuntamientos. Como país, debemos movernos hacia una cultura donde el ciudadano y la empresa separen su basura, lo que facilita el proceso de reciclaje para los recicladores. Eliminar la separación de la basura en la fuente nos lleva a retroceder en vez de avanzar.

Desde nuestro partido y como fuerza política con vocación democrática, progresista y comprometida con el desarrollo nacional, proponemos lo siguiente:

Consensuar con todos los actores esta reforma antes de la aprobación final, permitiendo una revisión participativa en la cual se involucre el sector productivo, las municipalidades, los ambientalistas y la sociedad civil.

Garantizar que toda contribución empresarial sea proporcional, progresiva, basada en estudios y vinculada a metas ambientales claras y verificables, con base en estudios de generación de residuos y capacidad contributiva.

Fortalecer el rol de los municipios y la transparencia en el uso de los fondos.

Incluir medidas de incentivo, no solo de penalización, que permitan una transición justa hacia modelos sostenibles.

Establecer mecanismos de fiscalización a los recursos gestionados a través de la fiducia.

Incluir al Ministerio de Hacienda en el Consejo del

Fideicomiso, ya que esta entidad debe cuidar la sostenibilidad financiera del Estado en el mismo.

Que los contratos de gestión de residuos sólidos sean llevados a plazos razonables, para evitar vulnerar el principio de la libre competencia.

Reiteramos nuestro compromiso con una transición ecológica justa, inclusiva y sostenible, que no excluya a nadie y que impulse el desarrollo económico con responsabilidad ambiental.

La República Dominicana necesita una ley moderna de residuos sólidos, pero también necesita equidad, eficiencia, participación y visión de futuro.

Estamos a favor de una reforma sensata, democrática y eficaz, que respete los principios de libre competencia, institucionalidad, participación ciudadana y justicia social.

AGROPECUARIA Y PRODUCCIÓN NACIONAL

12 EL PLD PROPONE MEDIDAS PARA FORTALECER LA REFORMA AGRARIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.

27 de junio, 2025

El anuncio de la disolución del Instituto Agrario Dominicano constituye un caso más de improvisación y desprecio del gobierno del PRM al campo y a los productores agropecuarios dominicanos.

La improvisación se evidencia al declarar de interés público y de prioridad nacional el relanzamiento y fortalecimiento de la política de reforma agraria en la República Dominicana; a la vez que dispone la disolución del IAD, principal institución pública de soporte a la reforma agraria dominicana.

Esa decisión, carente de estudios de factibilidad, lleva gran incertidumbre a los más de 90 mil pequeños y medianos productores agropecuarios, que producen gran parte de los alimentos que se consumen en el país. Es decir, miles de productores no saben que podría pasar con el estatus jurídico de sus predios agrícolas ni los deficientes servicios que reciben del IAD.

La fusión implica un riesgo inminente de concentración de la propiedad de la tierra, resultando en mayores niveles de pobreza, desigualdad social y menor capacidad productiva del país.

Miles de productores, asociaciones, federaciones, cooperativas agropecuarias y nosotros nos preguntamos, ¿detrás de la fusión se esconde eliminar la provisionalidad de la asignación de terrenos propiedad del IAD y repartirlos sin limitaciones entre allegados del partido de gobierno? ¿También nos preguntamos, el interés en la fusión es apropiarse de terrenos del IAD con vocación turística y otras denominadas “tierras raras”?

Además, el traspaso de las funciones del IAD al Ministerio de Agricultura aumenta el nivel de incertidumbre, puesto que ese Ministerio ha demostrado altos niveles de ineficiencia respecto

a los servicios de asistencia técnica, protección del país de la entrada de nuevas plagas y enfermedades.

La entrada de la Peste Porcina Africana y sus terribles consecuencias para los productores y el país, al ser declarada endémica en República Dominicana, la entrada del Acaro del Banano, el Trip de las Flores del Frijol, son ejemplos del fracaso de la política agropecuaria del gobierno.

Son estas las razones que han motivado y obligado a diferentes grupos representativos del sector de reforma agraria a denunciar y manifestar públicamente su oposición total al proyecto de fusión del IAD con el Ministerio de Agricultura. Esta es una causa justa y válida de los productores reformados, que el PLD asume y defenderá junto a ellos en todos los escenarios necesarios.

Asumir esta causa no es un asunto nuevo, pues recordemos la visión de desarrollo de la Reforma Agraria iniciada en el año 1963 por nuestro líder fundador, el Profesor Juan Bosch. Para el PLD, la Reforma Agraria constituye un instrumento de promoción del desarrollo integral de la población rural, de la equidad social y una política fundamental

del Estado Dominicano para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo dominicano.

En ese sentido, nosotros, en el PLD, entendemos que la política de reforma agraria debería ser fortalecida a través de las siguientes medidas:

1. Cumplir con los aspectos establecidos en la Constitución de la República y las leyes, específicamente la Ley No. 5879 de Reforma Agraria, respecto al objetivo de la política social del Estado que se refiere a la promoción de la reforma agraria y la integración efectiva de la población campesina al desarrollo nacional.

2. Provisión de asistencia técnica de alta calidad a los productores de reforma agraria.
3. Capacitación especializada en innovaciones tecnológicas, que contribuyan a incrementar la productividad de los rubros agropecuarios.
4. Fomento a la formación de cooperativas y empresas agropecuarias, dirigidas a lograr una mayor participación de los productores en los procesos de transformación y comercialización de sus productos.
5. Del mismo modo, es fundamental el apoyo a la introducción de tecnologías que aumenten la rentabilidad de los productores agropecuarios nacionales, como sistemas de riego modernos, mecanización agrícola y manejo postcosecha de productos.
6. Igualmente importante es continuar la política de titulación de terrenos del Estado implementada por el gobierno del PLD, a fin de garantizar seguridad jurídica y acceso a crédito formal a los productores de reforma agraria.

Es con medidas como las antes mencionadas, que se refleja el nivel de prioridad, compromiso y apoyo a los productores, para aumentar su rentabilidad y garantizar la producción abundante de alimentos para el pueblo dominicano. La reforma agraria no es patrimonio de ningún gobierno o partido, es un patrimonio de más de 90 mil familias, del pueblo dominicano para el desarrollo productivo del país.

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

13 PLD PRESENTA PROPUESTAS PARA SOLUCIONAR CRISIS DEL SENASA.

08 de julio, 2025

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresa su profunda preocupación por el progresivo deterioro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), entidad que por más de dos décadas fue el principal garante del aseguramiento público en salud y un modelo de eficiencia, cobertura, calidad y compromiso social en la República Dominicana.

Particularmente a través del Régimen Subsidiado, SeNaSa amplió la cobertura sanitaria y protegió derechos sociales básicos para millones de dominicanos en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, el estado actual de la institución presenta signos alarmantes de debilitamiento estructural, financiero y operativo que comprometen su misión y sostenibilidad.

Entre 2020 y 2024, las reservas técnicas — instrumento esencial para garantizar la estabilidad financiera— se redujeron en más de RD\$1,600 millones, mientras el déficit de liquidez frente a obligaciones acumuladas superó los RD\$3,785 millones al cierre de 2024. Para enfrentar este desequilibrio, el gobierno recurrió a una transferencia extraordinaria del Estado superior a los RD\$2,100 millones, lo que evidencia la falta de planificación y una gestión deficiente del aseguramiento público.

En 2025, esta situación se ha agravado. Miles de afiliados denuncian retrasos injustificados, trabas burocráticas y dificultades para acceder a medicamentos y servicios médicos. La imposición de un nuevo esquema de validación presencial ha generado largas filas, colapsos en el Call center, maltrato en oficinas y caos en farmacias, afectando especialmente a personas envejecientes y con condiciones de salud limitantes.

Los médicos, clínicas y laboratorios también sufren las consecuencias del colapso financiero. Se reportan retrasos en los pagos que superan los seis meses y una deuda acumulada de más de RD\$3,000 millones en el Régimen Subsidiado. A esto se suman glosas injustificadas, auditorías

interminables y tácticas dilatorias que lesionan los derechos de los prestadores de servicios y, en última instancia, de los propios pacientes.

Este panorama contrasta de manera dramática con el desempeño de SeNaSa antes del año 2020. En 2019, la institución contaba con más de 4.9 millones de afiliados, procesó más de 60 millones de atenciones médicas y autorizó servicios por más de RD\$22,900 millones, con un crecimiento interanual del 17.6 %. Su gestión fue reconocida con certificaciones ISO, el Premio Nacional a la Calidad y premios internacionales.

Ante este escenario, el PLD alerta que SENASA enfrenta una situación crítica que requiere ajustes urgentes, técnicamente sustentados y políticamente viables. No se trata de alarmar, sino de actuar con responsabilidad para evitar el colapso de una instancia esencial para la salud y calidad de vida de millones de dominicanos y dominicanas

Desde esta visión, nuestra organización propone:

1. Simplificación de procesos administrativos: Eliminar requisitos presenciales innecesarios y habilitar canales digitales que permitan representación autorizada y entrega a domicilio para afiliados con movilidad reducida.
2. Pago justo y oportuno a prestadores: Establecer un sistema transparente que evite morosidades y glosas arbitrarias, garantizando continuidad y calidad en la atención médica.
3. Fortalecimiento institucional: Reforzar las capacidades internas del SeNaSa en evaluación actuarial, auditoría médica y gestión del gasto.
4. Financiamiento estructural: Que el Consejo Nacional de Seguridad Social implemente progresivamente un per cápita ajustado por riesgo, de forma que el financiamiento responda al perfil epidemiológico y demográfico de la población cubierta.

5. Gobernanza técnica y transparente: Consolidar un sistema de dirección autónoma, con vigilancia independiente, uso eficiente de los fondos y sin clientelismo.
6. Reforma del sistema de seguridad social: Avanzar con responsabilidad en la reforma estructural prometida al sistema, actualizando el Plan de Servicios de Salud (PDSS), mejorando el recaudo, combatiendo la informalidad laboral y fortaleciendo la Red Pública de Servicios de Salud.

El PLD demanda al Gobierno que asuma su responsabilidad con la salud del pueblo dominicano y actúe con urgencia para recuperar el nivel de

excelencia que hizo de SeNaSa un orgullo nacional. Las recientes declaraciones del presidente de la República, quien afirmó que “nadie usaba SeNaSa antes del 2020”, resultan inaceptables y tergiversan la historia de una institución que por más de una década fue referente de buena gestión pública.

Esta no es una propuesta política ni coyuntural. Son propuestas técnicas, serias y socialmente responsable. Nuestro compromiso es con una seguridad social digna, inclusiva y sostenible, basada en la experiencia de Estado y el respeto por los derechos fundamentales de nuestra gente.

MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS

14 POR UNA MOVILIDAD CON DIGNIDAD: PLD PRESENTA SOLUCIONES.

14 de julio, 2025

Distinguidos miembros de la prensa,

El Partido de la Liberación Dominicana comparece hoy ante los medios de comunicación para fijar su posición responsable y firme, en lo referente a la gestión del tránsito, el transporte, la movilidad y la seguridad vial, las cuales son fundamentales para el desarrollo económico y social de un país e impactan profundamente en la vida de las personas tanto a nivel individual como colectivo.

La situación actual es preocupante y ha alcanzado niveles críticos. Lo que hoy tenemos es un caos vehicular sin precedentes y un plan que no mejora los problemas estructurales existentes. El impacto en la calidad de vida es notable. El tiempo promedio que una persona puede pasar en el tráfico es alrededor de una hora y catorce minutos, lo que conlleva un consumo excesivo de combustible, elevados niveles de contaminación y un impacto directo en la salud de los ciudadanos. Sin infraestructuras adecuadas, el país ve limitada su capacidad de crecimiento afectando la competitividad y la calidad de vida de los habitantes. De hecho, estudios demuestran, que los tiempos de desplazamiento prolongados reducen la eficiencia laboral.

En el caso de los accidentes de tránsito, cada día las calles, avenidas y carreteras de la República Dominicana se convierten en escenario de tragedias que se pueden evitar. Los accidentes de tránsito que cobran vidas, y dejan cicatrices imborrables en las familias dominicanas, constituyendo otro grave problema de salud. Según las estadísticas del observatorio permanente de seguridad vial (OPSEVI), en el año 2024 fallecieron 3,114 personas en colisiones viales, lo que, en promedio, equivale a una persona cada tres horas.

Las mismas estadísticas revelan que ocurrieron 14,179 accidentes, afectando a 19,960 personas. La movilidad y las lesiones causadas por el tránsito representan una pesada carga, no sólo para la

economía del país, que cada año se estima un gasto promedio de 2.1 a 2.5 del PIB para cubrir los daños a la salud, y a la propiedad pública y privada, sino también, representan una carga para los hogares que ven reducida su productividad laboral y aumentado el presupuesto destinado para la salud. La pérdida de quienes ganaban el sustento y el costo añadido de atender a los familiares discapacitados, sumerge a muchas familias en la pobreza.

Hemos visto continuas promesas incumplidas en el tema de movilidad, como la construcción de 20 edificios para parqueos, que fueron prometidos en el año 2021, a través del fideicomiso Parquéate RD y de los cuales, a la fecha, solo han construido dos. En el 2023 se prometieron trenes y la construcción de 3 terminales de autobuses y estos se han quedado en promesas. Y actualmente se ha iniciado un plan incompleto que no solucionará el problema existente. Ante este panorama desalentador, y con la finalidad de avanzar hacia un sistema de transporte colectivo masivo y seguro, el PLD propone:

1. Descongestionar el Gran Santo Domingo reactivando y construyendo terminales interurbanas:

Finalizar la construcción de las terminales de autobuses en las estaciones de Mamá Tingó y Los Alcarizos.

Iniciar la Terminal de 6 de noviembre

2. Diseñar y edificar la Terminal de la Carretera Sánchez
3. Poner en funcionamiento la Terminal del Este
4. Dar continuidad a la expansión del Metro de Santo Domingo e implementar un programa de mantenimiento preventivo del Metro y adquirir nueva flota de vagones para cubrir la demanda actual.

5. Establecer políticas públicas que coordinen la entrega y distribución de mercancías en horario nocturno (9:00 p.m. – 6:00 a.m.), descongestionando las arterias viales en horas pico.
6. Garantizar la plena aplicación de la Ley 63-17, priorizando la voluntad política necesaria para dotar de semáforos inteligentes, cámaras de monitoreo y sanciones efectivas.
7. Integrar de manera permanente la materia de seguridad vial en todos los niveles del sistema educativo, formando ciudadanos responsables desde la infancia.
8. Lanzar campañas sociales de concienciación que promuevan el respeto a las normas de tránsito y un cambio de conducta en conductores y peatones
9. Regular el crecimiento del parque vehicular — con especial énfasis en motocicletas.
10. Rediseñar y revisar carreteras, identificando los puntos de mayor riesgo para dotarlos de: bordes audibles, iluminación adecuada, señalización horizontal y vertical, control de vegetación, recuperación del derecho de vía
11. Proteger al peatón, ausente de todas las medidas de este gobierno, mediante la recuperación de aceras y espacios públicos ocupados, instalación de cruces inteligentes, mejoras en el entorno e iluminación

Estas propuestas combinan rigor técnico con un compromiso real con la ciudadanía: al adoptarlas, transformaremos nuestra movilidad en un servicio eficiente, seguro y centrado en las personas, por lo que exhortamos al gobierno a presentar un verdadero plan integrado de movilidad, Transporte y la Seguridad Vial, pensando en el bienestar de la gente.

AGROPECUARIA Y PRODUCCIÓN NACIONAL

15 PLD PRESENTA MEDIDAS URGENTES PARA PROTEGER A LOS PRODUCTORES Y LA PRODUCCIÓN ARROCERA.

21 de julio, 2025

En el Partido de la Liberación Dominicana creemos en un país donde cada dominicano y dominicana prospere desde el campo hasta la ciudad; por eso defendemos con firmeza la estabilidad y el bienestar de nuestros productores de arroz quienes en este momento enfrentan serias dificultades para comercializar su producción.

El arroz no es cualquier cosa en República Dominicana. Es la base de la alimentación diaria de todos nosotros y a cuyo cultivo se dedican cerca de 33 mil productores en 21 provincias del país y por esta razón durante la gestión del PLD apoyamos el sector con firmeza y determinación, logrando desarrollar dos nuevas variedades de arroz, rehabilitar miles de kilómetros de caminos en las zonas arroceras, el dragado del río Yuna para evitar inundaciones y más de 8 años de absoluta estabilidad y crecimiento sostenido.

Sin embargo, en este momento vemos con mucha preocupación como las importaciones pasaron de 495,872 quintales en 2019 a 4,714,827 quintales en 2024, saturando los inventarios de molinos y factorías y dejando sin salida la cosecha nacional. Es por ello por lo que distintos líderes productores y asociaciones de productores, como por ejemplo la asociación de productores de arroz de la provincia Montecristi, connotados productores de Valverde, El Bajo Yuna y de otras zonas del país, han presentado denuncias públicamente.

Mientras el presidente de la República se ha comprometido en dos actos de rendición de cuentas a proteger la producción nacional arroceras, y el gobierno se ufana en decir que ha mejorado la seguridad alimentaria, en la práctica ha hecho todo lo contrario. Las importaciones de arroz pasaron de 9,7 millones de dólares en 2019 a 154,5 millones en 2024, lo que supone un incremento de casi 1,500 %, es decir, un crecimiento de 15 veces respecto al nivel de hace cinco años, aumentando a su vez el déficit

comercial agropecuario. Y nosotros, al igual de los productores nacionales nos preguntamos, ¿a quién está favoreciendo el gobierno con esos permisos de importación?

Sumado a esto, el resultado ha sido que el precio del arroz selecto en colmados del país pasó de 26 pesos por libra en el año 2019 a 47 pesos por libra. Un aumento de 21 pesos por libra, equivalente a 80.7%, evidenciando de nuevo como la falta de visión, planificación, y gerencia gubernamental, afecta negativamente un sector de tanta importancia y la canasta básica familiar.

Hoy, acompañamos a los productores y al sector en sus justos reclamos, porque el PLD siempre ha estado al lado de ellos y al lado del pueblo. Y considerando la presente amenaza de ruptura de la estabilidad del sector y el compromiso de nuestro partido en defender las causas nacionales, el PLD propone la ejecución urgente de las siguientes medidas:

Controlar la competencia desleal y adoptar mecanismos transparentes de importaciones de arroz, garantizando el control para situaciones comprobadas de desabasto, autorizadas en el marco de la Comisión Nacional Arroceras. Esto debe ejecutarse por el resto del presente año 2025.

Restablecer la subasta pública de permisos de importación, siendo este el mecanismo más transparente que pueda existir para la asignación de estos permisos y activarla únicamente cuando sea necesario, como instrumento para asegurar la estabilidad de precios y el correcto funcionamiento de toda la cadena de distribución.

Estabilidad de precios. Garantizar el cumplimiento estricto de la banda de precios establecidos por la Comisión Nacional Arroceras, para evitar cambios en los precios del arroz que afecten al productor y consumidor dominicano.

Fortalecimiento de la pignoración. Aumentar el presupuesto destinado a la pignoración del arroz, con el propósito de lograr la recepción de la cosecha, el pago en tiempo oportuno a los productores y la participación de varias entidades bancarias.

Proponemos formalizar estas iniciativas en un acuerdo tripartito —productores, industriales y autoridades— bajo el auspicio de la Comisión Nacional Arrocera, de modo que se garantice la

recepción oportuna de la cosecha de segunda etapa y se fortalezca la estabilidad del sector, asegurando la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestra nación.

El PLD reitera su firme compromiso con los hombres y mujeres que cultivan el futuro de la República Dominicana. No están solos: seguiremos a su lado, defendiendo sus derechos y trabajando unidos para convertir sus aspiraciones en realidad.

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

16 **PLD DENUNCIA COLAPSO AMBIENTAL EN RÍOS OZAMA E ISABELA: "LAS PROMESAS DE SANEAMIENTO SE AHOGARON EN LA INACCIÓN GUBERNAMENTAL".**

28 de julio, 2025

El Partido de la Liberación Dominicana, fiel a su compromiso histórico con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, comparece hoy ante ustedes para alzar la voz por nuestros ríos, nuestros ecosistemas y las comunidades que sufren las consecuencias del abandono gubernamental. Como partido responsable que siempre ha puesto el bienestar del pueblo dominicano por encima de cualquier interés particular, no podemos permanecer en silencio ante el colapso ambiental que vive el Gran Santo Domingo.

A través de nuestra Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hemos documentado lo que consideramos una traición a los compromisos ambientales asumidos por el actual gobierno.

Hace pocos días recorrimos las márgenes de los ríos Ozama e Isabela. Lo que encontramos confirma lo que pescadores, comunitarios y ambientalistas han venido denunciando durante meses: las promesas del presidente Luis Abinader en materia ambiental simplemente no se han cumplido.

Escuchamos a quienes viven esta tragedia día a día y encontramos:

Ramón Antonio Reyes, de la Asociación de Pescadores del Río Isabela, nos dijo textualmente: "Aquí el vertedero nos tiene el río totalmente contaminado, que no podemos trabajar. Está contaminada el agua, con un agua negra".

Bienvenido Montilla, pescador con más de 20 años en Puerto Isabela, fue más directo: "Lamentablemente, esto no tiene dolencia de nadie. Ese vertedero tiene dos cañas que desembocan aquí, que cuando tiran esa agua negra, este río se pone color chocolate y los peces los mata".

Gerónimo López, pescador de La Ciénega, señaló algo igual de grave: "Este interceptor lo pusieron aquí para reciclar plástico, pero yo tengo tiempo que no veo eso en función. Prácticamente no está haciendo nada. Tiene como ocho o diez meses" sin operar.

Pero hay algo aún más revelador. Según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística, publicados en junio pasado, el presupuesto para reducción de la contaminación se desplomó en un 54.89 por ciento.

De ochocientos ochenta y tres millones de pesos en 2023, bajó a solo trescientos noventa y ocho millones en 2024. Esto no es casualidad. Es la evidencia clara de dónde están las verdaderas prioridades de este gobierno.

Mientras tanto, el gobierno abandonó por completo la ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del Gran Santo Domingo. Especialmente el subsistema La Zurza-Mirador Norte, que estaba diseñado precisamente para interceptar y tratar las aguas residuales antes de que lleguen al río Isabela.

Y, por si fuera poco, documentamos algo que raya en lo criminal: el vertido ilegal de escombros en los Humedales del Ozama, con participación de vehículos oficiales de la Alcaldía de Santo Domingo Este, operando a plena luz del día.

Todo esto ocurre ante la mirada indiferente de las instituciones que deberían hacer cumplir la ley.

Frente a este panorama desolador, el PLD alza la voz junto al pueblo dominicano para proponer lo siguiente:

La protección efectiva de los humedales y riberas del Ozama, con la detención y sanción inmediata de rellenos ilegales.

La restitución y ampliación del presupuesto público ambiental para la reducción de la contaminación, saneamiento ambiental y ordenación de aguas residuales.

Retomar la implementación del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del Gran Santo Domingo, con prioridad en el subsistema La Zurza–Mirador Norte.

Incorporar esfuerzos para acelerar el cierre técnico del Vertedero de Duquesa con especial atención a los lixiviados vertidos al río.

Reactivar el programa de saneamiento de cañadas que descargan directamente en el Ozama e Isabela, iniciado durante los gobiernos del PLD.

Sancionar ejemplarmente a los responsables del vertido ilegal de residuos sólidos mediante camiones cisterna sépticos.

Reactivar la operación del Interceptor y la eliminación definitiva de los barcos abandonados.

Como dijimos cuando denunciemos la situación del río Nizao el pasado 5 de junio, y como hemos visto con los casos del Jardín Botánico y el centro olímpico: los árboles no votan, pero protegen la vida. Los ríos no hablan, pero gritan con cada litro de agua contaminada. Y el pueblo sí tiene voz, y la está usando.

El Partido de la Liberación Dominicana estará justo al lado del pueblo dominicano, defendiendo las mejores causas sociales y ambientales. No permitiremos que las promesas de saneamiento sigan ahogándose en la inacción gubernamental.

EDUCACIÓN Y JUVENTUD

17 PLD DENUNCIA COLAPSO DEL SISTEMA EDUCATIVO Y PROPONE PLAN DE EMERGENCIA.

04 de Agosto, 2025

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fiel a su compromiso histórico e inquebrantable con la educación dominicana, presenta hoy ante la nación datos irrefutables que demuestran el grave deterioro del sistema educativo durante los últimos cinco años de gestión gubernamental.

Cada aula construida, cada maestro formado y cada estudiante matriculado son los pilares sobre los cuales se edifica el futuro de nuestra patria. Por ello, no podemos permanecer en silencio ante lo que consideramos una emergencia nacional que afecta directamente a cientos de miles de familias dominicanas debido a la improvisación.

A solo 15 días del inicio del año escolar 2025-2026, miles de padres y madres dominicanas no saben dónde matricular a sus hijos. Esta no es solo una crisis administrativa: es el rostro del abandono que ha sufrido la educación en nuestro país. Las madres trabajadoras ya no saben qué hacer con sus hijos en las tardes. El retroceso al sistema de dos tandas significa el regreso de miles de niños a las calles, destruyendo años de progreso en protección integral de la niñez.

El gobierno que prometió un “cambio” ha reducido la matrícula pública de 2,058,675 estudiantes en el 2020 a solo 2,003,097 en el 2024; en este momento; con apenas 146,107 nuevos estudiantes en Jordana Extendida en 5 años, una cifra vergonzosa comparada con el 1 millón 221 mil que incorporó la gestión del PLD al sistema; los que tienen Jornada Escolar Extendida, ven amenazados estos logros porque la falta de aulas está llevando a las autoridades a volver al sistema de dos tandas en muchos recintos escolares, debido a la falta de visión, gerencia y adecuada planificación.

El nuevo año escolar iniciará con malas condiciones físicas de los planteles escolares, sobrepoblación

estudiantil en las aulas como consecuencia del cupo deficitario, la no disponibilidad de agua potable en más del 30% de las escuelas, la inseguridad en los planteles escolares, la falta del personal docente y administrativo, la sobrecarga laboral de los docentes, entre otros.

Con más de 10,000 aulas que dejó la gestión de Danilo Medina y el PLD en construcción, solo habían terminado 2,915 en el 2024, y para completar, el gobierno ha tenido la desfachatez de anunciar como una “novedad” que llevarían niños de 3 años a las escuelas, cuando en el 2019 el sistema público tenía matriculados 150,553 niños de 3 a 5 años, siendo esto un insulto a la población. Mientras faltan cupos, el dinero se va en contratos del INABIE que han sido cuestionados por contrataciones públicas.

Y lo más grave de todo esto es que el presupuesto destinado al Ministerio de Educación pasó de RD\$170, 105 millones de pesos en 2019 a RD 309 mil millones de pesos en el 2025, con un incremento de un 82 %, sin ningún logro, viendo retroceder todos los indicadores educativos y a esto se le agrega que no han sido capaces de aplicar la Evaluación de Desempeño docente, ya que la última fue realizada en el año 2017.

Es por ello que de manera responsable nos preguntamos, ¿qué están haciendo con los fondos destinados a la educación dominicana si todo ha empeorado? No se ven en aulas, equipamiento, formación docente, entre otros y no hay mejoras en los indicadores de la calidad educativa, que es la finalidad del sistema.

Este desorden tiene consecuencias reales

Clara improvisación que afecta todo el año escolar.

Más niños repitiendo grados porque no reciben la atención que necesitan

Mayor deserción escolar porque las familias pierden la esperanza

Retroceso en todos los indicadores educativos y estancamiento en los resultados de las pruebas nacionales.

Crecen las familias sin cupos para sus hijos, con un bajo nivel de cobertura

Aulas sin terminar por cinco años consecutivos, deteriorándose

No vamos a permitir que destruyan el futuro de nuestros niños. Es por ello que exigimos al gobierno y al ministerio de educación:

Un Plan de emergencia para garantizar cupo a todos los estudiantes.

Detener de manera inmediata los aprestos para unificar el ministerio de Educación y el de Educación Superior, ya que no han podido gestionar uno solo, por lo que la catástrofe será peor con ese mal entramado de unificación.

Transparencia total en los recursos del INABIE.

Garantizar la aplicación de la evaluación del desempeño a los maestros y maestras conforme esta establecido en la normativa.

Presentar un plan nacional de construcción escolar con un cronograma público al que podamos dar seguimiento para completar las miles de aulas que siguen abandonadas desde nuestra gestión para garantizar la cobertura en un 100 % en todos los niveles de la Educación hacia el 2030, como un compromiso del Pacto Educativo.

Cumplir con los compromisos del Pacto Educativo, que incluye la universalización de la Jornada Escolar Extendida, dando garantía de permanencia en todos los centros donde ya se habían establecido.

Las familias dominicanas no merecen esta angustia. Los niños dominicanos no merecen este abandono. El PLD seguirá luchando por cada estudiante, defendiendo a cada familia y exigiendo la educación de calidad que nuestro pueblo merece.

Porque la educación es un derecho. Porque nuestros hijos no pueden esperar más.

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

18 PLD EVIDENCIA CON DATOS DESASTRE EN EL SISTEMA DE SALUD; PROPONE MEDIDAS URGENTES DE RESCATE.

11 de agosto, 2025

El Partido de la Liberación Dominicana se suma al legítimo reclamo de la ciudadanía y de las sociedades médicas especializadas frente al preocupante retroceso institucional que, bajo la actual gestión del PRM, también ha alcanzado de forma alarmante los servicios de salud pública. Hoy, los hospitales de tercer nivel, localizados en las principales ciudades del país, exhiben un marcado deterioro en su infraestructura, calidad y cantidad de medicamentos e insumos médicos, una situación que impacta de manera directa y negativa en la calidad de la atención médica y en la dignidad con la que nuestros ciudadanos y ciudadanas reciben el servicio.

En Santo Domingo, hospitales emblemáticos en la atención de traumas, como el Hospital Dr. Darío Contreras, reportaban en 2020 una tasa de ocupación promedio para pacientes envejecientes de 9 días. Hoy, esos mismos pacientes —muchos con fracturas de cadera u otros huesos— permanecen hospitalizados en promedio 4 semanas, una prolongación que incrementa el riesgo de infecciones intrahospitalarias y, con ello, la mortalidad y morbilidad.

Este hospital, modernizado en 2015 durante la gestión del PLD con una inversión de RD\$1,700 millones, presenta ahora un deterioro alarmante, especialmente en el área de hospitalización. A finales de 2020, dichas instalaciones contaban con un sistema de climatización en perfecto funcionamiento; hoy, el servicio se presta con abanicos, una muestra palpable de la falta de mantenimiento y cuidado de la infraestructura hospitalaria.

En el caso del Hospital General Regional Dr. Marcelino Vélez Santana, que fue completamente remodelado por el PLD y entregado con 13 salas de cirugía plenamente equipadas y operativas, hoy, bajo la gestión del PRM, apenas funcionan 5 de

ellas. La causa: la falta de mantenimiento y de una política seria de conservación de la infraestructura hospitalaria a nivel nacional.

Este retroceso ha reducido drásticamente la capacidad de atención: de un promedio de 28 cirugías diarias en 2020, hoy solo se realizan alrededor de siete, dejando a cientos de pacientes en lista de espera. La situación es tan precaria que los aires acondicionados han sido sustituidos por abanicos improvisados, algunos instalados por la administración y otros llevados por los propios pacientes, atentando contra la salud, la seguridad y la dignidad tanto de pacientes como del personal médico.

A esto se suma que la sala de espera, con capacidad para apenas 10 personas, obliga a los pacientes a permanecer bajo una carpa expuestos al intenso sol, mientras el hospital acumula ya cinco años sin contar con un endoscopio para estudios diagnósticos y terapéuticos de estómago y colon. Antes de 2020, se realizaban allí unas 20 endoscopías altas y 12 colonoscopías diarias; hoy, esos procedimientos simplemente no están disponibles, condenando a los pacientes a buscar atención en el costoso sector privado o a renunciar al diagnóstico.

En el Hospital General y de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp, apenas un año después de su inauguración, todo el personal de neurocirugía presentó su renuncia debido a la falta de condiciones mínimas, equipos esenciales e insumos para ejercer su especialidad. Una infraestructura moderna quedó, así, sin la capacidad de ofrecer un servicio vital, privando a los pacientes de atención especializada. Este caso no es aislado. El Hospital Dr. Vinicio Calventi debería ser declarado en estado de emergencia sanitaria: todos sus departamentos están cerrados y el bloque quirúrgico lleva 18 meses inoperante

bajo el pretexto de una remodelación que ni avanza ni concluye. La indolencia y la falta de gestión han dejado a una comunidad entera sin un hospital operativo.

La situación es igualmente crítica en el Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y de Trasplante (CECANOT), ubicado en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar. Hasta el año 2020, este centro realizaba un promedio de 142 cirugías cardíacas anuales, siendo el único hospital público donde los pacientes más vulnerables podían acceder a estos procedimientos. Hoy, lleva más de 10 meses sin realizar una sola intervención cardíaca. Esta suspensión no solo refleja el abandono de la política sanitaria, sino un profundo desprecio hacia quienes dependen del sistema público para salvar su vida.

Aún más alarmante es la situación de los trasplantes renales: mientras antes se efectuaban en CECANOT y en el Hospital Salvador B. Gautier, ahora solo se realizan en centros privados. Los pacientes subsidiados, sin recursos para pagar estos costosos procedimientos, han quedado sin opciones reales, condenados a esperar indefinidamente o a morir en la lista de espera. Las condiciones inhumanas que presentan estos centros de salud, tanto en hospitalización como en áreas de emergencia, son una evidencia contundente del abandono y la falta de interés del gobierno.

A esta grave situación se suma el caso de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, concebida como un hospital modelo de alta complejidad para toda la región. Este complejo cuenta con un hospital materno-infantil, hospitales especializados, una torre de consultas externas, centro de trasplante, unidad de quemados, área quirúrgica, modernos servicios de imágenes médicas y un centro de anatomía patológica. Su capacidad supera las 500 camas para internamiento, además de 90 camas para emergencias y 90 para cuidados intensivos.

Dejada por nuestro gobierno prácticamente lista para operar, en cinco años esta administración no ha logrado ponerla en funcionamiento pleno. Los equipos, muchos de ellos de alta tecnología, han permanecido almacenados sin uso, deteriorándose

hasta perder la garantía, mientras la demanda de camas y servicios especializados crece día a día y no encuentra respuesta.

Como si fuera poco, el alto costo de los medicamentos y la escasez en las Farmacias del Pueblo han configurado una tormenta perfecta de desprotección para los sectores más vulnerables. Resulta inaceptable la falta de presupuesto para garantizar la distribución de medicamentos, y más grave aún, que se permitan pérdidas por vencimiento de fármacos, lo que revela de forma clara y dolorosa la ausencia de planificación y la mala gerencia que hoy caracteriza al sistema de salud pública.

Ante este evidente colapso del sistema de salud y en profunda preocupación por el bienestar del pueblo dominicano, el Partido de la Liberación Dominicana propone medidas urgentes y concretas para rescatar y encaminar el sector, garantizando atención digna, oportuna y de calidad para todos los ciudadanos.

Puesta en funcionamiento inmediata y en su totalidad de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, con un plan acelerado de apertura de todas las áreas y reactivación de equipos, priorizando especialidades críticas como cardiología, trasplantes y cuidados intensivos.

Plan Nacional de Mantenimiento Hospitalario, con presupuesto garantizado, para recuperar quirófanos, climatización, salas de espera y equipos médicos esenciales, evitando la degradación de la infraestructura.

Reactivación de cirugías de alta complejidad (cardíacas, renales, neuroquirúrgicas) en la red pública, garantizando insumos y personal especializado.

Programa nacional de abastecimiento seguro de medicamentos, con inventarios en tiempo real, compras planificadas y distribución oportuna para garantizar que las Farmacias del Pueblo siempre tengan los fármacos esenciales.

Concluir el hospital Regional San Vicente de Paul San Francisco de Macorís que fue iniciado por el PLD y en 5 años no lo han terminado.

Continuar el modelo de centros diagnósticos y atención primaria, los cuales no solo descongestionaban los hospitales de segundo y tercer nivel, sino que dotaban de mayor capacidad resolutive el primer nivel de atención.

La salud de la gente no admite más excusas e improvisaciones. Un país que descuida sus hospitales, que deja los medicamentos en almacenes mientras los enfermos no tienen acceso a ellos, y que posterga la apertura de centros vitales como la Ciudad Sanitaria, es un país que

está fallando en su deber más básico: proteger la vida.

Desde el Partido de la Liberación Dominicana reafirmamos nuestro compromiso con un sistema de salud digno, eficiente y humano. No se trata solo de inaugurar la reparación de un techo o la pintura de una emergencia, sino de poner la vida en el centro de la gestión pública, porque cada día que pasa es un paciente que no recibe atención, una familia que sufre y una vida que se pierde. Y eso, simplemente, no lo podemos permitir.

MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS

19 EL CAMBIO APAGÓ EL PAÍS: PLD PROPONE MEDIDAS URGENTES ANTE CRISIS ELÉCTRICA.*18 de agosto, 2025*

El Partido de la Liberación Dominicana acompaña al pueblo en su justa demanda de recibir el servicio eléctrico que merece y en su rechazo al abuso que se está cometiendo contra familias y negocios, con largas tandas de apagones. Aunque se quiera ocultar con propaganda y mensajes vacíos, la realidad es clara: ¡Han vuelto los apagones! Lo que el pueblo dominicano daba como un problema resuelto en el 2020, hoy regresa como un fantasma del pasado.

Cada día, las tandas son más largas, la factura más cara y la desesperación mayor. No es un fenómeno pasajero: es consecuencia de la ineficiencia del Gobierno del PRM, de su mala planificación y de su desprecio por la gente. Familias que habían vendido sus inversores porque ya no había apagones, hoy se ven obligadas a comprar velas y volver a la incomodidad de los años más oscuros. Mientras tanto, emprendedores, colmaderos, salones de belleza, talleres y pequeñas fábricas están al borde de la quiebra porque, sin electricidad, no pueden trabajar; en este sentido, hemos retrocedido a 20 años atrás.

Hoy tenemos alumnos que no pueden estudiar de noche, enfermos que dependen de equipos eléctricos y barrios enteros que ven interrumpida su vida cotidiana.

Es un abuso que el pueblo tenga que pagar la ineficiencia. Que tenga que cargar con ella, porque, además de lidiar con el alto costo de la canasta familiar, el desorden en el transporte y salarios que no alcanzan, los dominicanos y dominicanas hoy no pueden conciliar el sueño, lidiando con calor, apagones y mosquitos.

El pueblo no entiende de cuentos ni megavatios, ni tiene por qué entenderlo. Lo que sabe es que antes, con el PLD, había luz estable, y hoy, con el PRM, vive a oscuras.

El Gobierno de Abinader fracasó en su deber de mantener esa conquista social. Lo único que ha traído el “cambio” es un aumento de la tarifa eléctrica en más de un 30% y un servicio más deficiente.

Prometieron nuevas plantas de generación, pero no cumplieron. En lugar de soluciones firmes, eligen barcazas caras y contaminantes, como la de Azua, cuyo costo de generación es varias veces superior al de Punta Catalina. Gracias a la visión de los gobiernos del PLD, la Central Punta Catalina sostiene hoy al país. Si no existiera Punta Catalina, el sistema estaría en colapso total.

Las pérdidas de las EDEs pasaron de un 27% en 2020 a más de 42% al cierre del 2024. Eso representa un déficit cercano a los 1,800 millones de dólares: ¡5 millones de dólares diarios! Dinero que el pueblo paga con más impuestos, más deuda y más sacrificios.

Un país sin energía no puede avanzar. Lo que ha traído el PRM en estos cinco años es:

Más apagones.

Más pérdidas eléctricas.

Más subsidio por ineficiencia.

Más gastos injustificados.

Menos inversión en infraestructura.

Mayor encarecimiento de la factura eléctrica.

El Partido de la Liberación Dominicana sabe cómo resolver esta crisis, porque ya lo hizo. Cuando los ciudadanos dicen que con el PLD se vivía mejor, es porque recuerdan que eliminamos los apagones, que se vendieron los inversores porque ya no eran necesarios, y que hubo planificación, inversión y estabilidad. Junto al pueblo, demandamos frenar los apagones. En tal sentido, el Partido de

la Liberación Dominicana recomienda al actual Gobierno aplicar las siguientes medidas urgentes:

Mejorar la operación y mantenimiento de Punta Catalina, evitando salidas por fallas previsibles.

Asegurar contratos de gas natural oportunos y transparentes, para reducir costos de generación.

Auditar y revisar los contratos eléctricos lesivos al Estado.

Planificar eficientemente la entrada de energías renovables.

Retomar planes con organismos internacionales para reducir las pérdidas.

Implementar un plan agresivo de mantenimiento y normalización de redes, subestaciones y de telemedición.

Reducir pérdidas técnicas y comerciales con metas verificables.

Construir la segunda planta Punta Catalina, aprovechando la infraestructura existente, tales como el muelle, el almacén, las líneas y subestaciones, los depósitos etc... Esto aseguraría energía eficiente y a buen precio.

El pueblo dominicano no merece retroceder a los años de los apagones interminables. El PLD ya demostró que sabe cómo garantizar un servicio estable, eficiente y digno. El país no necesita más excusas ni propaganda, necesita soluciones reales. El Partido de la Liberación Dominicana se compromete a acompañar al pueblo en esta lucha y a devolverle la luz que el PRM apagó.

MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS

20 PLD EXIGE SOLUCIONES REALES ANTE LA CRISIS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y EL ABANDONO A LAS FAMILIAS DOMINICANAS.*25 de agosto, 2025*

El Partido de la Liberación Dominicana, cumpliendo con su compromiso de servir al pueblo y velar por su bienestar, levanta hoy su voz ante el grave deterioro de los servicios básicos.

Lo hacemos con datos en las manos y una genuina preocupación por el abandono de millones de familias que hoy sufren apagones, hospitales en crisis y un sistema educativo al borde del colapso.

En apenas cinco años, el Gobierno del PRM ha manejado el mayor presupuesto de la historia y ha aumentado la deuda pública con más de 22 mil millones de dólares.

Sin embargo, esos recursos no se reflejan en la vida de nuestra gente. Al contrario, la clase media y los hogares más vulnerables han sido abandonados en lo que más nos duele: educación, salud, electricidad, agua potable y servicios básicos en general.

Miremos la educación: con más de 309 mil millones de pesos presupuestados para el sistema, este gobierno anunció el 9 de julio, bajo el eslogan “Utilería a tiempo, con todo y para todos”, que cada niño y niña recibiría sus útiles escolares de forma oportuna y equitativa.

Pero la realidad es otra: hoy inicia el año escolar y cuatro de cada diez niños —el 40%— siguen sin recibirlos. Y aún el otro 60 %, si es que lo ha recibido, lo ha hecho de manera precaria. Llueven las denuncias de utilería incompleta y uniformes de medidas distintas a la que necesita el estudiante.

Es el caso del Liceo centro de artes y académica Nicolás Herrera Pimentel, con 336 estudiantes en Villa Mella, que recibió cinco pares de zapatos.

Madres y padres en todo el país denuncian que, en muchos casos, apenas llegó una mochila y una mascota por familia. ¿A esto le llama el gobierno

“cobertura universal y equitativa”? De igual modo, iniciando hoy el año escolar, según la licitación en curso del INABIE, hay un déficit de 13 millones de libros. Debido a esto, miles de familias han tenido que empeñar electrodomésticos para comprar útiles escolares a un costo que oscila entre los 12 mil y 20 mil pesos.

A esto se agrega la falta de cupos escolares, que ha dejado a unos 300 mil estudiantes sin poder matricularse, obligando a las ya golpeadas familias a endeudarse para inscribirlos en colegios privados, con rebotes de un lugar a otro buscando una oportunidad.

Y todo por una sola razón: este gobierno no ha construido las aulas necesarias, no ha planificado ni adquirido de manera oportuna los insumos para dar inicio al año escolar. Los propios datos del MINERD lo confirman: el área de Infraestructura Escolar, entidad responsable de levantar y terminar los planteles, ha ejecutado apenas el 15.82% de su presupuesto, mientras mantiene el 84% del dinero sin usar. Y la ejecución del INABIE al 21 de agosto proyecta un gasto de 35 mil millones de pesos, sin completar los uniformes, libros, zapatos y materiales educativos de los estudiantes.

¿Cómo se explica que, con más recursos que nunca, haya niños sin escuelas y aulas sin terminar? ¿Cómo se explica que con una ejecución a la fecha del 78 % de los fondos del INABIE tengamos estudiantes sin los materiales y uniformes? ¡Más que ineficiencia, esto es improvisación e irresponsabilidad con el futuro del país y con la educación dominicana que era un derecho en los gobiernos del PLD y hoy es un privilegio en el Gobierno del PRM!

Cuando miramos la salud el panorama tampoco es halagüeño, pues no hay medicinas en las Farmacias del Pueblo, el SENASA opera con déficit y no se aprueban oportunamente los procedimientos, los

hospitales públicos en franco deterioro y llueven las denuncias por las faltas de medicamentos de alto costo.

Los datos del propio Banco Central son claros: desde agosto del 2020 a la fecha, los servicios médicos hoy cuestan más de un 44.2%, la electricidad es hoy 32% más cara y con peor servicio, y los útiles escolares y la educación cuestan un 27.3% más.

¿Y qué tenemos?

Madres endeudándose para pagar colegios privados, mientras más niños quedan fuera de las aulas.

Apagones constantes y facturas cada vez más caras.

Pequeños negocios quebrando por falta de luz.

Estudiantes imposibilitados de hacer sus tareas por falta de electricidad.

La medicina convertida en lujo.

Hospitales sin camas y con infraestructura en franco deterioro.

Con más presupuesto que nunca, esta es la realidad del pueblo dominicano.

Como organización política que ha administrado los recursos públicos con eficiencia, calidad y resultados, sabemos la responsabilidad que implica manejar cada peso del pueblo y también sabemos todo lo que se puede lograr cuando se gobierna con visión, planificación y compromiso real con la educación, la salud, y el bienestar nacional.

Hoy estamos ante la reducción sistemática de la calidad de vida de nuestra gente. Tenemos un problema de dignidad humana, porque cuando una familia no puede descansar, cuando los niños no pueden ir a la escuela, cuando los alimentos se dañan por los apagones, cuando los pequeños comerciantes no pueden trabajar por falta de electricidad... a eso se le llama empeoramiento de la calidad de vida de nuestra gente.

En nombre del pueblo dominicano, hoy solicitamos al gobierno, acciones claras y resultados concretos:

Terminar las 11 mil aulas que el PLD dejó en proceso de construcción para evitar el colapso del sistema educativo y garantizar educación digna para cada niño y niña y reparar con carácter de urgencia los centros educativos que se encuentran en deterioro por falta de mantenimiento.

Garantizar la entrega de los útiles escolares al 100 % de los estudiantes.

Transparencia total en cada licitación y que se investigue todo lo ocurrido en el INABIE y las cancelaciones de los contratos reportados.

Reducir el déficit energético y terminar con los apagones que desesperan a las familias y quiebran a los pequeños negocios.

Abastecer las Farmacias del Pueblo, para que la salud deje de ser un lujo y vuelva a ser un derecho.

Reiteramos la necesidad de que se completen las remodelaciones y construcciones de hospitales que dejamos en marcha, incluida la ciudad sanitaria.

En resumen, lo que demandamos es devolver las conquistas sociales que el pueblo ya había logrado y que hoy se ven afectadas por la improvisación y la falta de visión. El pueblo dominicano merece vivir con bienestar, oportunidades y esperanza.

A las familias que nos están escuchando, les decimos: ustedes no están solas. Sus luchas son nuestras luchas.

A los padres y madres que se levantan todos los días a trabajar honestamente, sepan que su esfuerzo merece un gobierno que los respete, no que los empobrezca.

A los jóvenes que sueñan con un país mejor les manifestamos un mensaje de esperanza: Ese país es posible, pero no con el PRM. Y nosotros, el Partido de la Liberación Dominicana, seguiremos denunciando estas verdades hasta que las cosas cambien, pero que cambien para bien. Porque el pueblo dominicano merece un gobierno que trabaje en favor de las familias.

AGROPECUARIA Y PRODUCCIÓN NACIONAL

21 PLD ALERTA POLÍTICA AGROPECUARIA DEL PRM ENCAMINA A MILES DE PRODUCTORES A LA QUIEBRA; PROPONE MEDIDAS URGENTES.

01 de septiembre, 2025

El Partido de la Liberación Dominicana expresa su solidaridad con las familias dominicanas, ante las penurias que atraviesan por el desmonte de políticas públicas del actual Gobierno, que han causado una pérdida significativa en la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas.

Cientos de miles de padres y madres viven en la incertidumbre de no saber si podrán dar de comer a sus hijos a diario. Y es que las familias dominicanas enfrentan serias dificultades para poder adquirir los principales alimentos que componen el plato diario, específicamente nos referimos a la carne de pollo y al arroz.

Una vez más, el Gobierno PRM ha sido incapaz de programar, junto a los productores avícolas nacionales, volúmenes de producción de carne de pollo que satisfagan la demanda del pueblo dominicano, considerando los factores climáticos de altas temperaturas, que afectan el desarrollo del ave.

¿El resultado de esto? Pollos con un peso menor, comparado con la producción obtenida en meses menos calurosos.

Las familias dominicanas sufren cada día la indolencia del Gobierno. Sus escasos recursos, disminuidos por la galopante inflación, no les alcanzan para comprar la cantidad de pollo rico en proteínas, que requieren para alimentar a sus hijos.

Esto es así, debido a que la libra de carne de pollo vendida en los colmados del país, pasó de 58 pesos en año 2019 a 93.75 pesos por libra en el presente año 2025, un aumento de 35.75 pesos por libra, equivalente a un 61.6%. Es oportuno señalar que hay lugares de venta en los cuales la libra de carne de pollo alcanza o supera los 100 pesos. En contraste, el pueblo recuerda que durante el gobierno del PLD, una familia promedio de cinco miembros podía comprar, en cualquier colmado

del país, 3.4 libras de carne de pollo con tan solo 200 pesos.

Sin embargo, ahora, en el Gobierno PRM, la misma familia, con los mismos 200 pesos, apenas puede comprar 2.1 libras de carne. Esto es, 1.3 libras menos, cantidad insuficiente para alimentar una familia promedio. ¿Ese fue el Cambio que prometieron?

Peor aún, ante esta difícil situación, los principales voceros del gobierno se despachan diciendo que es culpa del calor que el precio de la carne de pollo haya subido.

¡Basta ya de excusas! las familias exigen soluciones, no cuentos.

Al analizar la situación del arroz, es aún más crítica y preocupante para el pueblo, pues se trata del principal cultivo agrícola y alimento de los dominicanos.

Tanto los productores como la población dominicana, recuerdan que, en el gobierno del PLD, el sector arrocero y los consumidores dominicanos gozaron de absoluta estabilidad de precios. Pero también recuerdan los arroceros que el PLD mantenía al día el apoyo mediante la pignoración. El actual Gobierno tiene un atraso de 4 meses.

Esta medida contribuyó a mantener el equilibrio de los precios favorables a productores, molineros, comerciantes y consumidores.

El PLD ejecutó políticas públicas de apoyo a la producción, que permitieron el desarrollo de dos nuevas variedades de arroz, rehabilitación de caminos productivos, crédito oportuno, importaciones controladas y permisos de importación otorgados de manera transparente.

Ahora, en el gobierno del PRM, ambos, productores y consumidores sufren las consecuencias negativas

de la ejecución de políticas erradas. El gobierno ha privilegiado las importaciones en perjuicio de los productores nacionales.

En el año 2019, cuando gobernaba el PLD, las importaciones de arroz eran solo de 495,878 quintales de arroz, mientras que, en el año 2024, estas alcanzaron el récord histórico de 4 millones 714 mil 819 quintales de arroz. Esto es, 851% más que en el año 2019, es decir, 9.5 veces más importaciones. Vele preguntar, nueva ves: ¿Ese fue el cambio que prometieron?

Como si todo lo anterior fuera poco, sólo en los primeros 6 meses del presente año 2025, el gobierno ha permitido la entrada de más de 500 mil quintales de arroz.

¡Las importaciones se han desbordado! Sin control, han provocado una reducción drástica en las ventas de pequeñas factorías y molinos de arroz.

Peor aún: decenas de miles de productores de arroz enfrentan serias dificultades para vender su producto: sufren una reducción de 100 pesos en el precio de la fanega y la imposición de un porcentaje de impurezas y humedad (tara) superior al 30% de la cantidad de arroz entregado.

Además, miles de productores han entregado su arroz sin fecha de pago, afectando su economía familiar a tal punto que le impide cumplir sus compromisos económicos y financieros, como pagar el colmado, la universidad de sus hijos o la farmacia.

La Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz) ha denunciado que las pérdidas de los productores por concepto de altas taras supera los 4 mil millones de pesos en la presente cosecha de arroz.

Alertamos al país que esta situación llevará de forma inminente a miles de productores de arroz a la quiebra, lo que afecta la economía rural en 21 provincias y la soberanía y seguridad alimentaria del pueblo dominicano.

Las políticas erradas del Gobierno PRM, no solo afectan a los productores, también a los consumidores dominicanos.

El precio del arroz baja a nivel de productores, pero aumenta para los consumidores. Con el PRM, el precio del arroz selecto aumentó 22 pesos por libra en los colmados del país, al pasar de 26.4 pesos la libra en el 2019 a 48.5 pesos por libra en el presente año 2025, equivalente a un alza de 84%. Aquí nos detenemos a preguntar otra vez: ¿Ese fue el Cambio que prometieron?

Ante la calamidad, comprometido con las causas del pueblo dominicano y con el propósito de apoyar a las familias y a los productores en sus luchas y causas, el partido morado de la estrella amarilla propone las siguientes medidas:

Programar, junto a los productores avícolas, la producción de pollos, incubando las cantidades de huevos fértiles que garanticen una producción de carne de pollo que satisfaga la demanda del país y estabilice los precios de la principal fuente de proteína de las familias dominicanas.

Otorgar créditos a largo plazo y a bajas tasas de interés, para que pequeños y medianos productores avícolas introduzcan tecnologías que aumenten la eficiencia productiva.

Controlar y limitar las importaciones de arroz a situaciones comprobadas de desabastos y aprobadas por los productores en el marco de la Comisión Nacional Arrocera.

Prohibir la importación y entrada de arroz con permisos de importación con fechas vencidas. Esto aplica para contenedores de arroz en puertos dominicanos que no hayan concluido el protocolo de desaduanización y entrada al país.

Aumentar el presupuesto destinado al Programa de Pignoración de Arroz, para lograr que los industriales (factorías y molinos) paguen a tiempo a los productores.

Compensar el precio de venta del arroz a los productores que le ha aplicado una tara superior al 15% por fanega, con el propósito de reducir las pérdidas y evitar que quiebren.

El PLD siempre estará del lado del pueblo, apoyando sus luchas y causas con el único propósito de que las familias por lo menos vuelvan a tener la calidad de vida que tenían cuando gobernaba el Partido de la Liberación Dominicana.

SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS

22 VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL ESTADO DE DERECHO.*08 de septiembre, 2025*

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llama la atención del país sobre un patrón creciente de muertes a manos de agentes de la Policía Nacional, reportadas como “intercambios de disparos”, que —según evidencia pública y estándares internacionales— podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. El PLD defiende el derecho a la seguridad ciudadana, pero rechaza toda práctica que vulnere el derecho a la vida y el debido proceso.

En los últimos meses se han registrado hechos que podrían ser catalogados como violatorios de los derechos humanos. El periódico Diario Libre registró al menos 50 muertes en presuntos “intercambios de disparos” entre enero y abril de 2025. Para el 2 de junio de 2025, el conteo ascendía a 65; y al 4 de julio ya eran 82 casos en el semestre, según el mismo seguimiento. El 22 de julio de 2025, cámaras de seguridad captaron en Baní a agentes del DICRIM disparando a un hombre en una galería; el hecho fue denunciado por familiares como ejecución.

Al mismo tiempo, el Gobierno reporta una tasa de homicidios en un dígito (7.9 en mayo; 8.22 en julio de 2025), mientras las muertes por intervención policial aumentan en un 195% en los últimos cuatro años.

Los fallecidos en los llamados intercambios de disparos y por otras acciones de las fuerzas del orden subieron hasta llegar a los 227 casos en el 2024, según datos oficiales.

La Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16 establece los principios de actuación de los agentes: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, el Reglamento de uso de la fuerza del Ministerio de Interior y Policía (MIP) dispone que la fuerza letal debe minimizar daños y ser congruente y proporcional.

Cabe recordar que el Informe 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló la existencia de reportes creíbles de homicidios arbitrarios o ilegales por agentes estatales en la República Dominicana. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró audiencias en 2024 sobre el derecho a la vida en el contexto de acciones policiales.

- Exigimos que de inmediato se desarrollen investigaciones penales independientes en cada muerte por intervención policial, aplicando el Protocolo de Minnesota —estándar de la ONU para investigar muertes potencialmente ilícitas (ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia u operativos policiales)—, garantizando verdad, justicia, reparación y la cadena de custodia.
- Exigimos también la suspensión inmediata de los agentes involucrados mientras duren las pesquisas y la preservación íntegra de las evidencias, incluyendo grabaciones.
- Demandamos el uso obligatorio de cámaras corporales con métricas públicas de su utilización y sanciones automáticas por apagar o manipular estos dispositivos durante los operativos.
- Asimismo, requerimos la creación de un tablero mensual de uso de la fuerza con disparos efectuados, heridos y fallecidos (civiles y agentes), denuncias y estado procesal por provincia y unidad.
- Solicitamos, además, una auditoría externa semestral del uso de la fuerza a cargo del Defensor del Pueblo, con la participación de universidades y organizaciones no gubernamentales (ONG), así como el fortalecimiento de Asuntos Internos de la Policía con independencia operacional.

El PLD propone, como acciones inmediatas:

- Creación de una Comisión Especial de Seguimiento a Muertes por Intervención Policial, con facultad de requerir información y celebrar audiencias públicas.
- Regla de 72 horas: Publicación, del parte técnico mínimo de cada caso (hora, lugar, unidad actuante, motivo de la intervención, evidencia levantada, armas incautadas y videos disponibles).
- Cobertura nacional de cámaras corporales y protocolo de activación obligatoria, con integración a la cadena de custodia digital.

- Plan de capacitación y recertificación en uso diferenciado de la fuerza, desescalada y armas no letales para las unidades de mayor letalidad.
- Asistencia técnica internacional (CIDH/ONU) para revisar el marco operativo y elevar los estándares de rendición de cuentas.

El Partido de la Liberación Dominicana considera que la seguridad y el respeto a los derechos humanos no son excluyentes. Exigimos verdad, justicia y garantías de no repetición de los hechos que denunciamos. Ninguna política pública debe medir su éxito por la cantidad de “abatidos”, sino por la reducción sostenible del delito dentro del marco constitucional.

TRANSPARENCIA, JUSTICIA Y FISCALIZACIÓN

23 PLD RECLAMA TRANSPARENCIA EN INABIE LLAMA AL GOBIERNO A INVESTIGAR TODOS LOS PROCESOS DESDE 2021.*22 de septiembre, 2025*

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) es una de las instituciones con mayor responsabilidad social del Estado, porque tiene la misión sagrada de garantizar la alimentación escolar, la provisión de uniformes y la salud de más de 2.3 millones de niños y niñas que cursan estudios en las escuelas públicas de la República Dominicana. Esa misión implica grandes inversiones. Para este año 2025 le fue aprobado un presupuesto que ronda los 40 mil millones de pesos.

Un presupuesto de esa magnitud —que supera al de 18 instituciones públicas juntas— demanda una gestión sana, transparente, ética y moral; con estricto apego a los principios básicos que rigen la Contraloría General de la República y la Ley de Compras y Contrataciones Públicas: controles financieros, transparencia, equidad e inclusión. Debe estar alejada y distante de toda acción que desdiga de la seriedad y honestidad con que deben ser administrados los fondos públicos.

Desde el año 2021 hasta el mes de julio de este 2025, el INABIE no ha logrado hacer una sola licitación para la contratación de servicios de alimentos y utilería escolar que no haya estado plagada de denuncias de serias irregularidades en desmedro de los intereses de la institución, los estudiantes y de las empresas oferentes —MIPYMES casi en su totalidad— que participan, la mayoría de ellas, de buena fe en los procesos bajo el entendido de que serán transparentes y sin privilegios. Cuando la transparencia no se da, a los oferentes no les queda más alternativa que acudir a los organismos del sistema responsables de hacerles valer sus derechos, así como a los medios de comunicación como vía de hacer sentir sus reclamos.

Los medios de comunicación reportaron que las licitaciones de los años escolares 2021-2022 y 2023-2025 generaron más de 136 titulares de

denuncias de irregularidades. Cuatro programas de investigación dedicaron espacios completos a este tema, confirmando que las denuncias tenían asidero.

Las denuncias iban desde adjudicaciones de contratos a oferentes que no cumplían con las condiciones exigidas por el pliego de condiciones estipulado en la licitación, adjudicación a oferentes que no tenían instalaciones para ofertar el servicio, supuestos cobros de peajes para hacer efectivas las asignaciones, pago de servicios no contratados, adjudicar menos cantidad de raciones o productos de los consignados en los pliegos y otras anomalías no menos importantes.

Veamos los hechos, según las instituciones gubernamentales vinculantes:

En 2021, durante el proceso de licitación del almuerzo escolar, el INABIE habilitó y adjudicó contratos a más de 1,260 proveedores que no cumplían los requisitos exigidos.

La Dirección General de Contrataciones Públicas recibió decenas de recursos de impugnación, de parte de oferentes que se sintieron burlados por la administración del INABIE.

Estas denuncias y solicitudes de investigación fueron entregadas en la Procuraduría General de la República por ADOCCO, por la misma DGCP y por oferentes y asociaciones de suplidores sin que hasta la fecha el país conozca avances claros ni se hayan establecido responsabilidades.

Entre 2023 y 2025, suplidores han presentado denuncias e incluso querellas denunciando sobornos y exclusiones arbitrarias en licitaciones del almuerzo escolar. Se ha alegado la exclusión irregular de 1,493 centros educativos.

En 2025, la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República informaron del hallazgo

de graves irregularidades en las compras de uniformes, mochilas y calzados escolares, por montos superiores a seis mil millones de pesos. Dichos hallazgos obligaron a anular y reevaluar contratos, y a remitir expedientes al Ministerio Público por violaciones a la Ley de Compras y Contrataciones y a la Ley de Control Interno.

Estas no son denuncias vagas ni rumores sin fundamento. Hablamos de procesos documentados por las propias instituciones del Estado. La Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP), mediante la resolución RIC-0106-2025, anuló adjudicaciones de calzados escolares por irregularidades graves. La Unidad Antifraude de la Contraloría remitió informes al Ministerio Público señalando violaciones a la Ley 340-06. Y en julio de 2025, suplidores formalizaron querellas en la PEPCA denunciando pagos de sobornos y exclusiones arbitrarias en licitaciones del almuerzo escolar. Estos hechos están registrados en expedientes oficiales y en los archivos de nuestras instituciones de control, sin que hasta la fecha se haya podido establecer responsabilidades.

Ante el cúmulo de denuncias y la debilidad de las reacciones del INABIE, las instituciones vinculantes (DGCP, Contraloría General de la República) se vieron compelidas a reaccionar suspendiendo procesos, solicitando revisiones de casos y desvinculándose de las irregularidades denunciadas. El presidente de la República destituyó, por irregularidades en licitaciones, a su primer director del INABIE un año y tres meses después de haberlo nombrado, y a su segundo incumbente dos años y nueve meses después, también por idénticas razones que el anterior. Ahora la institución tiene un nuevo director que, ojalá, pueda revertir la desconfianza generada por los dos que le antecedieron.

¿Por qué importa vigilar al INABIE?

El Programa de Alimentación Escolar entrega cada año más de mil millones de raciones a más de dos millones de estudiantes, profesores y personal de apoyo en 7,033 centros educativos. Cualquier sombra de corrupción en este programa afecta directamente la nutrición de los niños, la salud, la educación y la confianza pública en el Estado.

No se trata solo de cifras millonarias. Miles de pequeños suplidores honestos han quedado quebrados o endeudados porque nunca recibieron lo que les correspondía por ley. Hubo escuelas que iniciaron el año sin la utilería a tiempo y comunidades donde miles de estudiantes se vieron expuestos a alimentos de menor calidad o en menor cantidad de la necesaria, así como días de docencia sin raciones servidas.

Cuando la corrupción entra en el INABIE, las consecuencias las sufren los niños más vulnerables y los microempresarios, es decir, los negocios más pequeños, pero de los cuales dependen más de veinte mil empleos directos e indirectos en el país.

El presidente ha dicho que no tiene cómplices, por lo tanto, solicitamos al presidente de la República que instruya una investigación integral, pública y con cronograma definido sobre los procesos del INABIE seriamente cuestionados desde 2021 hasta la fecha. Esa investigación debe involucrar a los órganos del Estado competentes para tales fines, y debe culminar en la publicación íntegra de los expedientes y en la determinación de responsabilidades.

El PLD pone a disposición sus técnicos ante las nuevas autoridades del INABIE para implementar reformas administrativas inmediatas que blinden la institución frente a irregularidades futuras. Recomendamos:

Fortalecer los controles internos y la supervisión en cada etapa de las licitaciones.

Garantizar la trazabilidad digital de todos los procesos y expedientes.

Establecer pagos oportunos y mecanismos de factoring que protejan financieramente a las MIPYMES suplidoras.

Verificar de manera rigurosa las plantas físicas de los oferentes y eliminar mecanismos de intermediación o subcontratación que encarecen y concentran las contrataciones.

Proteger a los denunciantes frente a represalias.

Promover una cultura institucional de cero tolerancias a la corrupción.

Como organización política sabemos lo que significa administrar con rectitud: en la gestión del PLD frente al INABIE se tomaron las decisiones necesarias para preservar la transparencia y la integridad de los procesos.

Por eso hoy hablamos con la autoridad que otorga haber elegido siempre el camino correcto. Nadie que carezca de esa autoridad moral puede levantar

la voz con firmeza en este tema, y por eso el PLD lo hace, con responsabilidad y con evidencias.

Si como nación le fallamos a los niños y niñas, a sus padres, a los pequeños y microempresarios, si fallamos en proteger al INABIE, fallamos en proteger la confianza del pueblo dominicano en su democracia.

TRANSPARENCIA, JUSTICIA Y FISCALIZACIÓN

24 PLD DENUNCIA AUSENCIA DE OBRAS PROMETIDAS CON FONDOS DE AERODOM.

29 de septiembre, 2025

En noviembre de 2023, en plena campaña electoral, el gobierno del PRM anunció la renegociación del contrato de concesión de Aeropuertos Dominicanos (AERODOM), y el adelanto de recursos por US\$ 775 millones de dólares, equivalentes a RD\$44,592 millones, comprometiendo al país hasta el año 2060.

El presidente de la República informó públicamente que esos fondos serían destinados a obras de infraestructura que transformarían la vida de la gente. Dos años después, la realidad es otra: las obras prometidas no existen, y el dinero ya se gastó.

Entre los proyectos anunciados y aún no iniciados se encuentran:

La construcción del puente levadizo que sustituirá al puente flotante del río Ozama, con 50 millones de dólares equivalentes a RD\$3,000 millones de pesos dominicanos, que ya fueron gastados.

El puente paralelo al Jacinto Peynado que une la avenida Máximo Gómez con las Hermanas Mirabal en Santo Domingo Norte, con una inversión propuesta de 56 millones de dólares correspondientes a RD\$3,360 millones de pesos, que igualmente no ha iniciado y se usaron los recursos.

El paso a desnivel de la carretera Sabana Perdida – La Victoria, con intersección de la avenida Charles de Gaulle, con un anuncio de US\$30 millones de dólares, correspondientes a RD\$1,800 millones de pesos, y se gastaron los recursos sin iniciar la obra.

La “Unidad Traumatológica del hospital de San Cristóbal”, que recibiría una partida RD\$ 900 millones de pesos.

La solución vial de la República de Colombia con avenida de Los Próceres, un expreso hasta la avenida Jacobo Majluta, que prometieron unos

RD\$6,480 millones de pesos y no se evidencia la asignación de fondos de AERODOM.

Mientras que el asfaltado en La Caleta, Boca Chica y zonas aledañas al Aeropuerto Las Américas, con más de RD\$21 mil millones de pesos prometidos; apenas se ejecutaron RD\$276 millones en Boca Chica.

Y la construcción de la vía expresa de la Plaza de la Bandera, pasando por la avenida Isabel Aguiar, conectando a la autopista 6 de noviembre, en la que se invertirían RD\$8,880 pesos, de los cuales se ejecutaron apenas RD\$1,265 con estos recursos.

Según los propios registros del Sistema Integrado de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), durante el año 2024, cerca del 90 % de los recursos recibidos, correspondientes a RD\$40,132 millones de pesos fueron usados en gasto corriente, subsidios, programas sociales, y otros programas no planificados, incluyendo que se destinaron RD\$1,000 millones a instituciones públicas para el régimen subsidiado (SENASA), entidad que hoy está envuelta en un escándalo de corrupción y déficit sin precedentes.

Este manejo de los recursos públicos es inaceptable. Se evidencia de manera clara la improvisación, la falta de transparencia, la ausencia de planes de trabajo estructurado para solucionar los problemas estructurales de la nación y la inconsistencia entre lo anunciado ejecutado.

En este caso, somos testigos de cómo se hipotecó el futuro con una renegociación anticipada por 37 años, mientras el pueblo sigue esperando hospitales, puentes y carreteras que nunca comenzaron. Cada peso malgastado es un accidentado que no encuentra atención en un hospital que pudo construirse; es un conductor atrapado en tapones interminables en Sabana Perdida; es un estudiante que sigue recorriendo

calles intransitables para llegar a la universidad. Son vidas enteras afectadas por la irresponsabilidad de un gobierno que prefirió gastar en lo inmediato y abandonar el futuro y el desarrollo de la nación.

Desde el Partido de la Liberación Dominicana requerimos al Gobierno responder con claridad:

¿Cuándo se ejecutarán las obras anunciadas con los recursos recibidos y que ya fueron gastados?

¿Será con nuevos préstamos que el pueblo tendrá que pagar lo que ya se le cobró?

Los dominicanos y las dominicanas esperan respuestas, transparencia y un rumbo de desarrollo verdadero. No más anuncios y publicidad; necesitan obras reales que transformen sus vidas. Y en esa lucha por la verdad y el progreso, el Partido de la Liberación Dominicana estará siempre al lado de la gente.

ECONOMÍA, DEUDA Y FINANZAS PÚBLICAS

25 PLD ADVIERTE SOBRE DETERIORO ECONÓMICO: “HOY LA DEUDA PESA MÁS Y EL PAÍS AVANZA MENOS.

06 de octubre, 2025

El Partido de la Liberación Dominicana, portavoz de las necesidades del pueblo dominicano, nueva vez hace un llamado de alerta sobre la preocupante situación económica que atraviesa nuestro país, y que afecta de forma directa a la clase media y los pobres.

A pesar de la realidad que enfrenta el pueblo, el Gobierno PRM insiste en que la economía marcha bien y que hoy la gente vive mejor.

El clamor de los ciudadanos en la calle y los datos nos cuentan otra realidad. Hoy queremos hablar con claridad, basados en hechos verificables.

A continuación, haremos una comparación justa y transparente entre la gestión PLD y la del PRM. Este análisis considera los últimos cinco años completos del Partido de la Liberación Dominicana (2015–2019) y los primeros cinco años del actual gobierno del PRM (2021–2025).

El año 2020 se excluye deliberadamente, ya que fue un período excepcional marcado por la pandemia del COVID-19 y el cambio de administración, que alteró las condiciones normales de la economía.

De este modo, los resultados aquí presentados reflejan el desempeño real de ambos gobiernos en circunstancias comparables, con cifras verificables del Banco Central, el Ministerio de Hacienda y organismos internacionales como la Cepal y el Banco Mundial.

Durante los gobiernos del PLD, la economía dominicana creció, en promedio, un 5.7 % cada año, de acuerdo con los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Fue uno de los crecimientos más altos y sostenidos de toda América Latina, según la Cepal.

Ese crecimiento se sostuvo tras la recuperación

de la crisis bancaria local y pese a los efectos persistentes de la crisis financiera global de 2008.

El crecimiento sostenido del país fue el resultado de una gestión económica prudente, una inversión pública estratégica y programas sociales que mejoraron la calidad de vida de millones de dominicanos.

Esa inversión permitió construir escuelas, carreteras, hospitales, la ampliación del Metro de Santo Domingo, el Sistema 911, la tanda extendida o el Inaipi.

El PLD fue el gobierno que garantizó el 4 % del PIB para la educación, política que permitió la construcción de más de 25,000 aulas, el programa nacional de alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo” y la tanda escolar extendida, que benefició a más de 1.6 millones de estudiantes.

Además, se desarrolló una red moderna de infraestructura sanitaria, con 43 hospitales remozados y equipados.

En el sector energético, se construyó la Central Termoeléctrica Punta Catalina, una de las obras más importantes de la región.

Esta planta incorporó 720 megavatios de capacidad al sistema eléctrico nacional, reduciendo las pérdidas de las empresas distribuidoras de 34 % en 2011 a cerca del 25 % en 2019.

Asimismo, disminuyó el subsidio eléctrico de más del 2 % del PIB a cerca del 1 %, lo que significó un ahorro fiscal de decenas de miles de millones de pesos cada año.

Esos avances se tradujeron en mayor estabilidad del suministro, menor dependencia del petróleo y una gestión energética que contribuyó a la reducción del gasto público corriente.

Sin embargo, esa eficiencia se ha revertido. Hoy las pérdidas del sistema eléctrico son las más altas en más de una década.

Según el Ministerio de Energía y Minas, a julio de 2025 las EDE pierden el 43.3 % de la energía comprada.

Hasta agosto de 2025, las transferencias del Gobierno a las EDE alcanzaron RD\$71,441.4 millones, equivalentes al 70.3 % del monto presupuestado para el año.

En la revisión del Presupuesto de 2025, esas transferencias aumentaron de RD\$83,360 millones a RD\$101,625 millones, lo que eleva el subsidio eléctrico a más del 1.5 % del PIB.

Hoy, el país en el sector eléctrico, ha vuelto a una situación que se creía superada, producto de deficiencias en la planificación, gestión y mantenimiento del sistema eléctrico.

Hoy la inversión pública ronda apenas el 1.7 % del PIB, el nivel más bajo en más de siete décadas, solo superado a la baja durante la crisis institucional de 1962–1966.

Esto equivale a una reducción de un tercio (–33 %) respecto al promedio del quinquenio 2015–2019 (2.5 % del PIB).

Durante ese período, el gasto de capital fijo mantuvo niveles sostenidos que impulsaron la expansión de la infraestructura eléctrica, transporte, educativa, sanitaria y vial del país.

En cambio, entre 2021 y 2024, la inversión física ejecutada se ha reducido de forma constante, reflejando una caída significativa en el esfuerzo inversor real del Gobierno Central.

A julio de 2025, el Gobierno apenas había ejecutado el 37 % del gasto de capital presupuestado para el año, lo que confirma una tendencia persistente de subejecución y lentitud en la ejecución de proyectos públicos.

Este comportamiento limita la capacidad del Estado para dinamizar la economía y generar empleo, en un contexto en que la inversión pública

debería ser el principal motor de reactivación.

El Banco Central reconoce que la economía crece poco: solo 2.3 % entre enero y agosto, y apenas 1.5 % en el último mes medido.

A ello se suma que, mientras la canasta básica supera los RD\$47,000 mensuales, el salario promedio ronda apenas los RD\$21,800, lo que representa solo el 46.4 % del costo de esa canasta.

El tipo de cambio que, en septiembre del presente año, se encontraba por encima de RD\$64 por dólar encarece los productos importados y la factura eléctrica continúa aumentando, agravando la presión sobre los ingresos familiares.

A este panorama se suma el deterioro acelerado de la cartera de crédito del sistema financiero, reflejo de un entorno económico más frágil que ha reducido la capacidad de pago de hogares y negocios.

Según la Superintendencia de Bancos, la cartera vencida creció 49 % interanual a agosto de 2025, evidenciando el aumento de la morosidad en los préstamos de consumo y en el crédito a las micro y pequeñas empresas.

Este incremento refleja una economía con mayor dificultad: más familias se atrasan en el pago de sus préstamos, los colmados y pequeños negocios ven limitado su crédito, y el consumo diario se contrae, afectando directamente la calidad de vida de los dominicanos.

Durante los gobiernos del PLD, la morosidad promedio del sistema financiero se mantuvo entre 1.5 % y 1.8 %, respaldada por una política macroeconómica coherente, estabilidad en los mercados y crecimiento del crédito productivo.

La cartera vencida crecía en línea con la expansión del crédito, sin comprometer la salud del sistema ni la capacidad de pago de las familias.

Bajo el gobierno del PRM, en cambio, la morosidad simple ronda ya el 1.9–2.0 %, mientras la cartera vencida ha aumentado casi 50 % en un año, y la “cartera castigada” —créditos irrecuperables— se ha incrementado más de 40 % interanual.

Estos datos no son simples estadísticas: son la expresión de un modelo improvisado, en el que la falta de planificación, la baja inversión pública y la pérdida de confianza empresarial se traducen en menos crecimiento, más morosidad y un consumo familiar estancado.

En definitiva, el crédito está más caro, el dólar sube y las familias sienten que su dinero rinde menos.

A esto se suma un aumento insostenible de la deuda pública.

A julio de 2025, la deuda pública consolidada ascendió a US\$76,763.8 millones, equivalente al 58.9 % del PIB.

En 2020, cuando el PRM asumió el poder, la deuda pública consolidada ascendía a US\$44,621 millones, equivalente al 49.7 % del PIB.

Al cierre de julio de 2025, esta cifra se elevó a US\$76,763.8 millones, o 58.9 % del PIB, lo que implica un incremento de US\$32,142 millones en apenas cinco años.

Durante el período comparado del PLD (2015–2019), la deuda aumentó en US\$10,970 millones, pasando de US\$33,651 millones a US\$44,621 millones.

Esto significa que el ritmo de endeudamiento del actual gobierno es 2.9 veces mayor, con un promedio de más de US\$6,400 millones anuales, frente a unos US\$2,200 millones por año en el último quinquenio del PLD.

Un endeudamiento mucho más acelerado, pero sin los resultados visibles en infraestructura, educación o salud que antes acompañaban el uso responsable del crédito público.

El servicio de la deuda —solo en intereses— ya consume el 23-25 % de los ingresos tributarios, es decir, uno de cada cuatro pesos recaudados por el Estado, lo que deja poco margen para financiar la educación, la salud y la inversión pública.

Durante los gobiernos del PLD, ese indicador se mantenía entre 15 % y 18 %, según datos

del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Crédito Público, reflejando una gestión fiscal más equilibrada y con mayor espacio para impulsar el desarrollo social y productivo.

A ello se añade el deterioro de instituciones que fueron ejemplo de eficiencia y transparencia. El Seguro Nacional de Salud (Senasa), desarrollado durante los gobiernos del PLD como modelo de gestión pública e instrumento de cohesión social, hoy enfrenta un desfaldo que hasta el momento se estima en más de RD\$23,000 millones, con una investigación en curso por parte de la Procuraduría General.

¡Se ha jugado con la salud de la gente! Niños, madres, ancianos y personas con condiciones especiales. Además del costo humano, este caso implica un enorme costo fiscal que deberán asumir todos los dominicanos.

Por eso, el PLD plantea una ruta clara:

1. Reactivar la inversión pública, con obras que generen empleo y desarrollo local.
2. Garantizar que las bajas en la tasa de interés lleguen al crédito real, al bolsillo de la gente y a las MIPYMES.
3. Fortalecer los programas de apoyo a los pequeños negocios, para evitar más quiebras y despidos.
4. Proteger el poder de compra del salario, reduciendo los costos de los bienes y servicios básicos.

Sabemos lo que el Gobierno responderá: que el Presupuesto General del Estado para 2026 contempla un aumento en la inversión pública.

Pero llevamos cinco años perdidos. Año tras año se anuncian grandes montos que luego no se ejecutan.

Si nada cambia, y todo indica que este gobierno seguirá en la misma ruta, la República Dominicana terminará recordando estos ocho años como una nueva década perdida: años en que la

improvisación, la falta de gestión y la ausencia de planificación le costaron al país crecimiento, empleo y bienestar.

El Partido de la Liberación Dominicana gobernó con hechos, no con promesas. Crecimos, avanzamos y mejoramos la vida de la gente.

Hoy, en cambio, la deuda pesa más y el país avanza menos. La República Dominicana no necesita

más discursos, necesita resultados. El país que construimos juntos no puede detenerse.

Hoy los dominicanos se enfrentan a niveles de precios más altos, salarios que no alcanzan para cubrir la canasta básica, y costos sensibles (dólar, luz, deudas). Esa combinación explica que los dominicanos y dominicanas digan a los cuatro vientos que con el PLD se vivía mejor.

COMPARATIVO PLD vs PRM: CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA

Indicador	Gobiernos PLD (2015–2019)	Gobierno PRM (2021–2025)	Variación / Comentario	Fuente / Comentario
Inversión pública promedio (% del PIB)	2.5 %	1.7 %	Cae un 33 %; nivel más bajo desde 1951, solo superado durante la crisis institucional de 1962–1966.	DIGEPRES / MH / BCRD / CEPAL
Variación de la deuda pública consolidada (US\$)	+ US\$ 11,000 – 12,000 millones	+ US\$ 31,000 – 32,000 millones	Se triplica la velocidad de endeudamiento.	Dirección de Crédito Público / MH
Promedio anual de endeudamiento (US\$)	≈ US\$ 2,200 millones	≈ US\$ 6,400 millones	2.9 veces mayor por año.	Cálculo propio con datos oficiales
Relación deuda / PIB	46.4 % → 49.7 % (+3.3 p.p.)	49.7 % → 58.9 % (+9.2 p.p.)	Crece casi tres veces más rápido.	MH / BCRD
Servicio de la deuda (intereses / ingresos tributarios)	15 % – 18 %	23 % – 25 %	Uno de cada cuatro pesos tributarios va a intereses.	MH / DIGEPRES
Presión fiscal promedio (% del PIB)	13.7 % – 13.9 %	13.4 % – 13.6 %	Sin mejora estructural.	DGII / CEPAL
Uso del endeudamiento	Financia obras públicas, educación, salud, energía y transporte.	Predomina en gasto corriente y subsidios.	Menor retorno social del gasto.	Secretaría Económica PLD.
Principales logros	Tanda extendida, INAPI, Metro, 911, SeNaSa, Punta Catalina, expansión educativa.	—	—	Revisión de prensa y memorias institucionales.
Resultado estructural	Crecimiento con estabilidad y expansión social.	Bajo crecimiento, alta deuda, baja inversión.	—	Análisis comparado.

Notas metodológicas **Objetivo** Ofrecer una evaluación homogénea y verificable del desempeño macroeconómico de ambos gobiernos, centrada en crecimiento, inversión, endeudamiento y sostenibilidad fiscal, bajo un mismo horizonte temporal y fuentes oficiales consistentes. **Períodos analizados** La comparación se realiza entre dos períodos de cinco años de gestión: PLD: 2015–2019 PRM: 2021–2025 Se excluye deliberadamente 2020, por tratarse de un año atípico afectado por la pandemia del COVID-19 y la transición de gobierno. Esta estructura permite medir el desempeño de ambos gobiernos en condiciones equivalentes de duración y disponibilidad estadística, garantizando una comparación justa y transparente. **Fuentes oficiales** Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Ministerio de Hacienda (MH), Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Dirección General de Inversión Pública (DGIP), Dirección de Crédito Público y Fondo Monetario Internacional (FMI) y CEPAL. **Criterios técnicos** Todos los valores se expresan como promedios quinquenales o rangos equivalentes. La deuda se calcula como proporción del PIB y su servicio como porcentaje de los ingresos tributarios. La velocidad de contratación de deuda del PRM es casi tres veces mayor que la del PLD (US\$6,400 millones vs. US\$2,200 millones por año). La relación deuda/PIB aumentó tres veces más rápido en el período 2021–2025 (9.2 p.p. frente a 3.3 p.p. entre 2015–2019). Los datos se ajustan a precios y proporciones comparables,

evitando distorsiones por choques externos o cambios metodológicos. En el caso del gasto de capital, se utiliza el valor ejecutado promedio (no presupuestado) para reflejar el esfuerzo real de inversión pública. **Uso de rangos: por qué y cómo** Por qué rangos y no promedios: Algunos indicadores varían año a año (p. ej., servicio de la deuda, crecimiento del PIB). El rango refleja la dispersión real y evita sesgos de un año atípico. **Cómo se calculan:** Corresponden al valor mínimo y máximo anual dentro del quinquenio analizado, según series oficiales del BCRD, MH, DIGEPRES, CEPAL y Crédito Público. **Excepciones (sin rango):** Deuda/PIB: Se reporta como valor inicial → valor final y su variación en p.p., al ser un stock acumulado. Inversión pública: Se expresa como valor único (1.7% del PIB) dado que la variación interanual es mínima y sostenidamente baja en todo el período 2021–2024. **Rangos de referencia rápida** Crecimiento del PIB real (promedio anual): PLD 2015–2019: 5.6% – 6.0% PRM 2021–2025: 2.8% – 3.0% Inversión pública (% del PIB): PLD 2015–2019: 2.5% PRM 2021–2025: 1.7% Servicio de la deuda (intereses / ingresos tributarios): PLD 2015–2019: 15% – 18% PRM 2021–2025: 23% – 25% Presión fiscal (% del PIB): PLD 2015–2019: 13.7% – 13.9% PRM 2021–2025: 13.4% – 13.6% **Nota:** Estos valores provienen directamente de series oficiales. No se aplican suavizados ni transformaciones estadísticas que alteren los datos fuente. |

TRANSPARENCIA, JUSTICIA Y FISCALIZACIÓN

26 ¿A QUÉ SE DEBE LA INERCIA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN QUE SOLO REBUSCA EN EL PASADO, IGNORANDO EL DESORDEN DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN?

13 de octubre, 2025

El Partido de la Liberación Dominicana cuestiona la inercia de la Cámara de Cuentas como órgano de control y fiscalización en la actual gestión de gobierno, señalando que se limita a escarbar en el pasado mientras ignora el desorden administrativo del presente.

De conformidad con el artículo 250 de la Constitución de la República, la Cámara de Cuentas tiene la obligación de auditar y analizar la ejecución del Presupuesto General de la Nación, aprobado cada año por el Congreso Nacional, y fiscalizarlo para presentar ante el Poder Legislativo un informe correspondiente. Sin embargo, este rol ha sido desplazado por la mala práctica de filtrar investigaciones sobre funcionarios del gobierno anterior, en franca violación de los reglamentos de la institución, con la intención de instrumentar expedientes penales ante la opinión pública sin realizar las auditorías pertinentes. Esta conducta genera suspicacia y desconfianza en la sociedad dominicana respecto a su labor, además de evidenciar una preocupante subordinación ante el Poder Ejecutivo.

Resulta inaceptable que no se haya practicado una sola auditoría correspondiente a la presente gestión de gobierno, de las veintiocho contempladas en el Plan Anual de Auditoría 2025. A saber: la auditoría al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que abarca los años 2023 y 2024, incluyendo una investigación especial por un monto que supera los 75,550 millones de pesos; la auditoría al Ministerio de Educación, desde el 16 de agosto de 2020 hasta el 16 de agosto de 2023, que incluye una investigación especial a requerimiento de la Procuraduría General de la República; la auditoría al Servicio Nacional de Salud (SNS); a la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), bajo la gestión de Bartolomé Pujals; al Ministerio Administrativo

de la Presidencia; al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA); al programa Supérate; y al Comité Ejecutor de Infraestructura de Obras en Zonas Turísticas (CEIZTUR), entre otras.

En el Gobierno PRM, se han registrado más de 200 denuncias de corrupción admitidas por la propia Dirección de Ética Gubernamental y otros organismos del Estado, así como por organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos. ¿Y la Cámara de Cuentas qué ha hecho? Eso se pregunta el pueblo dominicano.

A estas alturas, ya debieron haberse presentado los resultados del Plan Anual de Auditoría 2025 y aprobado el correspondiente al 2026, tal como establece su propia ley. Pero, lejos de cumplir con ello, se amparan en informes ajenos mientras organizan reuniones con entidades que deberían ser objeto de fiscalización.

Ojo: también debe mantenerse la atención sobre el cumplimiento de otras normativas, como las relativas a las pensiones.

¿Por qué no han continuado subiendo las actas y los videos de las sesiones? La Cámara de Cuentas se ha convertido en un espectáculo mediático, pero no en un verdadero órgano de control.

La función básica de la Cámara de Cuentas es evitar la corrupción, y se supone que debe hacerlo acompañando a la administración de turno que maneja presupuestos.

En ese sentido, le aclaramos al Gobierno PRM y al pleno de la Cámara que su rol es asistir en los procedimientos administrativos internos de cada institución y vigilar que el dinero se ajuste a sólidas políticas públicas, buenas prácticas, gestión ética y eficiente.

El espíritu de la Ley 18-24 se aboca al acompañamiento y fiscalización de la gestión de turno. Sin embargo, el pleno de la Cámara de Cuentas, alejándose de su rol institucional, se ha empeñado en elaborar expedientes —no investigaciones— de administraciones pasadas.

En resumen, esta institución se ha dedicado, sin guardar las formas, a elaborar expedientes disfrazados de auditorías selectivas, mientras, al mismo tiempo, se hace de la vista gorda ante las graves denuncias de irregularidades.

Por tales motivos, nos permitimos recomendar:

Presentar al Congreso Nacional el informe anual de auditoría correspondiente a la gestión en curso.

La Cámara de Cuentas debe rendir al Congreso, a más tardar el 30 de abril de cada año, el informe completo de auditorías realizadas, conforme al artículo 33 de la Ley 18-24. Dicho informe debe incluir las auditorías practicadas a la gestión del gobierno actual y ser publicado para conocimiento ciudadano.

Publicar en su portal institucional el plan anual de auditorías y su nivel de ejecución.

En cumplimiento del principio de transparencia (artículos 4 y 8 de la Ley 18-24), la Cámara debe informar qué entidades están siendo auditadas, en qué etapas se encuentran los procesos y cuáles son los hallazgos preliminares. El silencio institucional favorece la opacidad.

Reorientar el plan de auditorías hacia la fiscalización preventiva y concurrente de la gestión actual.

En virtud del artículo 15, numeral 9, la CCRD tiene el deber de participar en la prevención de la corrupción. El PLD exige auditorías en tiempo real, especialmente en programas sociales, compras públicas y obras en ejecución, para evitar que los escándalos se descubran años después.

Dar cumplimiento obligatorio a las recomendaciones de auditoría y establecer mecanismos de seguimiento.

Según el artículo 41 de la Ley 18-24, las recomendaciones de la Cámara de Cuentas son de cumplimiento obligatorio. El PLD demanda que se establezca un sistema público de seguimiento, de modo que cada institución auditada rinda cuentas sobre las medidas correctivas adoptadas y sus resultados.

TRANSPARENCIA, JUSTICIA Y FISCALIZACIÓN

27 PLD EXIGE AL PRM ROMPER VÍNCULOS CON LA NARCOPOLÍTICA Y EXPLICAR FINANCIAMIENTO DEL NARCOTRÁFICO.*20 de octubre, 2025*

El 30 de septiembre de 2025, un gran jurado federal en Miami acusó a Fabio Jorge-Puras (alias “Vecino”), exasesor honorífico del Poder Ejecutivo; y a Gaspar Polanco-Virella (alias “El Grande”), exdirector de Servicios Públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional, por conspiración internacional para traficar cocaína. El 16 de octubre, Polanco se entregó voluntariamente a las autoridades en Miami.

Estos dos casos se suman a un conjunto de procesos y condenas, dentro y fuera del país, que involucran a funcionarios y exfuncionarios del gobierno y congresistas del PRM.

Conviene recordar, para que no se olvide, los siguientes casos:

Extradiciones a Estados Unidos:

Yamil Abreu Navarro, exdirector municipal de Las Lagunas, en Padre las Casas, quien en 2020 fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico presentados en el Distrito Este de Nueva York.

Ex miembro del Comité Nacional del PRM, a favor de quien el director de la campaña presidencial del PRM en 2020, Roberto Fulcar, solicitó de manera pública a todos sus amigos del distrito municipal Las Lagunas, en Padre de las Casas, que apoyaran la candidatura del señor Abreu Navarro. Pero, además, y de acuerdo con las informaciones de las autoridades investigativas del país reseñadas en los medios de comunicación, el señor Yamil Abreu Navarro fungía, hasta su detención, como director de campaña del PRM para la región del Sur-Central.

En junio de 2020, el PLD le solicitó a la JCE una investigación de los recursos que el señor Yamil Abreu Navarro entregó al PRM para la campaña política de ese partido; y pedimos además que el

PRM entregara a la JCE el registro de contribuyentes con sus nombres y apellidos, así como la cédula de identidad y electoral, la dirección y el monto de la contribución.

Procesados en Estados Unidos (sin extradición desde RD):

Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, exdiputado del PRM de Santiago, arrestado en 2021 en Miami y condenado en 2024 a 16 años de prisión tras admitir cargos de conspiración para tráfico de cocaína.

Edickson Herrera Silvestre, alias “Yeyea”, regidor del PRM en el Distrito Nacional, se entregó este año en Miami a donde tiene un proceso abierto por narcotráfico.

Roberto de los Santos Domínguez, alias “El Chino Domínguez”, empresario de Santiago, se presentó voluntariamente y el 7 de octubre de 2025, un tribunal federal en Miami lo condenó a 235 meses de prisión por narcotráfico.

Alexander Iglesias Ventura, empresario, se entregó en Miami en 2024 y fue condenado a 43 meses de prisión.

Francisco Alberto Gómez, alias “Frico”, empresario turístico, se declaró culpable y en junio de 2025, medios locales reportaron su condena a 100 meses de prisión federal por su rol en la red asociada al complejo ‘Fricolandia’.

Erick Randhiel Mosquea Polanco, el 6 de diciembre de 2024 fue capturado en Colombia, a solicitud de EE. UU., dentro del caso Operación Falcón.

Condenas en la República Dominicana:

Rosa Amalia Pilarte, exdiputada del PRM en La Vega, esposa de Micky López, condenada en septiembre de 2025 a 5 años por lavado de activos.

Pascual Aristy Novas, alias “El Regidor”, regidor del PRM en Jimaní, condenado en 2019 por tráfico de drogas.

Estos expedientes, que constan en acusaciones formales, capturas internacionales, condenas firmes y procesos en curso ante tribunales de Estados Unidos y de la República Dominicana, muestran un patrón preocupante de penetración del crimen organizado en estructuras políticas y administrativas.

En este gobierno, donde todo se anuncia como ‘histórico’ o ‘sin precedentes’ sin que sea cierto, sí ha batido un récord único y poco honroso: el número de figuras del PRM vinculadas a casos de narcotráfico con procesos abiertos o condenas en los Estados Unidos.

Lejos de ser un hecho aislado, se trata de un patrón alarmante que refleja cómo el crimen organizado ha encontrado cobijo en las estructuras del poder político actual. Nunca como ahora, el crimen organizado había estado tan cómodo, tan protegido y tan representado en los estamentos del poder político.

Los sectores de la vida nacional, que han tomado conocimiento de estos casos a través de los medios de comunicación, están alarmados por la penetración del narcotráfico en estos estamentos.

En general, y el PLD coincide con esos sectores, se teme que el narcotráfico y el crimen organizado sigan asentados en esos poderes del Estado hasta ser descubiertos, como ha ocurrido con los casos que hoy son públicos.

En consecuencia, queda demostrado que todos los partidos políticos no somos iguales.

Ha sido el PRM el partido que le otorgó aval político a narcotraficantes.

Ha sido el PRM el partido que incluyó narcos en su boleta electoral, permitiéndoles acceder al Congreso Nacional, el primer Poder del Estado, y a otras posiciones electivas.

Son del PRM los funcionarios del gobierno y los electos por el voto popular que, por primera vez en la historia, han sido solicitados en extradición por narcotráfico.

Ha sido el PRM la puerta de acceso del narcotráfico al poder político. Un gobierno que se autoproclama distinto, pero que ha permitido que el crimen organizado tenga asiento, voz y voto en el Estado.

Por otro lado, el mérito de las extradiciones o entregas voluntarias de estos casos no pertenece al gobierno dominicano, como han querido señalar. Las investigaciones, acusaciones y los procesos han sido impulsados por la justicia internacional, especialmente por la DEA y las fiscalías de Estados Unidos, que actuaron a pesar de la inacción del poder local que, en cambio, se ha visto convocado a entregar a quienes visiblemente financiaron sus campañas y han formado parte de su gobierno y el congreso en representación de su partido.

Si el PRM fuera un partido realmente comprometido con la transparencia y la lucha contra el crimen organizado:

Explicará el alcance del financiamiento del narcotráfico para las campañas electorales del 2020 y 2024.

Reconociera que integraron en sus estructuras, en sus candidaturas y en cargos del gobierno a narcotraficantes, dándoles acceso al Estado y que, de no ser por la justicia de Estados Unidos, aun estuviesen en sus puestos y dirigiendo sus redes delictivas.

Reconociera que su gobierno no ha perseguido a los narcotraficantes.

Reconociera que las extradiciones y condenas no son logros de la lucha del gobierno contra el narcotráfico, sino consecuencias de la acción de la justicia internacional.

Se comprometiera a una depuración real de sus estructuras, con filtros éticos y transparencia para expulsar de sus filas y de los puestos públicos, no sólo a los narcos que ya han sido descubiertos, sino a los que aún están bajo la sombra y que el PRM sí sabe quiénes son.

El narcotráfico es una amenaza a la consolidación de la democracia en República Dominicana. Aceptar la normalización de la narcopolítica produce que redes criminales continúen penetrando los gobiernos locales y las estructuras partidarias, como ha propiciado el PRM. El financiamiento

del narcotráfico a la actividad política distorsiona la competencia electoral, compra voluntades, captura las agendas públicas y secuestra la institucionalidad.

De igual manera, la penetración de la política por parte del narcotráfico debilita el Estado, desalienta la cooperación ciudadana y degrada la confianza institucional, produciendo una erosión de la representación popular en la medida que el ciudadano percibe que el poder sirve a intereses criminales, no al interés público.

El país requiere explicaciones transparentes sobre los mecanismos de financiamiento político y la depuración de candidaturas que permitieron estas vinculaciones. El PLD exige que el Partido Revolucionario Moderno explique hasta dónde llega su vinculación y compromiso

con el narcotráfico, sin que tengamos que esperar que otros países soliciten estos criminales en extradición; y exigimos que tomen las medidas correctivas inmediatas, claras, inequívocas y necesarias para romper toda vinculación con esas estructuras criminales y cerrarle el paso a la narcopolítica, que comprometen la paz pública, la seguridad ciudadana, el sistema de partidos políticos y la democracia dominicana.

Y ante este panorama, que avergüenza al país y degrada la política... el gobierno que dice haber hecho historia, en realidad ha hecho otra historia: la de abrirle las puertas del poder al narcotráfico. La narcopolítica no se combate con discursos o con poses: se combate con control de financiamiento, depuración de boletas electorales y rendición de cuentas. Eso es lo que hoy exigimos.

ECONOMÍA, DEUDA Y FINANZAS PÚBLICAS

28 PLD DENUNCIA DESPLOME DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN; PRESENTA MEDIDAS URGENTES DE RESCATE.

03 de noviembre, 2025

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) comparece hoy ante el país para fijar una posición responsable, firme y constructiva ante la crisis que atraviesa el sector de la construcción en la República Dominicana, uno de los pilares históricos del desarrollo económico y social de nuestra nación.

Durante décadas, el sector de la construcción ha sido un motor de crecimiento y generación de empleo, aportando de manera significativa al Producto Interno Bruto (PIB), dinamizando la industria, el comercio y el bienestar de miles de familias dominicanas.

Sin embargo, en los últimos años hemos sido testigos de una preocupante desaceleración, que amenaza con revertir los avances logrados en las administraciones pasadas.

Según el más reciente Registro de Oferta de Edificaciones (ROE-2025-1) publicado por la Oficina Nacional de Estadística, el 52 % de las obras registradas en el país se encuentran paralizadas, un indicador alarmante que refleja la falta de dinamismo en la inversión pública y privada.

Mientras tanto, apenas el 19.6 % de las edificaciones están en ejecución y el 24.1% culminadas, lo que evidencia un estancamiento en la actividad del sector.

Esta situación se agrava por un contexto macroeconómico que combina factores adversos:

Altas tasas de interés hipotecarias, que en 2025 se sitúan en promedio entre 11% y 12%, según datos del Banco Central y medios especializados.

El alza de la tasa del dólar.

Aumento del costo de los materiales de construcción, que ha encarecido las viviendas y reducido la rentabilidad de los proyectos.

Retrasos excesivos en la permisología; algunos permisos tardan entre 8 meses y 1 año, en comparación con los 60-120 días que tomaban en años anteriores.

Aumento de las tarifas de inspección aplicadas por el Ministerio de Vivienda, sin que esto representa una mejora proporcional en los servicios.

Reducción del acceso a bonos de vivienda, que ha alejado a miles de familias del sueño de tener un hogar propio.

Gasto de capital público por debajo de los niveles históricos, lo que ha limitado la inversión en infraestructura y la reactivación del empleo en el sector.

Todo esto ha llevado a que la construcción, que históricamente aportaba tasas de crecimiento de dos dígitos en ciertos períodos, hoy se mantenga en niveles de crecimiento bajos y frágiles, afectando a miles de trabajadores, ingenieros, suplidores y pequeñas empresas.

La caída de la construcción no solo afecta a los inversionistas o al Estado, también a obreros que han perdido su sustento, a las familias que no pueden acceder a un techo digno, y a las MiPymes que dependen de esta cadena productiva.

La parálisis del sector tiene un efecto dominó: menos empleo, menos consumo, menos recaudación y más desigualdad.

El gobierno, en lugar de adoptar medidas efectivas, ha respondido con indiferencia y una política económica desconectada de la realidad. El resultado es un país con más trabas, más burocracia y menos oportunidades.

Ante este panorama, el Partido de la Liberación Dominicana propone un conjunto de medidas concretas y viables para reactivar la construcción

y proteger los empleos dominicanos:

Implementar incentivos fiscales y financieros que reduzcan los costos de construcción y faciliten el acceso a créditos, especialmente para las MiPymes constructoras.

Liberar una partida del encaje legal, de manera focalizada, para financiar viviendas de bajo costo, con tasas preferenciales y garantía de transparencia.

Aumentar la asignación presupuestaria para bonos de vivienda, asegurando que más familias de clase media y trabajadora puedan adquirir su hogar.

Agilizar los procesos de permisos de construcción mediante una ventanilla única digital, que reduzca los plazos a un máximo de 90 días.

Revisar y revertir el aumento desproporcionado de las tarifas de inspección impuestas por el Ministerio de Vivienda.

Crear un fondo especial de reactivación para obras paralizadas, permitiendo su terminación mediante financiamiento puente.

Establecer un mecanismo de supervisión ciudadana y multisectorial, para monitorear la

ejecución de las políticas públicas y garantizar la transparencia en el uso de los fondos.

El PLD no solo cuestiona las malas prácticas del Gobierno, también propone soluciones reales, con la experiencia de un partido que ha demostrado capacidad de planificación, ejecución y resultados.

Creemos con firmeza que reactivar la construcción es reactivar el país y que cada vivienda terminada representa una familia con esperanza, un empleo recuperado y una economía más fuerte.

Llamamos al gobierno a escuchar al sector productivo, a los trabajadores y a las familias dominicanas, a que abandone su indiferencia y actúe con responsabilidad.

No hay tiempo para improvisaciones: el país necesita decisiones valientes y políticas públicas efectivas.

El PLD, junto al pueblo, reitera su compromiso con el desarrollo nacional, la equidad y la transparencia, defendiendo los intereses de cada dominicano y dominicana, frente a la inacción del gobierno actual.

¡La construcción debe volver a ser un símbolo de progreso, no de parálisis!

AGROPECUARIA Y PRODUCCIÓN NACIONAL

29 EL PARTIDO DE LA LIBERACIÓN DOMINICANA (PLD) DENUNCIA QUE EL GOBIERNO LLEVA A LOS ARROCEROS A LA RUINA; PROPONE MEDIDAS URGENTES DE RESCATE.

11 de noviembre, 2025

Nueva vez, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se coloca del lado del pueblo dominicano. En esta ocasión, junto al sufrido productor agropecuario, víctima del desprecio del Gobierno del PRM. Nos referiremos al aterrador aumento de las importaciones de arroz, en 850% durante 2024, en comparación con el 2023.

¡Son ocho veces y media más de arroz importado!

Mientras tanto, los almacenes están repletos, las factorías no pueden comprar la cosecha local, y los productores están al borde de la quiebra.

Como si fuera poco, esas importaciones se han hecho a tasa cero, sin ningún mecanismo de transparencia. Y lo peor, han tenido el descaro de pignorar parte de ese arroz extranjero.

Y es que, del éxito arrocero logrado por el PLD, hoy hemos pasado a una crisis profunda, provocada por la incapacidad del gobierno, que entrampa al sector entre la caída de la producción, las desleales importaciones y el alza inalcanzable del precio al consumidor.

El cultivo del arroz, el rubro agrícola más importante de la República Dominicana, fue autosuficiente durante los gobiernos del presidente Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Ese logro, del presidente Danilo Medina, fue posible gracias al desarrollo e introducción de dos nuevas variedades de arroz —de mayor calidad, productividad y menor ciclo vegetativo—, el fortalecimiento del programa de pignoración, un amplio financiamiento, así como al dragado de ríos, mantenimiento y rehabilitación de canales y mejoría de miles de kilómetros de caminos en las zonas arroceras.

Lamentablemente, la improvisación que impera desde agosto del 2020, ha ocasionado que de 2023 a la fecha exista una crisis dramática, sin precedentes. En consecuencia, la producción y el consumo local han caído, mientras el Gobierno ha inundado el mercado de arroz importado, sin planificación ni respaldo al productor nacional.

Y pese a eso, en este 2025 el Ministerio de Agricultura registra 450,045.2 quintales de arroz importado, sin contar los contrabandos que están siendo denunciados por los productores y procesadores. De esta manera, violando los acuerdos de la Comisión Nacional Arroceras y en pacto de aposento del ministro de Agricultura con comerciantes, han acumulado y tienen en almacenes alrededor de 159,090.9 toneladas métricas, equivalente a 3.5 millones de quintales de arroz importados, que hoy ocupan las factorías y los almacenes del país, sin contar los contrabandos.

Es así como está colapsada la capacidad de almacenamiento y se ha frenado la compra regular del arroz nacional. Esta situación ha ocasionado quejas de los productores en todas zonas arroceras del país, pues tan perdiendo capital de trabajo, están quebrando.

Recordamos que, debido a la preocupación por la mala gestión pública y el dominio de comerciantes-importadores en las decisiones agropecuarias del gobierno, la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (Adofa), la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz) y el Consejo Nacional de Parceleros de Arroz de la Reforma Agraria, ya advirtieron al ministro de Agricultura que, de no tomarse medidas urgentes, podría generarse una situación delicada y perjudicial, con repercusiones que amenazan la estabilidad que

ha caracterizado al sector durante los últimos 25 años.

“El gobierno nos ha dejado solos. No contamos con apoyo técnico ni financiero, y las importaciones nos están ahogando”, exclamó recientemente Santo Paulino, del Consejo Nacional de Parceleros de la Reforma Agraria.

¡Y tienen razón!

En este sentido, advertimos de que no suceda ahora como ocurrió con la tormenta Fiona, donde la mayoría de los pagos fueron a personas hasta ajenas de la agropecuaria. Se tiene el temor de con el apoyo económico que debe entregar el gobierno por el acame y el rebrote que tuvieron las plantas, debido a la permanencia de las lluvias, no llegue a los afectados.

Por eso, consciente de que el arroz es cultivado en 21 provincias e involucra a 31,123 productores y 304 mil empleos directos e indirectos, el PLD exige la implementación de siete acciones inmediatas para rescatar el sector.

1. Detener por un año las importaciones de arroz y, posteriormente, evaluar junto a los productores su necesidad o no futura, restableciendo la subasta pública de permisos de importación como mecanismo transparente y regulador.

2. Vender a Haití un millón y medio de quintales del inventario de arroz importado. El resto, de lo importado, colocarlo en planes sociales en la franja de la población más pobre, que ha disminuido el consumo per-cápita de arroz en los últimos dos años, y dejar la otra parte del arroz importado para cubrir el déficit de la producción del cereal en este año 2025, porque el arroz importado y el de contrabando, superan los 4 millones de quintales, que entorpecen la comercialización de la cosecha nacional.

3. Habilitar factorías y cooperativas de productores organizados para el acopio de una parte de la cosecha nacional, ofreciendo servicios

de procesamiento a productores individuales o colectivos, ante la saturación que han ocasionado las importaciones en las factorías tradicionales.

4. Ampliar el programa de pignoración correspondiente a este año hasta abril de 2026, y entregar definitivamente RD\$4,000 millones adicionales a través del Banco de Reservas o el Banco Agrícola.

5. Pagar los RD\$448.0 millones pendientes a los productores, aprobados mediante la Resolución 01-2023 (RD\$100 por fanega), incluyendo el remanente del año 2022, equivalente a RD\$82.0 millones.

6. Restablecer y democratizar el programa de subsidio a los fertilizantes, cuyo costo han experimentado aumentos sostenidos. Con esta medida, se garantizaría la rentabilidad del productor y sostendría la estabilidad de precios al consumidor. Pero en esta ocasión deben tomar en cuenta los pequeños y medianos productores, sin ningún tipo de distinción.

7. Organizar la siembra en dos cosechas anuales (primavera e invierno, o un ciclo con retoño), lo que contribuiría a una mejor planificación, control de plagas y enfermedades. Para esto se debe involucrar al Indrhi y a las Juntas de Regantes. Las empresas comercializadoras de semillas deberán ajustarse a este calendario.

El PLD reitera su compromiso con los productores nacionales. Creemos en el trabajo, en el esfuerzo, en la productividad y en una política pública que defienda la soberanía alimentaria del pueblo dominicano.

Por eso decimos alto y claro: ¡Basta ya de improvisación!

¡Basta ya de favorecer a los importadores en detrimento del productor local!

El país no necesita discursos, necesita acción, visión y compromiso.

ECONOMÍA, DEUDA Y FINANZAS PÚBLICAS

30 PLD DENUNCIA DESPLOME DE LA ECONOMÍA GOLPEA A MIPYMES; PROPONE SOLUCIONES.

17 de noviembre, 2025

El Partido de la Liberación Dominicana expresa su solidaridad con las decenas de miles de micro, pequeños y medianos empresarios y empresarias que hoy luchan por mantener abiertas sus puertas en medio de una gestión económica que no ha sabido acompañarlos ni ofrecerles un entorno de estabilidad.

Desde finales de 2024, la economía dominicana empezó a mostrar señales claras de enfriamiento. Durante 2025 esta tendencia se ha profundizado, reflejándose en un crecimiento económico insuficiente, que apenas alcanza el 2.2 % en los primeros 9 meses del año.

Los indicadores tributarios confirman esta realidad. Según datos oficiales de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), las recaudaciones por ITBIS interno solo crecieron un 2.8 % entre enero y septiembre de 2025, frente al mismo período de 2024. Esto significa que, al descontar la inflación, se registra una caída real de 1.4 %, evidenciando lo que sienten todos los sectores productivos: el consumo está estancado y la economía no avanza al ritmo que necesita la gente.

El comportamiento de las importaciones, un termómetro directo de la demanda, confirma este deterioro. En los primeros diez meses de 2025 las importaciones despachadas para consumo apenas crecieron 0.3 % respecto al año anterior. Más aún, cuando se observan productos esenciales para las MIPYMES, las cifras son claras: las importaciones de televisores cayeron en 4.8 millones de dólares; las de computadoras en 13.1 millones de dólares; las de neveras en 3.7 millones de dólares, y las de vehículos disminuyeron en 22.7 millones de dólares.

Estas caídas no son estadísticas aisladas: reflejan la reducción del poder adquisitivo de los hogares y la baja en las compras que afecta directamente a

los negocios del sector comercio y servicios. Pero el estancamiento económico también golpea con fuerza a otros sectores estratégicos.

En la construcción, como ya hemos denunciado, la caída de la demanda interna —familias con menor capacidad para adquirir viviendas, mayores costos de insumos y dificultades para acceder al financiamiento— ha frenado ventas y proyectos. A esto se suman los reclamos de contratistas del Estado, que reportan pagos lentos, planificación improvisada y procesos de contratación poco organizados, provocando retrasos de años en obras como la línea del Metro de Los Alcarrizos o proyectos anunciados con los recursos de AERODOM.

En la industria, la reducción de la actividad comercial se traduce en menos pedidos de materiales, empaques, tuberías y productos manufacturados, así como de metalurgia, lo que debilita los encadenamientos productivos que sostienen buena parte de la economía nacional.

El retorno de los apagones ha agravado esta situación. Varias empresas han visto aumentar sus costos operativos por las compras adicionales de gasoil necesarias para mantener funcionando sus plantas eléctricas.

El comercio, por su parte, ha experimentado ventas lentas durante todo 2025. Según un estudio publicado en noviembre de 2025 por La Sociedad, casi el 60 % de los encuestados afirma que su situación económica está peor que hace un año, un reflejo claro de los desafíos que enfrentan hogares y MIPYMES.

Ante este panorama, y con un Gobierno que se ha mostrado ausente y desconectado de las necesidades inmediatas de este sector, el Partido de la Liberación Dominicana presenta un conjunto

de medidas concretas para aliviar la carga económica de los hogares, reactivar la economía nacional y las MIPYMES en todo el territorio nacional:

Prestar atención a los emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas, quienes aportan el 32 % del PIB de la economía dominicana. Ellos merecen que el gobierno les atienda y les escuche.

Impulsar los encadenamientos productivos mediante los programas que el PLD dejó en marcha y que han sido abandonados.

Eliminar las trabas burocráticas que frenan la inversión, agilizando los permisos y los procedimientos para que el sector productivo pueda crecer y generar empleos.

Volver a poner en funcionamiento los 25 Centros MiPymes que acompañaban y ofrecían servicios de asesoría gratuita en alianza con las academias y el sector privado.

Focalizar los subsidios sociales en las familias que realmente lo necesitan, garantizando que cada peso invertido proteja el consumo de los hogares más vulnerables.

El Partido de la Liberación Dominicana reafirma su compromiso de mantenerse escuchando a la gente, atento, vigilante y responsable, denunciando todo aquello que afecte su calidad de vida, pero también aportando soluciones reales que permitan recuperar la estabilidad, el crecimiento y la esperanza de las familias dominicanas.

TRANSPARENCIA, JUSTICIA Y FISCALIZACIÓN

31 PLD ACLARA EL GOBIERNO REINAUGURA CÁRCEL LA NUEVA VICTORIA AUMENTANDO EL COSTO EN RD\$3,000 MILLONES.

24 de noviembre, 2025

Los recurrentes desatinos del Gobierno PRM nos convocan nueva vez a dirigirnos al pueblo dominicano para aclarar mentiras, manipulaciones y engaños.

Hoy nos dirigimos a ustedes con el compromiso de siempre: hablar con responsabilidad, claridad y respeto a la verdad.

Como es de conocimiento público, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana ejecutaron el plan de modernización y humanización más importante del sistema penitenciario dominicano. Un programa diseñado para transformar los 41 centros penitenciarios del país y la construcción de los nuevos centros necesarios para poner fin a décadas de hacinamiento.

Este plan fue financiado durante años y en el último gobierno 2016-2020 con RD\$3,000 millones provenientes del acuerdo con Odebrecht y con RD\$6,500 millones del presupuesto nacional. Su objetivo era construir y adecuar recintos dignos, seguros y orientados a la reinserción de los privados de libertad.

Y es precisamente por esa responsabilidad histórica y por ese compromiso con la transparencia que hoy le comunicamos a la ciudadanía: el recinto La Nueva Victoria, renombrado por el Gobierno como “Las Parras”, fue terminado, equipado, inaugurado y recibido desde el 10 de agosto de 2020. Es un hecho documentado. La prensa y el país lo vieron. Y el Gobierno lo recibió formalmente en agosto de 2020 y volvió a certificarlo en junio de 2021.

¿Qué entregamos en 2020? Una ciudad penitenciaria, construida en 6 millones de metros cuadrados, que estaba lista para iniciar operaciones de inmediato, con una capacidad inicial para recibir 3,000 privados de libertad en ese momento y 5,778 en 45 días, con 87 edificios (30

administrativos y 57 de alojamiento), con espacio para 8,778 privados de libertad distribuidos en:

1,600 celdas permanentes

112 celdas de observación

80 celdas de reflexión

48 de máxima seguridad

88 de movilidad reducida

96 celdas conyugales,

Además:

Un complejo penitenciario con cuatro módulos y 11 cárceles independientes

42 garitas y 13 torres de vigilancia

Más de mil cámaras de videovigilancia y 77 salas de monitoreo

Dos salas de audiencias judiciales

Lagunas productivas con millones de peces, invernaderos, apiarios y talleres industriales

Aulas, áreas materno-infantiles y espacios de formación

Una pista olímpica multiuso

22 canchas de baloncesto

5 estadios de beisbol

2 rings de boxeo

Estación de bomberos con su camión y equipos

12 perros K9 y su personal de adiestramiento

Vehículos operativos, autobuses, microbuses, buggies

Una estación de bomberos equipada

Dispensarios médicos, entre otros.

Todo estaba completo. El 12 de agosto de 2020 debían trasladarse los primeros 225 internos desde San Isidro. Ese traslado no se realizó porque la Comisión de Transición del PRM solicitó detenerlo. La obra estaba lista. Lo que faltó fue voluntad.

Las consecuencias fueron graves

El retraso prolongó el hacinamiento crítico en La Victoria. En esos años hubo hechos violentos y un incendio que cobró la vida de más de 100 reclusos. Fue una tragedia que pudo evitarse, si los traslados se hubieran realizado a tiempo.

¿Qué hizo el Gobierno del PRM con una obra terminada?

Tres cosas:

Primero: La recibió formalmente en agosto de 2020. Luego, con sus propias modificaciones, el gobierno del PRM, a través de la Procuraduría General de la República, recibió la obra de manera conforme en junio de 2021, según certificación firmada por la Procuraduría y la Constructora REMIX de esta misma primera fase.

Con ese acto formal, se reconoció por escrito que La Nueva Victoria estaba terminada, equipada y plenamente operativa. La Procuraduría certificó su terminación por escrito.

Segundo: Renovó los contratos que antes había cuestionado. Al renovarlos, admitió que no había sobrevaluación, validando así que se trataba de las ofertas más económicas, realizando ajustes de estilo por RD\$220 millones adicionales.

Incluso, el actual Director General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, declaró públicamente que las adecuaciones que él quería realizar “se terminaban con RD\$280 millones” y que “el Presidente estaba equivocado cuando señaló que se necesitaban 1,600 millones”.

Tercero: Aumentó el costo en más de RD\$3,000 millones. Entre ellos:

RD\$220 millones en ajustes estéticos.

RD\$385 millones en adendas al Consorcio Grupo Trifortis (diciembre 2023), que incluía a BYOTransfalto HAC, una empresa sancionada, inhabilitada permanentemente y con su RNP cancelado por falsificación de documentos mediante resolución firme de la Dirección General de Compras y Contrataciones de esta misma gestión. Pese a estar legalmente impedida, ese Consorcio y BYOTransfalto HAC, recibió pagos posteriores por RD\$77 millones, constituyendo un hecho gravísimo y totalmente inadmisibles en la contratación pública.

Y luego, se realizó un tercer aumento de RD\$2,100 millones a Grupo Malespín, más RD\$160 millones en equipamiento, en noviembre de 2024.

Lo que se observa, como nuevo, es el cambio de pintura, mallas, cisternas y casetas.

Por eso preguntamos con responsabilidad:

¿Eso cuesta más de RD\$3,000 millones? La verdad es simple.

Lo que hoy se presenta como nuevo ya estaba construido, equipado e inaugurado desde 2020.

Lo único realmente nuevo es el cambio de pintura, mallas, cisternas y casetas, y el cambio de nombre a “Las Parras”. Invitamos a los medios a revisar sus archivos de agosto de 2020.

Las imágenes hablan por sí solas y aquí se las mostramos.

Es por ello que, con responsabilidad, señalamos que la improvisación y el abandono del gobierno del PRM tuvieron y tienen consecuencias humanas devastadoras. Y señalamos que:

El Gobierno reinaugura como nuevo algo que ya estaba terminado.

La obra fue entregada y recibida hace casi cinco años.

Se han gastado más de RD\$3,000 millones en ajustes que solicitamos puedan ser auditados, pues los ajustes realizados no justifican el gasto incurrido.

Y denunciamos que el retraso en operar dicha cárcel, provocó tragedias que pudieron evitarse, retrasó la reeducación y la reinserción social de miles de privados de libertad que hoy pudieron ser entes productivos, y afectó a sus familias.

El país merece la verdad por encima de todas las cosas, la transparencia y el respeto. Por eso preguntamos con sentido de Estado: ¿En qué gastó el Gobierno más de RD\$3,000 millones en una obra terminada, certificada y equipada desde 2020?

¿Cómo se resarce a los miles de privados de libertad estos 5 años en los que pudieron ser formados en actividades productivas y reeducados para su reinserción social como ordena la Constitución?

El PLD reafirma su compromiso con la institucionalidad, la transparencia y la dignidad humana, por lo que seguiremos defendiendo la verdad y los intereses del pueblo dominicano.

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

32 PLD DENUNCIA DESCALABRO DEL SISTEMA DE SALUD Y EXIGE MAYOR TRANSPARENCIA.

01 de diciembre, 2025

Nueva vez, el Partido de la Liberación Dominicana, en defensa de la verdad y de la salud del pueblo, comparece para desmontar las mentiras que con miles de millones de pesos en publicidad difunde el Gobierno del PRM.

Hoy nos convoca un tema que no admite silencio: la profunda contradicción entre el discurso del Gobierno sobre la salud pública y la realidad que enfrenta nuestra gente en los hospitales, en los centros diagnósticos y en cada rincón donde se supone que el Estado debe garantizar atención digna.

En ese sentido, observamos con preocupación que se ha anunciado un presupuesto para atender a más de 8,200 pacientes con enfermedades catastróficas. Sin embargo, los informes muestran que solo 1,560 han recibido asistencia real.

En el segundo trimestre de este año la ejecución planeada fue de un 76%. En el tercer trimestre fue de un 56%, hecho que denota un aumento porcentual deficiente en la medida que avanza el tiempo. Esa brecha sigue provocando muertes sin tratamiento esto es inexplicable, nos obliga a preguntarnos:

¿Dónde están los recursos? ¿En qué falló la planificación? ¿Por qué lo que se publica no coincide con lo que vive la población?

A esta inconsistencia se suman los escándalos que rodean Promese-Cal, con contratos de proveedor único que favorecen a un reducido grupo.

Este tipo de prácticas cuestionan la transparencia, reducen la competencia y pueden elevar de manera artificial los costos de insumos, lo que afecta directamente a quienes dependen del sistema público.

Mientras tanto, el esperado Hospital de Especialidades de la Ciudad Sanitaria continúa sin

ofrecer plenamente los servicios anunciados una y otra vez.

En paralelo, centros emblemáticos como el Incart han sufrido un apagón de más de 36 horas sin ninguna explicación y desabastecimiento de medicamentos, comprometiendo la continuidad de tratamientos para cientos de pacientes que no pueden esperar y tienen que trasladarse a otros centros privados a buscar asistencia.

En algunos centros hemos vuelto a la práctica de reciclar materiales que son desechables, cosa que ya habíamos superado. Todo por falta de medicamentos e insumos de calidad, lo que pone entre dicho la falta de humanización de los servicios.

El deterioro de la planta física de los principales centros de salud de la capital trae suspicacia en las acciones y anuncios del SNS que trabaja en la mejora de hospitales.

Vemos con reservas cómo se colocan equipos sin compromisos de mantenimiento, sin los debidos contratos de asistencias de técnicas de funcionamiento, por ejemplo, el Hospital Municipal de Yamasá, donde equipan el quirófano 2 y, 8 meses después, no se ha realizado la primera cirugía porque la compañía que suplió la máquina de anestesia no ha ido a hacer la inducción del personal para su uso.

El pueblo dominicano cuestiona si esta desatención tiene relación con posibles conflictos de interés dentro del Servicio Nacional de Salud, tomando en cuenta versiones que vinculan a altos funcionarios con sectores privados del ámbito sanitario.

Pero nada resulta más alarmante que lo que recientemente ha salido a la luz sobre el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Nosotros, junto al pueblo dominicano, esperamos

que se inicien las acciones judiciales dentro del marco del respeto y el apego a la ley sin vacas sagradas. Que se actúe justo en la dimensión que se habla.

Todo esto conforma un sistema en el que los discursos parecen avanzar más rápido que los hechos, en el que se celebran logros que no se materializan, mientras el pueblo termina cargando con las consecuencias de decisiones tomadas sin rendición de cuentas.

En nombre de los pacientes, de los profesionales de la salud y del pueblo dominicano en general, el Partido de la Liberación Dominicana exige:

1. Transparencia total sobre los montos desviados, los contratos cuestionados y los responsables, sin excepción.
2. Justicia real, que impida que los culpables permanezcan tranquilos en sus casas mientras el sistema colapsa.
3. Una pronta explicación y establecer responsabilidades si las hubo, en el apagón de más de 36 horas que sucedió en el Incart lo cual causó muerte de algunos pacientes y daño en el

sistema afectando la entrega de medicamentos de uso continuo en este centro.

4. La publicación de un plan técnico que asegure que los pacientes que demandan medicamentos de alto costo puedan tener respuesta temprana a sus necesidades.

5. Una explicación de por qué hemos vuelto a la práctica de reutilizar insumos que son desechables en algunos centros ya que esto se había erradicado en la asistencia pública.

Cuando se roba en salud, no se roba dinero: se roba vida, y la vida del pueblo dominicano no tiene precio ni partido.

Demandamos del Gobierno PRM que este no sea otro capítulo de impunidad, sino el punto de partida para la transformación real del sistema. Que la salud deje de ser botín político. Que los recursos vuelvan a donde pertenecen: al servicio del pueblo.

A todo pulmón, fuerte y claro, reiteramos a las autoridades indolentes: ¡La salud del pueblo dominicano no se toca!

TRANSPARENCIA, JUSTICIA Y FISCALIZACIÓN

33 LA ACTUACIÓN DIFERENCIADA DEL MINISTERIO PÚBLICO: EVIDENCIAS DE UNA JUSTICIA SELECTIVA Y POLÍTICAMENTE ORIENTADA.*08 de diciembre, 2025*

El Partido de la Liberación Dominicana fija hoy su posición ante un patrón institucional que amenaza gravemente la democracia dominicana: la actuación diferenciada, selectiva y políticamente orientada del Ministerio Público.

En República Dominicana se ha consolidado una práctica preocupante: el Ministerio Público actúa de una manera cuando los imputados están vinculados al Partido Revolucionario Moderno (PRM), y de una manera radicalmente distinta cuando se trata de dirigentes, exfuncionarios o relacionados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Esta comparación es empírica, observacional y verificable. Y su resultado es claro: una justicia absolutamente dependiente del poder político, operando como instrumento partidario para proteger al PRM, evitar dañar su imagen — protegiéndolo de amenazas externas como las solicitudes de extradición que se procesan en silencio — y perseguir con dureza a quienes representan un riesgo político o electoral para el partido de gobierno.

A continuación, presentamos hechos concretos que evidencian la parcialidad y el comportamiento político del Ministerio Público.

Cuando se trata del PRM: suavidad, discreción y garantías plenas

El patrón es consistente:

No hay allanamientos televisados y cuyos hallazgos se mediaticen.

No hay operativos de madrugada con información disponible para la prensa.

No hay cámaras convocadas por el propio Ministerio Público.

No se utilizan medidas humillantes ni actuaciones degradantes.

Los investigados del PRM son informados previamente, permitiendo entregas voluntarias, incluso cuando se trata de extradiciones o casos vinculados al narcotráfico.

Desde el momento en que se conoce una investigación, se les dan meses —de manera informal— para ubicar abogados, organizarse y prepararse sin presión pública.

Cualquier imputado del PRM duerme en su casa, se baña, se afeita, se viste y llega voluntariamente sin traumas ni despliegues hostiles.

Los expedientes se manejan con hermetismo absoluto:

0 filtraciones, 0 escándalos mediáticos, 0 juicios anticipados.

Las declaraciones oficiales hablan ahora de “respeto procesal”, “prudencia” y “garantías”.

En síntesis: si son del PRM, se les protege. Si afecta la imagen del gobierno, se baja el volumen.

Cuando se trata del PLD o de cualquier ciudadano común: espectáculo, humillación y condena mediática previa

Aquí aparece la otra cara del Ministerio Público.

Allanamientos a las 3 y 4 de la mañana, con cámaras previamente convocadas.

Personas sacadas sin ropa, frente a sus familias y vecinos.

Uso excesivo de cascos, chalecos, armas largas y despliegue teatral.

Filtraciones masivas: 20 mil, 30 mil, hasta 50 mil páginas divulgadas antes de llegar a los abogados.

Solicitudes de coerción desproporcionadas.

Persecución mediática coordinada y sincronizada.

Narrativa pública del Ministerio Público describiendo a los imputados como “culpables” antes del juicio.

Este comportamiento no es técnico. No es jurídico. ES POLÍTICO. Estamos ante un Ministerio Público dependiente y subordinado funcionalmente al interés político del Gobierno.

Un caso típico de Lawfare: el uso del sistema penal con fines políticos

El comportamiento del Ministerio Público no solo distorsiona el sistema de justicia, sino que lesiona directamente la democracia y el sistema de partidos. Se trata de un patrón reconocible en estudios internacionales: lawfare, el uso del aparato penal para eliminar adversarios políticos.

Las características están todas presentes:

Protege a los cercanos al poder.

Persigue a quienes amenazan la hegemonía política del partido de gobierno.

Manipula la percepción pública mediante filtraciones selectivas.

Diseña espectáculos mediáticos para destruir reputaciones.

Administra garantías según la conveniencia electoral.

Todo esto configura una justicia selectiva, cuyo criterio de actuación no es jurídico, sino CLARAMENTE POLITICO.

Y esa selectividad —basada en el interés del gobierno— es incompatible con la democracia, porque destruye la igualdad ante la ley y convierte al sistema penal en un instrumento partidario.

El PLD reafirma su compromiso histórico con el Estado de derecho. Pero advertimos, con responsabilidad y firmeza, que:

Una justicia utilizada para proteger a unos y perseguir a otros deja de ser justicia.

La democracia dominicana no puede sostenerse con un Ministerio Público al servicio de un partido.

El país necesita un sistema judicial independiente, no un instrumento político disfrazado de legalidad.

Lo que necesita nuestro país no es una independencia de discurso, sino de actuación, y eso se refleja con igualdad ante la ley.

El PLD denuncia ante el país que el Ministerio Público está actuando con diferenciación política, aplicando un trato suave al PRM y un trato cruel y humillante a cualquier otro ciudadano bajo investigación, manipulando la justicia para mantener la hegemonía del partido de gobierno.

Lo decimos con claridad: La justicia selectiva es incompatible con la democracia. Y la democracia dominicana merece algo mejor.

COSTO DE VIDA, SALARIOS Y CLASE TRABAJADORA

34 PLD DENUNCIA CENA NAVIDEÑA 2025 ALCANZA COSTO RÉCORD DE RD\$16,825.14; PROPONE MEDIDAS URGENTES.

17 de diciembre, 2025

La cena navideña, una de las tradiciones familiares más sagrada del pueblo dominicano, está siendo arrancada de las mesas por el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que ha demostrado ser incapaz, improvisador e indiferente a las necesidades de la gente.

El Gobierno del PRM se la ha puesto difícil a centenares de miles de familias dominicanas, las cuales no podrán celebrar como se debe la cena navideña el próximo 24 de diciembre.

El país vive una estrechez económica asfixiante: los salarios no alcanzan, el presupuesto familiar se diluye y cada semana los productos esenciales aumentan sin freno.

Desde el Partido de la Liberación Dominicana vemos con profunda preocupación cómo la producción nacional se desploma, el sistema de comercialización se concentra en manos de un pequeño grupo privilegiado por el Gobierno y las importaciones masivas destruyen la producción del campo dominicano.

Para agravar aún más la situación, el PRM eliminó los programas sociales que durante los gobiernos del presidente Danilo Medina garantizaban alimentos y productos navideños de manera gratuita a los hogares más vulnerables.

Hoy, millones de dominicanos están obligados a costear su cena navideña con ingresos propios, pero la mayoría simplemente no puede.

Los llamados bonos navideños del gobierno no sustituyen la cobertura y ni el impacto real de los programas sociales implementados por el PLD.

1. Un aumento histórico y devastador

El costo de la cena navideña para una familia dominicana registra un incremento sin precedentes: 32.54% solo en el último año.

Aunque desde que llegó el presente gobierno, los precios no han tenido freno, es en este año 2025 cuando se verifica la más alta alza anual de los precios de los alimentos.

Veamos la evolución del costo de la cena navideña:

2020: RD\$5,805.98

2021: RD\$6,780.00

2022: RD\$8,114.70

2023: RD\$9,500.20

2024: RD\$11,350.09

2025: RD\$16,825.14

En solo 12 meses, el aumento es un verdadero escándalo.

Y en los 5 años del PRM, el alza acumulada supera un 189.79%. Estamos hablando de RD\$11,019.16 más que el monto del 2020.

2. Los precios de los alimentos navideños están en su punto más alto

Los principales productos de la cena hoy son inalcanzables:

Cerdo horneado: RD\$630.00 la libra.

Pavo crudo: RD\$209.95 la libra.

Pollo horneado: RD\$470.00 la unidad.

Carne de res molida: RD\$244.99 la libra.

Arroz: RD\$45.50 la libra.

Guandules: RD\$121.10 la lata.

Ajíes morrones: RD\$89.90 la libra.

Queso mozzarella: RD\$208.95 la libra.

Leche evaporada: RD\$68.95 la unidad. Papa: RD\$48.23 la libra.

Zanahoria: RD\$60.00 la libra.

Sal: RD\$19.95 la libra.

Cebolla: RD\$54.99 la libra.

Ajo: RD\$150.15 la libra.

En dulces y frutas tradicionales también se observan incrementos severos:

Manzana: RD\$94.95 la libra.

Uva: RD\$228.00 la libra.

Telera: RD\$89.95 la unidad.

Almendras y avellanas: combinadas más de RD\$390.00 la libra.

Ponche: RD\$734.95 la unidad.

A esto se suma un drama socio-económico:

Producto de la crisis económica que vivimos, muchas familias tienen deudas contraídas que tendrán que saldar con la regalía. Por tanto, carecerán de dinero para hacer su cena navideña.

3. ¿Por qué hemos llegado a este nivel de crisis?

La causa es clara: el abandono total del campo dominicano por parte del Gobierno.

El pueblo dominicano ha visto cómo el Gobierno desmontó las políticas que sostenían la producción nacional: se dismantelaron los programas de apoyo a la agricultura, la preparación de terrenos, semillas certificadas, asistencia técnica, extensión agrícola, mejoría de caminos vecinales, rehabilitación de canales de riego y construcción de embalses.

Además:

El Ministerio de Agricultura fue des-tecnificado, cancelando cientos de agrónomos y sin ingresar nuevos profesionales. El Instituto Agrario Dominicano ha sido destruido.

Se dejó entrar la Peste Porcina Africana.

La depreciación del peso dominicano elevó los

costos de producción.

Las importaciones indiscriminadas ahogan al productor nacional.

Y tenemos como resultado de esta marginalidad gubernamental al campo, familias que antes comían tres veces al día, como debe ser, hoy comen dos, y en muchos casos, solo una vez.

Esa precariedad se refleja también en que no hay dinero para una cena navideña digna 2025.

Hoy, productores de arroz, leche, carne, cerdo, pollo, vegetales, plátanos, café, habichuelas, cebollas, banano y cítricos están quebrado. Los precios en finca están en el suelo, pero el consumidor paga más caro que nunca los alimentos.

4. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) propone cinco acciones urgentes e impostergables, para proteger a los hogares y rescatar la producción nacional:

Garantizar el acceso universal a la cena navideña con acciones económicas, sociales y financieras inmediatas. El gobierno debe disponer que cada familia pueda cenar el 24 de diciembre.

Restablecer las cajas navideñas para los sectores vulnerables y distribuir las mediante organizaciones sociales, comunitarias y religiosas.

Corregir distorsiones, el abandono del sector agropecuario, y eliminar negocios oscuros en el ministerio de Agricultura, asegurando producción suficiente y precios asequibles para todos los dominicanos.

Reincorporar los agrónomos cancelados y reactivar programas técnicos de dotación de semillas certificadas, preparación de suelos, planes científicos fitosanitarios y de apoyo agrícola.

Respaldar a los productores, regulando importaciones sólo a su necesidad y asegurando estabilidad y apoyo técnico. Además, establecer precios de sustentación de las cosechas.

El encarecimiento brutal de la cena navideña 2025 es la expresión más clara del deterioro económico,

social y productivo que golpea a la República Dominicana.

La comida, la producción, el campo y la familia dominicana están pagando el precio de la improvisación, la incompetencia y el abandono gubernamental.

El PLD reafirma su compromiso de defender a las familias, a los productores y a los consumidores,

para rescatar la producción nacional y devolver la estabilidad alimentaria que disfrutó el país durante los gobiernos responsables, planificados y orientados al bienestar de la gente, como los del PLD 2012-2020.

Que lo sepa el Gobierno: ¡La felicidad y la dignidad de los dominicanos y dominicanas están primero!

EDUCACIÓN Y JUVENTUD

35 **PLD DENUNCIA FUSIÓN EN EDUCACIÓN BUSCA REDUCIR 4% PIB; TILDA MEDIDA DE “INACEPTABLE”.**

12 de enero, 2026

El Partido de la Liberación Dominicana comparece hoy ante ustedes y la ciudadanía para reiterar su rechazo de manera categórica a las pretensiones del Gobierno del PRM de fusionar el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Se trata de una propuesta que carece de sustento técnico conocido y que pone en riesgo la calidad, la gobernanza y el financiamiento del sistema educativo nacional.

Recordamos que el 20 de diciembre de 2024, en este mismo escenario, advertimos que la Constitución de la República, en su artículo 63, reconoce la educación como un derecho fundamental, garantizando su accesibilidad, integralidad, calidad e igualdad de oportunidades.

Asimismo, establece el deber del Estado de fortalecer la educación superior, respetando la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.

Estos principios no son declaraciones retóricas: son mandatos constitucionales orientados a formar una ciudadanía crítica, productiva y comprometida con el desarrollo nacional. El PLD ha demostrado, con hechos, su compromiso con una educación pública de calidad. Por ello, nos preocupa profundamente, al igual que a toda la sociedad, que el actual gobierno pretenda subordinar la educación superior a una estructura que enfrenta retos significativos en el nivel preuniversitario.

Esta preocupación se sustenta en los desafíos que enfrenta el sistema a nivel nacional, tal como lo evidencian los resultados de las Pruebas Diagnósticas Nacionales de 3ero. y 6to. grado de primaria, las pruebas nacionales y las pruebas regionales e internacionales, en un contexto en el que no se han logrado los aprendizajes esperados, lo que se suma a una estructura burocrática sobrecargada, disparando los gastos corrientes por esta administración.

Peor aún: el gobierno del PRM no ha sido capaz de alcanzar las tasas de cobertura que se tenían previo a la pandemia en ninguno de los niveles, ni la tasa de asistencia, hecho que evidencia los graves problemas de gestión que tiene el gobierno, ya que no ha podido elevar los indicadores fundamentales del sistema.

A pesar el amplio rechazo de los diferentes sectores, que el sólo anuncio de la fusión de ambas instancias educativas ha provocado desde que fue propuesto, el Gobierno Abinader insiste en llevar a cabo ese improvisado proyecto, revelando su decisión desacertada en el contenido del artículo No.15 del del consabido proyecto, que no es ni más ni menos que reducir el 4% del Producto Interno Bruto asignado exclusivamente al Ministerio de Educación.

El gran logro nacional que significó la asignación del 4 % del PIB a la educación, vigente desde el año 2013, hoy se encuentra en riesgo. Ese compromiso ha permitido la construcción y el mantenimiento de la infraestructura escolar, la formación y dignificación del magisterio, la atención a estudiantes de los sectores más vulnerables y la modernización del servicio educativo. Son conquistas reales y sentidas del pueblo dominicano que no pueden ponerse en peligro.

En este contexto, el PLD denuncia ante el pueblo dominicano que la iniciativa no ha sido acompañada de estudios técnicos públicos que expliquen cómo esta fusión contribuiría a mejorar el sistema educativo. Por el contrario, todo indica que responde a deficiencias en la ejecución del presupuesto educativo, más que a una visión integral de fortalecimiento institucional.

De hecho, al revisar el presupuesto aprobado para el año 2026, se observa que la suma de las

asignaciones de ambos ministerios se mantendría dentro del 4 % del PIB, sin considerar el impacto real que dicha redistribución tendría en el sistema educativo.

Esa decisión se traduciría en menos aulas, menos jornadas escolares extendidas, menos uniformes, útiles y libros, un deterioro de la alimentación escolar y una reducción de los programas de formación y actualización docente, indispensables para nuestros maestros y maestras. Para el PLD, esto representa un retroceso INACEPTABLE en las conquistas educativas del país.

A su vez, esta propuesta irracional de fusión impactará negativamente en las universidades e instituciones de educación superior del país, en las mejoras e innovaciones necesarias en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en las becas que se otorgan y en los recursos que hacen falta en investigación, ciencias y tecnología.

En esta oportunidad, justo a un año y 22 días después de aquella declaración, reafirmamos nuestro enérgico rechazo al despropósito del presente Gobierno, ante la introducción en el Senado de la República del Proyecto de Ley que pretende eliminar el Mescyt y transferir todas sus atribuciones al MinerD.

El gobierno del PRM ha mostrado una desconexión con el bienestar y la calidad de vida de la población, así como por los derechos básicos de la ciudadanía, intentando resolver su creciente déficit por un gasto corriente irresponsable, hipotecando al país mediante el endeudamiento exorbitante y desenfrenado, o bien recortando o eliminando programas sociales exitosos de amplio impacto social.

Este proyecto de ley de la llamada fusión, además de limitado, insustancial e inviable, pretender financiar, con el 4% del PIB, la nefasta ejecutoria actual que ha llevado a comprometer más del 90% del presupuesto en gastos fijos del MinerD, e incluirle las operaciones del subsistema de educación superior, la investigación, el desarrollo y la innovación.

Es también negador de conquistas democráticas inherentes a la educación, el planteamiento en su artículo 16 la eliminación de los Consejos Nacionales deliberativos, que tienen como finalidad la búsqueda de consensos en la toma de decisiones y lo reduce a un único Consejo consultado, dejando en manos de una sola persona: el ministro o ministra, lo que crea un monopolio de las decisiones normativas, operativas, administrativas y financieras de la educación.

Defendemos la articulación de los tres subsistemas de la educación: preuniversitaria, superior y técnico profesional, así como el marco nacional de cualificaciones, actualmente en discusión plural del Pacto Educativo en el seno del CES, jamás la reducción o eliminación de cualquiera de ellos.

El PLD, siempre apegado a sus principios y su probada vocación de servicio al pueblo dominicano, enfrentará en todos los escenarios, en las calles, de ser necesario, junto al pueblo, el creciente deterioro de los servicios básicos, los cuales, cuando gobernaba el partido que le duele el dolor de la gente, siempre estuvieron en el centro de las políticas públicas, en materia de salud, educación, alimentación, transporte, seguridad social y ciudadanía.

TRANSPARENCIA, JUSTICIA Y FISCALIZACIÓN

36 PLD EXIGE AL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGAR DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN QUE BROTAN EN TODOS LOS MEDIOS.

19 de enero, 2026

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como organización política responsable y comprometida con la institucionalidad democrática y la defensa del patrimonio nacional, solicita hoy formalmente al Ministerio Público que inicie investigaciones exhaustivas sobre las graves denuncias de presunta corrupción que han sido expuestas públicamente en diferentes medios de comunicación.

De comprobarse, estas denuncias constituyen un atentado contra la transparencia, el uso correcto de los recursos públicos, el desarrollo económico y la confianza ciudadana. Es necesario que sean esclarecidas mediante investigaciones rigurosas, objetivas y apegadas a la ley.

En ese sentido, informaciones públicas y análisis financieros revelan pérdidas operativas reiteradas en Seguros Reservas durante la gestión del PRM, con un deterioro significativo de la rentabilidad y la liquidez. Se han identificado operaciones atípicas entre entidades vinculadas del mismo grupo financiero que podrían ocultar déficits reales o desvío de recursos públicos.

Solicitamos una auditoría forense integral de la gestión de Seguros Reservas, investigación de operaciones entre filiales relacionadas, verificación de la situación real de reservas técnicas y determinación de responsabilidades administrativas y penales por el deterioro patrimonial de esta entidad que maneja recursos públicos.

De igual modo, se ha denunciado públicamente que el Ministerio de Educación habría pagado RD\$867.4 millones por la póliza de Seguros Reservas para estudiantes que ni los padres ni los alumnos conocían de su existencia. Hay graves denuncias sobre pagos de comisiones, “corredores favorecidos” y estructuras de intermediación vinculadas a funcionarios gubernamentales.

El presupuesto del Ministerio de Educación para este fin se incrementó significativamente en 2024, sin justificación técnica clara.

Solicitamos la realización de una auditoría del manejo de esos recursos, ya que en el presupuesto de MINERD aparece una ejecución en seguros que pasó de 384.83 MM en 2022 a 1,928.62 MM en el 2024.

Por otro lado, denuncias públicas señalan que el Banco Agrícola otorgó créditos con condiciones favorables o a tasa cero a funcionarios públicos, políticos y personas sin vinculación al sector agropecuario, constituyendo esto un uso clientelar de los recursos destinados al desarrollo del campo dominicano.

Solicitamos investigar los criterios de otorgamiento, verificar de manera exhaustiva los perfiles de los beneficiarios, determinar el alcance del favoritismo político del Banco y evaluar el desvío de la misión institucional.

De igual modo, se ha confirmado que cientos de medicamentos oncológicos de alto costo fueron encontrados vencidos o sin uso en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).

Muchas de estas medicinas fueron donadas por familias, con enormes sacrificios económicos. Médicos documentan que pacientes murieron por falta de estos medicamentos, mientras permanecían almacenados.

Esta negligencia podría configurar delitos graves contra la salud pública y la vida. Solicitamos investigar la cadena de custodia, identificar responsabilidades administrativas y penales y determinar si hubo corrupción en el manejo de estos recursos vitales.

Asimismo, en julio de 2025, la Dirección General de Compras Públicas y la Unidad Antifraude de la

Contraloría General de la República documentaron graves violaciones en tres licitaciones del Inabie (zapatos, mochilas, poloshirts, pantalones) que vician 201 contratos.

El informe reveló lo siguiente:

- Confabulación entre funcionarios y proveedores con coordinación previa para beneficiar empresas específicas
- Flexibilización irregular de criterios de evaluación
- Omisión deliberada de controles
- Manipulación de decisiones técnicas
- Peritos evaluadores con comportamiento irregular
- Documentación alterada o falsa

Aunque se destituyó al ex director del INABIE, las Mipymes afectadas denuncian ante la PEPCA que “no hay justicia ni transparencia” en esos procesos.

En este contexto de denuncias graves de corrupción administrativa, el Partido de la Liberación Dominicana solicita al Ministerio Público que inicie de inmediato investigaciones exhaustivas, objetivas e imparciales en cada caso.

Asimismo, solicitamos auditorías forenses para determinar el alcance económico de las irregularidades.

Llamamos a aplicar la ley sin distinción de cargos, influencias políticas o posiciones de poder y mantener informada a la ciudadanía, respetando los principios de transparencia y rendición de cuentas.

El PLD se mantendrá atento y vigilante al curso que debe darles el Ministerio Público a estas denuncias responsables.

Desde la Casa Nacional del partido fundado por Juan Bosch, anunciamos que, si las autoridades siguen ignorando las preocupaciones y reclamos del pueblo dominicano en cuanto a los señalamientos de corrupción, mediante su Secretaría de Asuntos Jurídicos, el PLD someterá estos casos ante la Procuraduría General de la República y las entidades nacionales e internacionales con competencia para observarlos.

La credibilidad institucional y la confianza ciudadana en la alegada lucha contra la corrupción de este gobierno dependen de que estos casos no queden en la impunidad. Se trata de exigir el cumplimiento de la ley y protección de los recursos del pueblo dominicano

El PLD ratifica su compromiso con velar por la institucionalidad, denunciar irregularidades, sin importar quién las cometa, y trabajar por una República Dominicana donde prevalezcan la justicia, la transparencia y el respeto a los recursos del pueblo.

EDUCACIÓN Y JUVENTUD

37 JÓVENES DENUNCIAN ABANDONO Y DESPRECIO DEL GOBIERNO PRM; EXIGEN POLÍTICAS INTEGRALES.

26 de enero, 2026

Hoy, 26 de enero, al conmemorar el natalicio de Juan Pablo Duarte, padre de la patria y ejemplo eterno de liderazgo joven, desde la Secretaría de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana alzamos la voz por los jóvenes de nuestro país.

Duarte fue un joven que soñó, luchó y se sacrificó por una nación justa; hoy, cientos de miles de jóvenes enfrentamos una realidad marcada por la precariedad, la exclusión y la falta de oportunidades.

En el marco del Día Nacional de la Juventud, que conmemoramos el próximo 31 de enero, desde la Secretaría de la Juventud del PLD reafirmamos que la lucha de Duarte no puede quedar en el pasado; debe continuar en cada joven que exige dignidad, justicia y un futuro posible.

Los jóvenes dominicanos, que representan el 32 % de la población nacional, atraviesan hoy una situación crítica y alarmante. Nuestra generación lleva sobre sus hombros el presente y futuro del país, con una sobrecarga de indiferencia, falta de apoyo y de oportunidades, mismas que con tanto orgullo y a la vez demagogia el PRM prometía en campaña.

La realidad es otra: hoy miles de jóvenes navegan en la desesperanza, el olvido y la falta de atención de las autoridades.

Esta situación no es broma ni un asunto de redes; se trata de un problema estructural que compromete directamente el desarrollo económico, la seguridad ciudadana, la estabilidad social y el futuro del país.

Son múltiples los problemas que atraviesa la juventud dominicana.

A continuación, enumeramos algunos de los fundamentales:

1. Inserción laboral precaria y exclusión temprana

Los datos oficiales evidencian que los jóvenes tienen cada vez menos espacio en el mercado laboral. La tasa de desocupación juvenil hasta los 24 años alcanza 12.8%.

La situación es considerablemente más grave en el caso de las mujeres, que alcanza el 17.7%, respecto al 9.5% de los hombres jóvenes.

Esto implica que casi una de cada cinco mujeres jóvenes que buscan empleo no logra insertarse en el mercado laboral. A ello se suma una elevada participación en el empleo informal, de la que se desconocen las estadísticas, que les priva de seguridad social y estabilidad y les impide acceder a cualquier tipo de derechos, lo que condena a miles de jóvenes a trayectorias laborales precarias desde el inicio de su vida productiva.

La conclusión es clara: un país que margina a sus jóvenes del empleo formal, está hipotecando su productividad futura y debilitando su sostenibilidad fiscal.

2. Jóvenes que no estudian ni trabajan: una exclusión con rostro femenino

El fenómeno de los jóvenes que ni estudian ni trabajan (ni-ni) refleja una preocupante exclusión del sistema. En específico, afecta al 12.4 % de los jóvenes hasta los 24 años. Sin embargo, cuando se amplía el análisis, la brecha de género resulta alarmante:

El 28.2 % de las mujeres jóvenes se encuentra en condición “ni-ni”, frente al 13.6 % de los hombres jóvenes.

La exclusión de jóvenes tiene un rostro femenino, asociado a cargas de cuidado no remunerado, embarazos tempranos, uniones precoces y a la ausencia de una política pública de cuidados que permita a las jóvenes estudiar, trabajar y desarrollarse plenamente.

3. Falta de políticas públicas para jóvenes emprendedores

En nuestro país no existe una política pública integral y sostenida dirigida a los jóvenes emprendedores y empresarios.

A pesar de que las MIPYMES representan cerca del 98 % del tejido productivo nacional, los jóvenes continúan sin programas claros de incubación, acompañamiento técnico, acceso a mercados e innovación que les permitan crecer y formalizarse.

Además, se sigue cargando con un absurdo anticipo que afecta a tantos emprendedores, limitando su crecimiento y poniendo en riesgo el futuro de sus incipientes negocios.

El talento joven existe, pero el Estado no ha construido un ecosistema que lo convierta en un desarrollo económico real, dejando a miles de jóvenes emprendiendo solos, en la informalidad y sin respaldo institucional. Es decir, al oscuro desamparo.

4. Violencia: la juventud como principal víctima

La violencia en el país presenta una clara dimensión etaria:

- El 53% de las víctimas de homicidio corresponde a jóvenes de 15 a 34 años.

Asimismo, una de cada cuatro adolescentes mujeres (15–19 años) ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja.

La violencia juvenil es consecuencia directa de la exclusión social, educativa y laboral, no de hechos aislados.

5. Poco apoyo real para que los jóvenes puedan estudiar

Los jóvenes siguen enfrentando limitadas oportunidades reales para estudiar y prepararse, en un contexto en el que los programas de becas son insuficientes y el acceso a formación de calidad no responde a la demanda nacional.

Instituciones llamadas a ser pilares de la educación técnica, como el ITLA, hoy se ven envueltas en escándalos ajenos a su misión fundamental, en lugar de estar plenamente enfocadas en

ampliar cupos, fortalecer programas y garantizar oportunidades a miles de jóvenes que quieren superarse.

6. Impacto del sistema de salud en la juventud dominicana

Hoy, la incertidumbre domina el sentir de cientos de miles de jóvenes dominicanos, quienes, además no cuentan con un sistema de salud que garantice acceso oportuno a medicamentos y tratamientos de alto costo.

Casos como el de Diosmedy Rosario Polanco, quien necesita inmunoterapia para seguir con vida, o Orquidia Kelly Trinidad, joven con cáncer de mama cuyo tratamiento no es cubierto por Senasa, evidencian una realidad dolorosa: la salud se ha convertido en un privilegio y no en un derecho.

Desde la Secretaría de Asuntos Juveniles del PLD alzamos la voz por estos jóvenes que luchan, no solo contra una enfermedad, sino contra la indiferencia del sistema, y exigimos políticas públicas que pongan la vida y la dignidad por encima de cualquier burocracia.

7. Estancias infantiles y jóvenes familias

Las estancias infantiles fueron concebidas por el gobierno de Danilo Medina para apoyar a madres y padres jóvenes. Estos albergues para infantes les permitían estudiar y trabajar con la tranquilidad de que sus hijos están protegidos.

El PLD dejó a más de 303,815 niños y niñas recibiendo cuidado y cariño en 177 estancias infantiles y más de 515 Centros de Atención Integral a la Infancia (CAFI).

El PLD dejó decenas de estancias infantiles en más de un 80% de construcción y a cinco años del PRM no han sido terminadas. ¿Qué otro nombre puede tener esto si no DESPRECIO por las madres jóvenes dominicanas?

Por ello, como jóvenes que nos preocupa nuestro país, demandamos del Gobierno adoptar de manera urgente una Estrategia Nacional de Juventud, con metas claras, indicadores verificables y presupuesto definido, sustentada en siete prioridades fundamentales:

1. Empleo juvenil y primer empleo formal, con subsidios temporales y programas de formación dual.

2. Creación de la Red Nacional de Cuidados, para reducir la exclusión laboral femenina.

3. Programas de reenganche educativo y laboral para jóvenes en condición de “ni-ni”.

4. Asumir el anteproyecto de ley “MIPyME Joven”, sometido por la Secretaría de Juventud del PLD ante la Cámara de Diputados, el cual promueve un apoyo real a los jóvenes emprendedores dominicanos, mediante acompañamiento técnico y acceso a capital semilla para el desarrollo y sostenibilidad de sus emprendimientos.

5. Desarrollar programas de reenganche educativo y laboral para jóvenes en condición “ni-ni”.

6. Implementar una política pública integral, que garantice más becas con criterios claros y equitativos, el fortalecimiento real de programas como Inglés por Inmersión, y que las instituciones educativas técnicas vuelvan a enfocarse exclusivamente en su misión formativa.

7. Crear programas de atención integral a la salud mental juvenil, integrada a las escuelas y a la atención primaria.

8. Impulsar políticas de seguimiento al manejo de las estancias infantiles del país.

Dicen que a un joven le entregaron una antorcha para iluminar el camino del pueblo, pero nunca le dieron fuego. Cuando el camino quedó a oscuras, lo culpan por no alumbrar. Eso es lo que hoy ocurre en la República Dominicana: Se nos exige que carguemos el futuro del país, pero se nos niegan oportunidades, apoyo y protección. No es que los jóvenes fallen, es que el sistema les quita el fuego antes de pedirles que iluminen.

No necesitamos discursos y promesas, necesitamos empleo, oportunidades, protección y futuro. Invertir en la juventud no es un gasto, es la única inversión que decide si un país avanza o se apaga. Cuando se abandona a los jóvenes, no se ahorra dinero: se hipotecan vidas, se retrasa el progreso y se condena el mañana.

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

38 PLD EXIGE TRANSPARENCIA E INTERVENCIÓN URGENTE PARA GARANTIZAR ATENCIÓN DIGNA EN HOSPITALES PÚBLICOS.*02 de febrero, 2026*

El Partido de la Liberación Dominicana expresa su profunda preocupación por la situación que viven miles de pacientes en hospitales del sistema público de salud.

Las denuncias recibidas por personal sanitario, familiares de pacientes y usuarios del régimen subsidiado describen un patrón que no puede seguir siendo ignorado: retrasos en los procedimientos, carencia de insumos, deterioro de la infraestructura y dificultades para poner en funcionamiento equipos ya adquiridos.

Se trata de lo que hoy enfrentan los ciudadanos cuando acuden a un hospital público en busca de atención y respuestas.

La salud es un derecho fundamental, y su garantía exige planificación, ejecución rigurosa y transparencia en el uso de los recursos.

En distintos centros hospitalarios del país se evidencian situaciones preocupantes, denunciadas por los ciudadanos y medios de comunicación, entre ellas mencionamos:

- Suspensión de cirugías por fallas estructurales en áreas quirúrgicas.
- Saturación de emergencias que provoca la retención prolongada de ambulancias del sistema 9-1-1.
- Desabastecimiento recurrente de medicamentos esenciales.
- Equipos adquiridos que permanecen inoperantes por falta de habilitación técnica.
- Centros recientemente intervenidos que presentan deterioro acelerado.

Es preocupante que el segundo nivel del Hospital Materno Infantil de Azua, actualmente en construcción, sufra un derrumbe.

Igual de grave es el derrumbe de los plafones del costoso Hospital Gastón de San Francisco de Macorís, recién inaugurado.

En cuanto al Hospital Francisco Moscoso Puello, su área de hospitalización presenta un deterioro progresivo; el Hospital Jacinto Mañón de San Cristóbal luce en ruinas y el Hospital Salvador B. Gautier suspende cirugías por filtraciones que inundan el área quirúrgica.

Lastimosamente este último centro médico sigue siendo un almacén de enfermos, sin ninguna mejoría técnica ni hospitalaria. Recordamos que en este hospital existen todas las especialidades médicas para resolver problemas de salud complejos de la población.

Entretanto, el Hospital Cabral y Báez presenta una profunda crisis en su servicio de emergencia; la falta de espacio causa una retención de ambulancias del Sistema 911 de un promedio de 2 horas 30 minutos por falta de camillas.

La población dominicana ve con profunda preocupación que, a todas luces, no son los hospitales que se están derrumbando, es el sistema de salud que el PLD dejó operando de manera eficiente.

En ese mismo sentido, nos preocupa en particular la situación del Seguro Nacional de Salud (Senasa), especialmente en el régimen subsidiado. En semanas recientes se han reportado dificultades para aprobar procedimientos y materiales de alto costo, incluidos insumos indispensables para cirugías complejas.

Como lo establecen las leyes que garantizan la salud, el pueblo dominicano exige que cualquier proceso de reorganización financiera se realice con criterios técnicos y humanos, sin afectar el acceso a tratamientos vitales para la población más vulnerable.

Desde el PLD reiteramos que la sostenibilidad del sistema sanitario se construye combatiendo la mala gestión y fortaleciendo la eficiencia administrativa, no trasladando la ineficiencia del Gobierno del PRM y el mal manejo a los pacientes más vulnerables.

Porque nos duele el dolor de la gente, además de exigir explicaciones, planteamos acciones concretas que pueden implementarse de inmediato:

1. Publicación periódica y transparente de los criterios de aprobación de procedimientos en Senasa y del volumen de solicitudes pendientes en el régimen subsidiado.
2. Auditoría técnica independiente del estado de situación de los hospitales intervenidos en los últimos años.
3. Plan nacional de mantenimiento hospitalario, con cronograma público y presupuesto asignado.
4. Mesa técnica permanente con sociedades médicas, universidades y colegios profesionales.
5. Sistema de indicadores abiertos sobre tiempos de espera, abastecimiento y operatividad de equipos.

Asimismo, exigimos:

- Un informe detallado sobre las reclamaciones presentadas en el programa de Alto Costo y su estatus actual ya que los pacientes están muriendo por falta de medicamentos.
- Que el Ministerio Público informe con claridad sobre el avance de las investigaciones relativas a presuntas irregularidades en la adquisición de equipos en el Servicio Nacional de Salud.
- Que la dirección actual del SNS presente un plan verificable para mejorar los indicadores de calidad y eficiencia en los servicios.

El Partido de la Liberación Dominicana reafirma su compromiso con una oposición responsable: vigilante, técnica y orientada a soluciones. Nos mantendremos atentos a la evolución de estos hechos y no descartamos impulsar acciones cívicas y pacíficas dentro del marco democrático para garantizar el derecho a la salud de todos los dominicanos y dominicanas.

La República Dominicana merece un sistema hospitalario que funcione, proteja la vida y administre los recursos públicos con rigor, humanidad y visión de futuro y desde el PLD defendemos y defenderemos siempre ese derecho fundamental.

ECONOMÍA, DEUDA Y FINANZAS PÚBLICAS

39 PLD REPROCHA BAJA INVERSIÓN; TILDA AL PRM DE SER GOBIERNO DE “ANUNCIOS Y EXCUSAS”.*09 de febrero, 2026*

Comparecemos hoy ante el país con un profundo sentido de responsabilidad para abordar un tema que impacta directamente la vida de millones de dominicanos: la inversión pública y su efecto en el desarrollo nacional.

En ese sentido, el Partido de la Liberación Dominicana denuncia que el Gobierno del PRM ha convertido la inversión pública en una política de anuncios, improvisación y baja ejecución, con graves consecuencias para el desarrollo nacional.

Para el año 2025, el Gobierno presupuestó RD\$207,751 millones para gasto de capital, lo que representaba apenas un 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Este nivel de inversión resulta claramente insuficiente para atender las necesidades acumuladas de infraestructura, agua, transporte, salud y educación, y evidencia que la inversión pública no ha sido una prioridad real para esta administración.

Pero la situación es aún más alarmante cuando se analiza la ejecución. Al cierre del año, el propio Gobierno reconoce que solo ejecutó RD\$194,768 millones, equivalentes a un 2.4 % del PIB, dejando RD\$12,983 millones sin ejecutar.

No se trata de falta de recursos, sino de ineficiencia, incapacidad de gestión y ausencia de planificación. Miles de millones de pesos quedaron inmovilizados mientras el país reclama obras urgentes y servicios básicos de calidad. Este Gobierno ni siquiera es capaz de ejecutar el poco presupuesto que asigna.

Lejos de corregir esta situación, el Gobierno insiste en la misma política de disminuir la inversión. Para el año 2026, ha presupuestado RD\$215,285 millones en gasto de capital, equivalentes apenas a un 2.5 % del PIB, confirmando que no existe un cambio de rumbo ni una visión clara de desarrollo.

Es decir, se mantiene un nivel de inversión insuficiente que condena al país a la postergación de obras fundamentales y al deterioro progresivo de su infraestructura.

Como resultado de esta mala gestión, hoy vemos obras anunciadas que no se terminan o que nunca se inician: el Metro de Los Alcarrizos, el Monorriel de Santiago, la solución vial del kilómetro 9, la Circunvalación de San Francisco de Macorís, la entrada de Samaná, entre decenas de proyectos más que permanecen inconclusos. El pueblo tiene los bolsillos llenos de promesas, necesitando resultados.

En materia de movilidad, la improvisación ha sido constante. Proyectos que comienzan, como trenes y terminan convertidos en monorrieles, y sistemas integrales que nunca se concretan.

De 20 parqueos prometidos, apenas dos han sido entregados. Eso no es planificación ni visión de desarrollo: eso es improvisación e irresponsabilidad.

A esto se suma el incumplimiento de los compromisos asumidos con el contrato de Aerodom, una muestra más de la falta de seriedad y transparencia en la gestión de la inversión pública. Solo se ha avanzado en tres obras: la ampliación de la avenida República de Colombia, la solución vial de la Plaza de la Bandera y el Hospital Traumatológico de San Cristóbal.

Sin embargo, el Gobierno del PRM no ha cumplido con proyectos estratégicos anunciados y comprometidos, como el puente paralelo al Jacinto Peynado, el paso a desnivel de la avenida Charles de Gaulle con Sabana Perdida y el viaducto que sustituiría el puente flotante.

La ausencia de estas obras evidencia incumplimiento y desinterés por resolver problemas críticos de movilidad, seguridad y

desarrollo regional.

Mientras tanto, la construcción privada atraviesa una de sus peores crisis en años, afectada por las altas tasas de interés, el alza del dólar, el encarecimiento de los materiales y la ausencia de políticas de apoyo estatal. El resultado es evidente: menos inversión, menos empleo y menor crecimiento económico.

El país no necesita más anuncios ni excusas. Necesita un Gobierno que sepa planificar, ejecutar y cumplir. Y hoy, lamentablemente, eso no está ocurriendo.

El PLD no solo denuncia el desastre, se presenta ante el pueblo dominicano con soluciones responsables, sustentadas en la experiencia de un partido que ha demostrado capacidad de planificación, ejecución y resultados.

En ese sentido, exigimos al Gobierno del PRM:

1. Elevar progresivamente el gasto de capital hasta un mínimo del 4% del PIB.

Establecer por ley un mínimo obligatorio de inversión pública.

Revisar y racionalizar el gasto corriente improductivo para liberar recursos destinados a infraestructura, agua, salud, educación y transporte.

Disminuir el gasto improductivo y aumentar la inversión, de modo que genere empleo y desarrollo.

2. Fortalecer la capacidad de ejecución del Estado.

Implementar cronogramas obligatorios con hitos trimestrales y responsables identificados.

Introducir sanciones administrativas y contractuales a funcionarios y contratistas que incumplan plazos sin justificación técnica.

No basta con presupuestar, hay que ejecutar bien y a tiempo, por lo que proponemos

3. Plan Nacional de Infraestructura con prioridades claras.

Crear un Sistema Público de Monitoreo de Obras, accesible a la ciudadanía, con información actualizada sobre avance físico, financiero y contratistas.

Realizar auditorías técnicas independientes para proyectos de alto impacto.

4. Reactivación del sector de la construcción privada.

Programa temporal de reducción de tasas de interés para proyectos de vivienda y construcción productiva.

Ampliación del monto y la cobertura de los bonos de vivienda, priorizando viviendas de bajo y mediano costo.

Revisión y reducción de las tarifas de supervisión.

Incentivos fiscales temporales para proyectos que generen empleo formal.

Defender la construcción es defender el empleo.

La inversión pública no es solo una cifra en el presupuesto ni un anuncio oficial, es empleo, es infraestructura, es acceso a servicios básicos y es calidad de vida. Cuando se planifica mal o no se ejecuta adecuadamente, las consecuencias las sufre la ciudadanía.

El PLD reitera que el país merece explicaciones claras, resultados concretos y una visión seria de desarrollo.

La República Dominicana no necesita más improvisación ni promesas incumplidas. Necesita planificación, ejecución eficiente y una visión clara de desarrollo.

Con estas propuestas claras de lo que se necesita aplicar, el PLD ofrece soluciones serias y viables para construir un mejor futuro.

MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS

40 PLD ALERTA GOBIERNO GASTÓ MÁS CUBRIENDO PÉRDIDAS ELÉCTRICAS QUE EN INVERSIÓN PÚBLICA.*16 de febrero, 2026*

El Partido de la Liberación Dominicana comparece hoy con el firme compromiso de presentar soluciones a los problemas que afectan el desarrollo nacional y la calidad de vida de las dominicanas y dominicanos.

En un momento en que registramos un crecimiento de apenas 2.1% del PIB en 2025, el evidente deterioro del sector eléctrico exige atención urgente. Las cifras nos mueven a extrema preocupación.

Las pérdidas totales de distribución pasaron del 27% en 2019 al 42.9 % en 2025. Este profundo deterioro ha provocado que el subsidio eléctrico prácticamente se haya triplicado en los últimos seis años.

Si consideramos el incremento tarifario realizado en 2021-2022, con impacto económico estimado en 400 millones de dólares, el déficit real alcanzaría los 2,200 millones de dólares.

El deterioro financiero es dramático: pasamos de RD\$40,597 millones promedio (2016-2020) a RD\$115,542 millones en 2025. El subsidio eléctrico alcanza 1.6% del PIB, equivalente a 1,800 millones de dólares anuales. Es como verter el dinero del pueblo en un saco roto.

He aquí la paradoja fiscal que nos avergüenza:

En 2025, el gobierno gastó más cubriendo pérdidas eléctricas que invirtiendo en el futuro del país:

Subsidio eléctrico: 1.6% del PIB

Inversión pública total: 1.4% del PIB

Aunque las autoridades cifran la inversión pública del año pasado en 2.4% del PIB, una parte se fue en gasto de capital, por lo que la inversión pública real, terminó siendo 1.4% del Producto Interno Bruto.

Gastamos más tapando la ineficiencia que construyendo futuro. Cada peso perdido, por la inoperancia del sector eléctrico, es un peso que no se invierte en hospitales, escuelas, agua potable o transporte.

Las pérdidas han subido cada año de 2020 a 2025, desmintiendo la excusa de que aumentaron por la pandemia. Si así fuera, habrían bajado desde el año 2021. En cambio, el deterioro se aceleró.

Para dimensionar la gravedad, comparemos con estándares regionales:

Sistemas eficientes (Chile, Perú): pérdidas del 6%-12%

Promedio latinoamericano: 15%

Sistemas con problemas estructurales graves: 25%-30%

República Dominicana en 2025: 42.9 %

42.9% de pérdidas es más que ineficiencia. Es la ruptura del modelo de distribución e incapacidad gerencial.

Significa que casi la mitad de la energía comprada no se cobra, debido a pérdidas técnicas, fallas de gestión y temas de cobranzas. Eso destruye toda posibilidad de sostenibilidad financiera.

Ante esta situación, el país reclama una estrategia clara con metas verificables y plazos concretos. No sabemos:

¿Cómo reducirán las pérdidas del 42.9%?

¿En qué plazo esperan resultados?

¿Cuáles medidas aplicarán contra el fraude?

¿Cómo mejorarán la gestión de las distribuidoras?

¿De qué manera se aplicarán las mejoras?

Existe un Pacto Nacional por la Reforma del Sector Eléctrico firmado en 2021 con consenso de diversos sectores, que el gobierno no está aplicando.

Ese Pacto establece:

Reducción progresiva de pérdidas en hasta un 15%

Mejora en gestión comercial

Transparencia en subsidios

Fortalecimiento institucional

Sostenibilidad financiera ¿Dónde están los resultados? La gestión empeoró. El subsidio se triplicó. No están aplicando el Pacto Eléctrico. Solo se han ocupado de elevar la tarifa.

Debido a esta situación que compromete recursos que deberían destinarse a salud, infraestructura, transporte, el Partido de la Liberación Dominicana exige formalmente:

1. Ejecución inmediata del Pacto Eléctrico

Los compromisos de 2021 no pueden seguir siendo letra muerta. Deben cumplirse o explicarse públicamente por qué no se cumplen.

2. Presentación de un Plan de Acción que sea:

Medible: Metas cuantificables trimestrales

Transparente: Indicadores públicos en tiempo real

Monitoreado: Sistema de seguimiento ciudadano

Con consecuencias: Penalidades automáticas por incumplimiento

Integral: Que incluya reducción de pérdidas y ampliación de la oferta energética

3. Rendición de cuentas:

¿Quién responde por el deterioro del 27% al 42.9 %?

¿Qué medidas se aplicarán a los responsables?

La crisis eléctrica no es un accidente, es el resultado de la ausencia de planificación y de la falta de voluntad política para enfrentar los intereses que medran en el caos.

Pero esta crisis también representa una oportunidad histórica: decidir qué país queremos dejarles a nuestras hijas e hijos. Gobernar no es improvisar. Gobernar es planificar, ejecutar y rendir cuentas.

El Partido de la Liberación Dominicana está del lado del pueblo. Del lado del que paga una factura más alta sin recibir mejor servicio. Del lado del comerciante afectado por apagones. Del lado de las comunidades que enfrentan contaminación y abandono.

La electricidad no es un privilegio, es un derecho esencial para la dignidad, el empleo y el desarrollo. El país merece planificación, transparencia y responsabilidad.

Mientras el gobierno continúe con anuncios, excusas e improvisaciones, nosotros seguiremos señalando, proponiendo y defendiendo el derecho del pueblo dominicano a un sistema eléctrico estable, justo y sostenible.

ECONOMÍA, DEUDA Y FINANZAS PÚBLICAS

41 PLD EXIGE AL PRESIDENTE RESPUESTAS ANTE LA PÉRDIDA DEL RUMBO DEL PAÍS.

23 de febrero, 2026

El Partido de la Liberación Dominicana, en ocasión de la rendición de cuentas del presidente ante el Congreso Nacional, el próximo 27 de febrero, considera que el pueblo dominicano necesita respuestas precisas, verificables y responsables sobre los principales problemas que afectaron a nuestro país durante el año 2025.

La rendición de cuentas no puede limitarse a una exposición de cifras aisladas. Debe ser un ejercicio de transparencia, de responsabilidad política y de compromiso con la verdad. En atención a lo señalado, esperamos que el presidente dé respuestas a las siguientes preguntas:

I. CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

El Gobierno llegó al poder bajo la promesa de combatir la corrupción y fortalecer las instituciones. Sin embargo, los hechos ocurridos en 2025 plantean interrogantes legítimos:

1. Caso SENASA

- ¿Puede el Gobierno informar al país si existe una investigación formal específica sobre el eventual uso electoral de esos fondos y si está dispuesto a garantizar que cualquier indagatoria incluya la trazabilidad completa del destino final de los recursos?
- ¿Se ha realizado una auditoría forense independiente y el Gobierno está dispuesto a publicar sus resultados íntegros?
- ¿Asume el Poder Ejecutivo alguna responsabilidad política por lo ocurrido en una institución clave del sistema de salud?
- ¿Se referirá el presidente a los fondos recibidos por el PRM de la corrupción en el Senasa, como lo han declarado los imputados del caso?

2. En cuanto al caso del Intrans, el pueblo dominicano también se pregunta:

- ¿Cuáles fueron los criterios técnicos y financieros utilizados para adjudicar los contratos vinculados a sistemas tecnológicos y semaforización?

- ¿Qué falló en los mecanismos de control interno y cuáles reformas se implementarán para evitar nuevas irregularidades?

3. En relación a las contrataciones públicas y sus excepciones

- ¿Cuántos procesos se realizaron mediante licitación pública abierta (que no solo beneficiarían a los miembros del partido de gobierno) y cuál fue el ahorro real frente a presupuestos de referencia?

- ¿Cuál ha sido el destino del dinero proveniente del cuestionado contrato de AERODOM?

- ¿Dará cuenta el gobierno por qué, de manera inexplicable, se ha multiplicado el costo de la presa de Monte Grande?

4. Fideicomisos públicos

- ¿Cuál es el monto total administrado bajo fideicomisos públicos?

- ¿Cuáles mecanismos de supervisión parlamentaria y ciudadana existen sobre esos recursos?

II. En relación al costo de la vida, la situación de los hogares y calidad institucional.

Más del 60% de los dominicanos y dominicanas percibe que su situación económica ha empeorado y cerca del 70% expresa preocupación por el futuro del país. En este momento, más del 80% de la población se queja de los precios de la canasta básica familiar y más del 50% muestra

inconformidad por los ingresos bajos e inestables.

No son datos fríos ni porcentajes de cálculos, es la ciudadanía padeciendo los desatinos del gobierno.

Y esto se debe a que el ingreso real disponible de las personas apenas cubre el 58% de la canasta básica.

En ese sentido, ¿implementará el Gobierno medidas estructurales para aumentar el ingreso real de las familias, más allá de los subsidios temporales en este año?

Por otra parte, el presidente debe explicarle a la sociedad dominicana, por qué en 2025, la inversión pública rondó apenas 1.4% del PIB, mientras las transferencias al sector eléctrico superaron 1.6% del PIB.

¿Cómo justifica el Gobierno que se hayan destinado más recursos a cubrir pérdidas que a ampliar la infraestructura productiva del país?

Se evidencia que no existe un plan para mejorar el sector eléctrico, ya que en lugar de disminuir las pérdidas hasta llegar a un 15 % como lo establece el pacto eléctrico, estas se han incrementado en cerca de un 43 %.

Por otra parte, desde Pedernales hasta Higüey la gente se pregunta:

¿Por qué el gobierno gasta 10 mil 252 millones en publicidad cuando existen tantos problemas fundamentales sin resolver en el país? ¿Y cuáles son los criterios técnicos y administrativos para la distribución de esos fondos que se manejan de manera poco transparente?

III. Crecimiento Económico, inversión y deuda.

En 2025, la economía creció 2.1%. Si el crecimiento fue significativamente inferior a las proyecciones oficiales, ¿cuáles fueron las causas estructurales de esta desviación?

Con una deuda cercana al 60% del PIB y tasas de interés en torno al 4%, el margen fiscal es cada vez más estrecho, ¿Cuál es la estrategia explícita para estabilizarla y reducirla sin sacrificar el crecimiento?

Si los ingresos crecieron por debajo del PIB

nominal, ¿reconocerá el presidente en su discurso que el Gobierno tiene un problema estructural que no solo requiere ajuste administrativo?

Reportes internacionales señalan que la Productividad Total de los Factores (PTF) ha sido negativa en el período reciente, ¿cómo puede el país, en esas condiciones, aspirar a crecer sostenidamente por encima del 5%?

El desempleo juvenil sigue siendo significativamente mayor que el promedio nacional, con una alta proporción de informalidad. Para responder este problema, preguntamos ¿cuál es la política que desarrolla el Gobierno para enfrentar el desempleo juvenil y la alta informalidad?

IV. En la dirección estrategia del país.

En un contexto internacional cada vez más fragmentado, ¿cuál es la doctrina clara del Gobierno para proteger los intereses estratégicos de la República Dominicana?

¿Cuál es el plan estructural para transformar el modelo de crecimiento hacia uno basado en productividad, inversión eficiente y diversificación exportadora?

Responda con datos

El país enfrenta un contexto de desaceleración económica, presión sobre el costo de la vida, cuestionamientos sobre la calidad institucional y preocupación por la corrupción. La ciudadanía merece claridad. Merece transparencia. Merece responsabilidad política.

El pueblo dominicano espera que el presidente responda estas preguntas, más allá de los acostumbrados anuncios vacíos, de obras inconclusas, de bienestar inexistente y de promesas incumplidas.

De insistir en presentar una República Dominicana alejada de la realidad, el presidente y su Gobierno se exponen nueva vez al ridículo público y al reproche ciudadano.

La gente no necesita escuchar que el presidente diga que la comida está barata; los ciudadanos y ciudadanas van al supermercado y comprueban que afirmaciones como esa están muy alejadas de la realidad.

Igual pasa con los niveles de delincuencia, de corrupción, desempleo, abandono de productores, de mujeres, de jóvenes y de pacientes que necesitan medicinas.

¿A quiénes creen que convencen con mentiras? La realidad les golpea en la cara. Lastimosamente, el desorden y la improvisación del Gobierno pasan factura al pueblo dominicano.

En ese sentido, el Partido de la Liberación Dominicana reitera que la democracia se fortalece cuando el poder responde con datos verificables y

asume responsabilidades. La rendición de cuentas del 27 de febrero debe ser un acto de verdad ante la nación, no un ejercicio de evasión.

El PLD, siempre apegado a sus principios y a su probada vocación de servicio al pueblo dominicano, enfrentará, en todos los escenarios, junto al pueblo, el creciente deterioro de los servicios básicos, los cuales, cuando gobernaba el partido que le duele el dolor de la gente, siempre estuvieron en el centro de las políticas públicas en materia de salud, educación, alimentación, transporte, seguridad social y ciudadanía.

42 PLD ADVIERTE RETROCESO Y RUPTURA DE LA CONFIANZA: EL PAÍS DEBE RECUPERAR EL ORDEN.

27 de febrero, 2026

Este Día de la Independencia Dominicana, la patria, una vez más, nos convoca a rendir honor y tributo a los héroes que se convirtieron en los arquitectos de nuestra libertad y los forjadores de la identidad de nuestro pueblo, encabezados por el prócer Juan Pablo Duarte.

La historia, las circunstancias y el compromiso con los dominicanos y dominicanas nos convocan hoy a responder con la verdad y con hechos que reflejan la vida diaria de los ciudadanos.

La patria hoy nos coloca en este escenario y a esta hora para desmontar los datos alterados, los anuncios vacíos y la falsa empatía de un gobierno que le sigue vendiendo sueños al pueblo dominicano.

Este gobierno no solo ha roto la economía, la salud, el servicio eléctrico y el acceso a la canasta básica. Ha roto lo más elemental para que funcionemos como nación: la confianza.

Ha roto la confianza en el gobierno, en las instituciones públicas, en las organizaciones políticas, en el servicio público; nos ha hecho perder la confianza unos en otros. Y, quizás lo más grave, nos ha hecho perder la confianza en nosotros mismos como dominicanos: hemos perdido la fe en que podemos avanzar como país.

Hay una verdad que hoy recorre los hogares dominicanos y que el discurso oficial parece ignorar.

Es una sensación extraña... una sensación de pausa, de estancamiento; de sentir que, por más que te esfuerzas, no avanzas. Hay una decepción silenciosa en los hogares, un cansancio profundo que ya no se puede disimular.

Esa sensación de estancamiento no es culpa de los ciudadanos.

Esa ansiedad constante, ese miedo a perder lo logrado, el temor de que todo por lo que se ha luchado se destruya... no es casualidad.

Hoy ocurre algo profundamente injusto: el gobierno le está fallando a los dominicanos, mientras los dominicanos siguen cumpliendo con su país.

Cumplen con su trabajo, con su sacrificio, con sus impuestos. Los dominicanos cumplen su lado del contrato social, pero el gobierno incumple su parte.

La situación que vivimos hoy no es casualidad, ni se debe a factores externos, ni a la mala suerte, ni al azar; mucho menos es culpa de quienes sí han cumplido su parte de la vida en sociedad: los dominicanos. No. Es el resultado de políticas públicas mal pensadas y peor ejecutadas. Es el gobierno el que ha fallado y traicionado al pueblo dominicano.

El Partido de la Liberación Dominicana, como siempre, se pone del lado de los hombres y mujeres, de los jóvenes, de los niños y niñas, de los adultos mayores que han perdido la esperanza, en el campo, en el trabajo, en su seguridad, en la educación de sus hijos, en su salud, en la falta de oportunidades para los jóvenes. A todos, decirles que aquí estamos para responder a quienes pretenden seguir comprometiendo su futuro y robándoles cada día su confianza.

Desde el (PLD), que realizó el mejor gobierno de la historia reciente de la República Dominicana y que el pueblo reconoce como la organización que sabe gobernar y cuenta con los mejores técnicos y profesionales, hoy respondemos una vez más al gobierno de las promesas que no se cumplen.

Porque, ¡jógase bien!, si de gobernar para todos y todas, de prometer y cumplir se trata, hay que hablar con el partido al que le duele el dolor

de la gente. Ese es el Partido de la Liberación Dominicana.

Si hay una preocupación que atraviesa sin distinción a todos los sectores sociales, desde las familias más vulnerables hasta la clase media trabajadora, es el aumento sostenido del costo de la vida, que se ha convertido en el principal factor de incertidumbre en cientos de miles de hogares dominicanos.

Quizás por vergüenza, el Presidente no quiso decir que en 2025 la inflación de alimentos superó el 8 %. El plátano, el pollo, el arroz, el huevo, la yuca, la leche y otros productos esenciales aumentaron su precio, en promedio, un 75%, en 2025 respecto a 2019.

No lo dijo el Presidente, pero las importaciones en 2025 alcanzaron los 5,591 millones de dólares, es decir, 2,482 millones más que en 2019, un aumento del 80%.

No lo dijo el Presidente, pero el mayor monto de crédito otorgado por el Banco Agrícola, unos 49,920 millones de pesos, no fue destinado a financiar la producción nacional agropecuaria, sino a “OTROS”, y cuyos mayores montos se entregaron en meses previos a las elecciones.

En 2025, cerca del 28% de los alimentos consumidos en el país fueron importados. El Gobierno ha bajado la autosuficiencia alimentaria de 88.5% a 72%.

El Presidente se vanagloria de la pírrica exportación de uvas, pero lo que no dijo es que las exportaciones de banano cayeron 164 millones de dólares casi a la mitad (un 45%) en 2025 respecto al 2021. Igualmente, cayeron las exportaciones de tomate (28%), hortalizas (25.6%), pepino (13.6%), azúcar (19%), y otros.

Como dijo el Poeta Nacional Dominicano, Pedro Mir: Los campesinos no tienen paz entre las pestañas y hoy esa triste realidad se extiende hacia todos los rincones.

El Gobierno ha querido presentar el desempeño económico del país como un logro, pero cuando se examinan los datos con seriedad, el relato oficial no se sostiene.

El aumento reciente de las exportaciones no es resultado de una política económica activa ni de un esfuerzo deliberado por diversificar y fortalecer la producción nacional. Ese incremento responde, fundamentalmente, a un factor externo: el alza de los precios internacionales del oro. No fue una decisión del Gobierno, ni una estrategia productiva; fue el mercado internacional. Presentar ese resultado como mérito propio es una lectura interesada de la realidad.

Más aún, lejos de ser motivo de orgullo, el desempeño económico reciente evidencia un retroceso claro en el contexto regional. La República Dominicana pasó de liderar el crecimiento económico en América Latina a competir por el país de menor crecimiento. Ese descenso no es casual ni coyuntural: refleja una pérdida de dinamismo y de capacidad de conducción económica.

Otro elemento ausente en el discurso y que los ciudadanos esperaban, es la magnitud de la carga financiera que enfrenta el Estado. El país destina alrededor de 324 mil millones de pesos anuales al pago de intereses de la deuda, esto es aproximadamente 900 millones de pesos diarios, los cuales privan a los dominicanos y dominicanas de recibir salud, educación, seguridad o infraestructura.

Esto significa que el país se endeuda principalmente para financiar el gasto corriente, no la inversión transformadora.

A este panorama se suma un problema estructural cada vez más preocupante. El Presidente ha afirmado que la deuda externa se ha reducido como porcentaje del PIB, situándola en un 58.5%. Sin embargo, ese no es el indicador clave para evaluar la sostenibilidad de la deuda. Lo que realmente importa es la capacidad del Estado para pagar el servicio de esa deuda, en particular, el pago de los intereses en relación con los ingresos reales del Gobierno.

Y es precisamente ahí donde la situación se ha deteriorado gravemente. El pago de los intereses de la deuda, medido como porcentaje de los ingresos del Gobierno, se ha incrementado de manera sostenida y prácticamente se ha duplicado desde 2019 hasta la fecha. Hoy, lo que el país

destina únicamente al pago de intereses de la deuda representa cerca del 25% de los ingresos del Gobierno.

Esto significa que una cuarta parte de los recursos que el Estado recauda se va, antes que nada, a pagar intereses de la deuda, reduciendo de forma dramática el espacio fiscal para invertir en salud, seguridad, infraestructura y desarrollo productivo. Cuando los intereses crecen más rápido que los ingresos, la deuda deja de ser manejable y se convierte en una amenaza real para la estabilidad económica y social.

En otras palabras, el problema no es solo cuánto debemos, sino qué tan difícil se está volviendo pagar. Y hoy, esa dificultad es real, creciente y profundamente preocupante. Lo que el Gobierno presenta como estabilidad macroeconómica es, en la práctica, una economía cada vez más presionada, con menos margen de maniobra y con mayores riesgos hacia el futuro.

Cuando casi una cuarta parte de los ingresos del Estado se va en pagar intereses, no se puede hablar estabilidad. Es el país hipotecando su futuro.

El gobierno presenta la seguridad como su gran avance, refiriéndose al fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. A través del Observatorio del Ministerio de Interior y Policía, el cual lleva más de 1 año con su página web en reconstrucción, sin que exista una publicación oficial de datos estadísticos sobre la seguridad ciudadana, ¿dónde están los datos oficiales completos, verificables y publicados que permitan evaluar ese supuesto progreso?

Desde 2024 no se difunde información integral que respalde estas afirmaciones, lo que impide una evaluación objetiva de la evolución real de la criminalidad. Sin transparencia estadística, la seguridad se convierte en una narrativa, no en una política medible.

La realidad es que el miedo habita en los hogares dominicanos; los ciudadanos sienten hoy que la situación es crítica, porque evitan salir de noche, limitan su desplazamiento, cierran temprano sus negocios.

Tan alarmante como esto, los datos oficiales de la Procuraduría General de la República desmienten los suministrados por el propio Gobierno, cuando aseguró que en 2024 la tasa de homicidios en el país era de 9.6 por cada 100 mil habitantes, mientras el Ministerio Público indica que fue de 12.74, y en 2025.

El gobierno habla de operativos y cifras parciales, llamándole reforma y transformación de la policía nacional, pero la realidad es que no son parte de su supuesta reforma, son planes que ya se estaban ejecutando desde nuestros gobiernos, como los patrullajes de tarea conjunta, las mesas de seguridad y género; no son más que planes de seguridad que cada año cambian de nombre, pero sin ningún avance concreto.

El Presidente se empeñó en hablar de modernidad, entrega de nuevos destacamentos y denuncias electrónicas, mientras tenemos alrededor de 300 centros en la Rep. Dominicana sin conectividad.

Respecto a los feminicidios, las mujeres dominicanas continúan enfrentando niveles inaceptables de violencia que destruyen familias y comunidades enteras.

Mientras las autoridades reportan 58 mujeres fallecidas por feminicidio en 2025, los registros recopilados a partir de noticias y reportes públicos elevan la cifra a 80 casos.

Surge entonces una pregunta legítima y dolorosa: ¿dónde están las 22 víctimas cuya muerte violenta no aparece en las estadísticas oficiales?

Otro tema que apaga la esperanza de progreso del pueblo dominicano es el desastre del sistema energético.

Dos apagones generales en cuestión de tres meses desnudan la realidad de un sector que brilla por la oscuridad con que se ha manejado desde el Gobierno del PRM.

En términos económicos, las pérdidas por cada apagón general van desde los 1,785 hasta los 2,500 millones de pesos.

Las pérdidas totales del sistema superan actualmente el 42 %. Lo recuerda el pueblo

dominicano: eran de 27% en el 2019. Son alrededor de 1,500 millones de dólares adicionales que el Gobierno le quita al ciudadano para pagarlo de déficit, fruto de su ineficiencia.

Eso lo sufre el pueblo dominicano.

El colapso del sistema solo se explica por la ineficiencia e incapacidad de las autoridades, la falta de supervisión efectiva, la ausencia de una gerencia eficaz y la nula planificación frente al crecimiento de la demanda del país.

En el sector salud, el discurso del Presidente chocó de frente con la falta de medicinas, hospitales funcionando con precariedad y el señalado desfalte multimillonario en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), así como el que se indica en el Servicio Nacional de Salud (SNS).

Desde Pedernales hasta Higüey, el país está viendo el regreso de enfermedades infecciosas que deberían estar controladas: la leptospirosis creció y la enfermedad meningocócica, golpeando principalmente a los niños.

Lo sabe y lo sufre la gente: el sistema enfrenta un deterioro en el primer nivel de atención.

En la asamblea nacional se anunciaron avances del sistema de salud, mientras en los hospitales se suspenden cirugías por fallas estructurales en áreas quirúrgicas y las emergencias están saturadas por la retención prolongada de ambulancias del Sistema 9-1-1, como consecuencia del deterioro de la planta física de hospitalización de la mayoría de los centros.

Se ha reducido la respuesta en las emergencias de los hospitales por falta de equipos diagnósticos, por falta de planificación y la improvisación.

Y la gerencia del SNS reporta un déficit de 13 mil millones confirmado por su actual incumbente.

Distinto a lo dicho por el Presidente, no es cierto que la cobertura escolar se amplió en todos los niveles.

Los hechos y sus propios datos lo desmienten, la opinión pública recogió las frecuentes demandas de familias buscando cupos que no encontraron en agosto pasado al iniciarse el año escolar.

La ampliación de la cobertura escolar en todos los niveles, ES MENTIRA.

¿Qué dicen las estadísticas oficiales en materia de cobertura escolar?

La tasa de cobertura en el nivel primario ha disminuido de 94.9% a 92.8% y en el nivel secundario se mantiene por debajo de 72.1%, que se refleja que en el 2025 se matricularon 31,863 alumnos menos que en el 2019 en el nivel primario y 65 mil menos en el nivel secundario para el mismo periodo.

Solo en el nivel inicial con una demanda potencial de medio millón de alumnos en edad entre 45 días de nacidos y 4 años de edad, no están en las aulas

¿Como puede afirmar el presidente Abinader que hemos avanzado en el rendimiento académico de los alumnos, sin evidencia alguna? Las pruebas diagnósticas censales constituyen el único indicador disponible y lo cierto es, que, la prueba de tercer grado no se aplica desde 2023. Con respecto a la de sexto grado las últimas se aplicaron en el 2024. Las de tercero de secundaria se aplicaron en el 2025 y no se han publicado.

La verdad sin maquillaje es que persiste un déficit de mas de 5mil aulas según las propias cifras oficiales.

UN GRAN AUSENTE: el analfabetismo, que estaba a las puertas de erradicarse cuando gobernaba el PLD, actualmente se coloca por encima del 6% en la población mayor de 14 años y supera el 13% en jefes de hogar en extrema pobreza, según el Siuben.

Y cuando miramos el programa de alfabetización, el contraste entre gasto y el resultado es inaceptable: en 2021 se ejecutaron MIL 295 millones de pesos para alfabetizar a 2,026 personas; y en 2024 se ejecutaron 503 millones pesos para alfabetizar a 2,719 personas, para un alarmante gasto de 185,295 pesos por cada alfabetizado. ¿Dónde está la calidad del gasto y la transparencia?

El gobierno del PRM sumerge la educación dominicana en la peor crisis de las últimas décadas.

Para el pueblo dominicano, rendir cuentas hubiera sido explicar por qué con el 4% del PIB dedicado a

la educación y con tanto dinero de préstamos que el gobierno tiene en los bancos: En el nivel inicial, la mayoría de las 121 estancias infantiles dejadas en construcción por el Gobierno del PLD están sin terminar. En total, 68 estancias infantiles, es decir, el 56% no han sido concluidas.

En ese mismo sentido, el abandono del Programa Nacional de Edificaciones Escolares ha tenido consecuencias catastróficas para la educación preuniversitaria.

Más allá de los anuncios y la propaganda, en el tristemente célebre Gobierno del PRM, la inversión pública en infraestructura se ha reducido a uno de los niveles más bajos de las últimas décadas, situándose en alrededor del 1.4 % del PIB en 2025.

Como es costumbre de la actual administración, numerosos proyectos estratégicos anunciados, no han sido concluidos, muchos ni siquiera iniciados.

No podemos dejar de mencionar la desesperante situación del transporte, que afecta la operatividad diaria de los ciudadanos.

En septiembre de 2024, el gobierno anunció una inversión de 3,200 millones de dólares en un Sistema Integrado de Transporte, que incluía un tren desde el Centro Olímpico hasta el aeropuerto de Las Américas, un tren Santo Domingo-San Cristóbal, tres terminales de autobuses y veinte parqueos públicos.

¡Palabras al viento! Dice el pueblo dominicano. De los 20 parqueos, solo se han entregado dos. El tren cambió a monorriel y todavía no comienza. El de San Cristóbal duerme el sueño eterno, al igual que las terminales de autobuses.

En el barrio, en la esquina, en el colmado y en las casas, los dominicanos se preguntaron en qué ha quedado el Monorriel de Santiago, la intervención de la autopista Duarte, el kilómetro 9, la de Hato Mayor – El Puerto, la Circunvalación de San Francisco de Macorís, la entrada de Samaná y la avenida Hípica.

Tampoco se sabe de la carretera del Ámbar, la extensión de la UASD en Santo Domingo Este, la terminación de Monte Grande, cuyo costo se ha multiplicado, como las promesas del Gobierno.

¿Dónde están las 139 obras del cuestionado contrato de Aerodom? Resuena hasta en los callejones del más recóndito barrio de la República Dominicana.

El Presidente afirmó ante el país que la lucha contra la corrupción es la columna vertebral de su gobierno. Sin embargo, cuando se contrastan esas palabras con los hechos, lo que aparece es un preocupante divorcio entre el discurso y la realidad.

Bajo esta administración, cientos de casos de presuntas irregularidades han sido documentados, reconocidos e incluso admitidos por la propia Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). Sin embargo, el país no conoce absolutamente nada sobre ellos: no se sabe cuántos fueron investigados, en qué etapa se encuentran, qué instituciones están involucradas, ni cuáles han sido las consecuencias. No hay información, no hay rendición de cuentas y no hay resultados visibles.

El caso de SENASA es particularmente revelador. La reacción inicial del Gobierno no fue investigar, sino negar. Se descalificó la denuncia, se acusó a la oposición de querer dañar la institución y se afirmó que no existía ningún problema. Solo cuando el escándalo se hizo inocultable y tomó dimensión pública, el Gobierno se vio obligado a reaccionar.

Lo mismo ocurre con otras denuncias de extrema gravedad que siguen sin recibir respuestas claras, como las que involucran al Banco Agrícola y al Servicio Nacional de Salud.

Los hechos indican que este gobierno ha fracasado en impedir que la corrupción drene más que nunca una parte cada vez mayor del presupuesto público. Peor aún: lo que se ha desviado o mal utilizado afecta directamente los recursos destinados a los sectores más vulnerables, a los servicios más sensibles y a las áreas donde está en juego la vida de la gente, como la salud pública.

Nunca antes en la República Dominicana se había visto cómo instituciones llamadas a proteger a los más pobres y a garantizar el derecho a la salud quedaban bajo la sombra de escándalos de esta magnitud. Esa es una señal de degradación

profunda del control y de la ética en la gestión pública.

Lamentablemente, la República Dominicana se está acostumbrando a que cada semana estalle en la opinión pública un nuevo caso de corrupción, cada vez más grave que el anterior.

República Dominicana hoy camina sobre una carretera empedrada; los escándalos, las mentiras y las promesas vacías mantiene a la población flotando en la desesperanza.

El diagnóstico es claro: nos encontramos ante un país que luce sin rumbo, donde la propaganda ha intentado ocultar el descalabro institucional y la falta de dirección y experiencia. Ante este panorama, el retorno al orden no es solo un deseo social, sino una necesidad de supervivencia nacional. Lo sabe el pueblo: existe una gran diferencia entre un gobierno de publicidad y promesas que no se cumplen y la capacidad y

experiencia probada de “saber gobernar” que el país exige para recuperar su senda de progreso y estabilidad y volver a vivir bien.

Estamos aquí, para nuestro pueblo, que recuerda que con el PLD se vivía mejor y que con el partido morado de la estrella amarilla el pueblo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón volverá a vivir bien.

Al pueblo dominicano le decimos que aún hay esperanza, que estamos aquí para PENSAR en el PAIS,

LUCHAR por la GENTE, y DAR RESULTADOS.

Eso es el PLD

¡Viva la República Dominicana!

¡Vivan los Padres de la Patria!

¡Que viva el pueblo dominicano!

AGROPECUARIA Y PRODUCCIÓN NACIONAL

43 **PLD TILDA EL 2025 DE NEFASTO PARA LA AGRICULTURA; CONDENA MALTRATO A PROFESIONALES AGROPECUARIOS.**

02 de marzo, 2026

El 2025 fue un año funesto para la agricultura dominicana, debido al abandono de los productores y al trato indigno a los profesionales agropecuarios, lo que ha ocasionado la caída de la producción nacional y el aumento sin precedentes de los precios de los alimentos.

El Gobierno PRM, responsable del desastre, rompió récord con la mayor importación de alimentos de la historia, en detrimento de la producción nacional.

Mientras el pueblo dominicano sufre hambre y desnutrición por el afán de negocios de los funcionarios, el Presidente de la República presentó al país cifras irreales, como un supuesto aumento de la producción, omitiendo los incrementos de precios al consumidor y registrando importaciones en el renglón de producción, a fin de disfrazar los déficits.

Las causas radican en la desatención del Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola y el Indrhi en áreas clave como la preparación de tierras, la provisión de semillas certificadas y otros insumos de siembra, así como en la ausencia de financiamiento, el deterioro de los sistemas de riego y de los caminos interparcelarios.

A esto se suma el remplazo de la producción local por importaciones, lo que ha llevado a la quiebra a miles de productores.

Para que se tenga una idea: Más de 50 mil empleos agropecuarios se han perdido en este Gobierno.

De igual manera, constituye una falla grave del Gobierno la poca valoración de la tecnología, evidenciada en la des-tecnificación de las instituciones públicas agropecuarias, en las que más de la mitad de los puestos técnicos no poseen profesionales.

Tampoco se han otorgado las 1,600 pensiones pendientes ni se ha revisado el acápito de 650 pensiones existentes, muchas de ellas sin seguro médico, como lo ha denunciado la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), lo que representa una injusticia inaceptable.

Además, es necesario reponer en las áreas especializadas a 350 agrónomos cancelados y nombrar a 1,650 técnicos en plazas actualmente vacantes, a fin de garantizar la presencia técnica en el campo.

Esto lo sufren todos los productores: ha habido un significativo aumento del costo de la canasta familiar y el Gobierno no ha dispuesto un incremento del salario mínimo mensual de los profesionales agropecuarios, tal como lo hizo el presidente Danilo Medina el 15 de mayo de 2017, con motivo del “Día del Agricultor”, durante un acto celebrado en Nagua.

En esa ocasión, tomando como referencia el costo promedio de la canasta familiar -que incluye alimentos, salud, educación, vivienda, electricidad y transporte- y que según el Banco Central ascendía a RD\$32,664.23, el mandatario dispuso elevar el salario mínimo mensual de los profesionales agropecuarios a RD\$35,000.00, garantizando así un ingreso acorde con la realidad económica del momento.

A nueve años, ese sigue siendo el salario vigente.

El Partido de la Liberación Dominicana respalda plenamente el proceso de reclamos que llevan a cabo los profesionales agropecuarios a través de la ANPA.

¡Basta ya de ultrajar a profesionales que, bajo agua, sol y sereno, se trasladan largas distancias, y con pésimas condiciones de trabajo, han envejecido aportando a la alimentación de los dominicanos

y dominicanas, haciendo posible, además, la exportación agropecuaria!

Como consecuencia de esta situación, el país pasó de importar el 9.8% de los alimentos en 2020 a un 28.2% en 2025. ¡Tres veces más! Eso, inevitablemente, ha quebrado a productores y paralizado nuevas siembras.

La autosuficiencia alimentaria se redujo de 88.5% a 71.8% entre agosto de 2020 y diciembre de 2025, reportándose en ese período una caída acumulada de la producción nacional del 32%.

Por ello, hoy se registra escasez de alimentos esenciales.

Igualmente, la combinación de las alzas de los precios de los alimentos y el estancamiento de los ingresos familiares se ha convertido en un factor que ha elevado la subalimentación al 9.8%, contrario a lo que pregona con frecuencia el Gobierno PRM.

Para dimensionar la crisis de producción y comercialización agropecuaria, veamos algunos rubros:

El arroz, principal rubro agrícola nacional, redujo su producción de 13 millones 831 mil 938 quintales en 2018 a 13 millones 83 mil 1 en 2025, es decir, 748,937 menos. Mientras, entre 2020 y 2025, el precio del saco de 125 libras subió de RD\$1,650 a RD\$4,975, que son RD\$3,325 más que tienen que buscar los ciudadanos para poder alimentarse con arroz.

Esto es simplemente un abuso y desconsideración de un Gobierno que no tiene corazón para el pueblo.

Ese aumento ha incidido en la reducción del consumo de arroz por parte de los dominicanos. El consumo por persona anual pasó de 134.47 libras en 2018 a 122.4 en 2025.

Otro dato a tomar en cuenta es que las importaciones acumuladas de arroz durante el presente Gobierno alcanzan los 7,763,078.4 quintales.

En cuanto al pollo, la producción fue significativamente deficitaria en 2025; se ha

generado escasez y se ha elevado el precio al consumidor entre RD\$90.00 y RD\$110.00 por libra, con picos de RD\$130. Fue necesario importar 2.5 millones de unidades, tras la quiebra de 303 productores pequeños y medianos, cuya ausencia provocó un déficit superior a 2.2 millones de pollos.

En el sector bananero se registró una crisis de producción y exportación entre 2023 y 2025, con una reducción del rendimiento por tarea de 2 cajas a 1.2 y una caída en las exportaciones de US\$363 millones en 2021 a US\$202.7 millones en 2024, tendencia que se mantuvo en 2025.

A ello se sumó un aumento del 30% en los costos de producción del banano, la desaparición de aproximadamente el 20% de los productores exportadores y la pérdida de 30,000 empleos, además de la propagación de plagas y enfermedades atribuidas a descuidos fitosanitarios tras la cancelación de agrónomos, afectando las ventas en la Unión Europea.

La llegada de la Peste Porcina Africana y su manejo irresponsable provocó una reducción del 60% en la población porcina nacional, la ruina de unos 15,100 granjeros y la importación del 75% de la carne de cerdo consumida en el país.

El precio de la carne de cerdo subió de RD\$78.50 en 2019 a RD\$231.20 la libra en 2025. En 2019 se producían 7 de cada 10 libras consumidas; actualmente solo se producen 2.5 y se importan 7.5 de cada 10.

En cuanto a los vegetales, más de 30 invernaderos han quebrado y el Banco Agrícola, en vez de buscar soluciones, ha procedido a ejecutar garantías. El gobierno del PRM no ha ampliado el área de invernadero, de vegetales. Además, la ausencia de agrónomos en los invernaderos ha afectado la calidad para los mercados extranjeros.

En general, la política de dar la espalda al campo y el desprecio por la tecnología se reflejan en las alzas de precios: arroz de RD\$21.10 a RD\$45.50 por libra; habichuela roja, de RD\$50.00 a RD\$89.47; aceite de 128 onzas, de RD\$262.00 a RD\$794.95; yuca, de RD\$7.50 a RD\$33.95; plátano, de RD\$14.20 a RD\$32.99; pollo, de RD\$44.00 a RD\$93.60, y carne de res, de RD\$103.00 a RD\$242.95.

Otros productos también registraron alzas: cerdo (56.2%); cebolla roja (121.8%); leche (46.2%); ajo (125.4%); pan (100%); batata (44.5%); huevo (86.6%); café (295.7%); azúcar (109.8%); y espaguetis (49.5%).

El costo promedio mensual de la canasta familiar se situó en RD\$48,541.84.

Durante los 67 meses del actual gobierno, se importaron US\$26,521.5 millones en alimentos, equivalentes a RD\$1.52 billones, es decir, unos RD\$844.4 millones diarios, debilitando gravemente la producción nacional.

Se otorgaron 7,000 permisos de importaciones “grado a grado”, provocando que el Estado dejara de percibir RD\$57,551.6 millones que anteriormente ingresaban mediante el mecanismo de subastas agropecuarias.

La crisis tiende a agravarse en 2026, debido al debilitamiento institucional del sector, incluyendo la eliminación del Instituto Agrario Dominicano (IAD), que afecta proyectos que aportan el 32.7% de los alimentos del país.

Asimismo, la falta de liquidez del Banco Agrícola ha dejado a verdaderos productores sin capital, mientras se favorece a allegados con plazos extendidos. Se impone una auditoría actualizada de esa entidad.

Finalmente, el Presupuesto General de la Nación 2026 destina apenas el 1.18% al sector agropecuario, equivalente a RD\$18,697 millones, frente a una necesidad estimada de RD\$67,345 millones, amén de que fueron eliminado los RS\$8,000.0 anuales que llegaban al campo por las Visitas Sorpresa.

¡Basta ya de ignorar a quienes producen los alimentos que permiten la supervivencia del país!

¡Exigimos trato digno y condiciones de trabajo para los profesionales agropecuarios!

¡Que se atienda el campo como corresponde!

¡Nuestros productores merecen vivir mejor!

MUJER Y POLÍTICAS DE GÉNERO

44 PLD DENUNCIA RETROCESOS EN EL BIENESTAR DE MUJERES Y LLAMA A FORTALECER POLÍTICAS PÚBLICAS.*09 de marzo, 2026*

Al conmemorarse ayer el Día Internacional de la Mujer, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reafirma su compromiso histórico con la lucha por la igualdad, la dignidad y los derechos de las mujeres dominicanas.

Esta fecha también es una oportunidad para reconocer el papel fundamental que han desempeñado las mujeres en la construcción del país y para renovar el compromiso colectivo de avanzar hacia una sociedad más justa.

Por ello tenemos que mirar con responsabilidad la realidad que viven muchas dominicanas. En ese sentido, advertimos señales preocupantes de retroceso en el bienestar femenino bajo la actual gestión gubernamental.

En el informe de derechos humanos publicado en diciembre por el Defensor del Pueblo se evidencia una tendencia preocupante: las mujeres continúan siendo identificadas por la ciudadanía como el grupo más vulnerable del país.

En 2025, el 49 % de la población consideró que los derechos de las mujeres se vulneran con mucha frecuencia, lo que las consolida como el grupo social más expuesto a la violación de derechos según el informe del Defensor del Pueblo.

En las consultas regionales de 2025 se denunciaron barreras de acceso a servicios especializados, debilidades en el tratamiento de enfermedades crónicas y una percepción de que la calidad de los servicios en centros públicos es insuficiente.

Más preocupante aún es que la victimización ha aumentado significativamente.

Mientras en 2024 el 20.9 % de las mujeres reportaba haber sido víctima de vulneración de derechos, en 2025 esta cifra subió a 28.5 %. Es decir, cada vez más mujeres están experimentando directamente situaciones de vulneración de derechos en el país.

Entretanto, la realidad en muchos hogares dominicanos cuenta una historia que requiere atención, ya que la brecha de pobreza entre hombres y mujeres se ha ampliado, pasando de 2.3 a 2.7 puntos porcentuales en el mismo período y hoy los hogares encabezados por mujeres enfrentan una pobreza del 14.7 %, muy por encima del 10.9 % de los hogares encabezados por hombres.

Esta diferencia refleja que la pobreza sigue teniendo un rostro de mujer. A esta desigualdad se suma el peso del trabajo de cuidado.

La cobertura de la Jornada Escolar Extendida, que en 2019 superaba el 75 % de los estudiantes del sistema público, hoy se mantiene alrededor del 70 %, evidenciando un estancamiento en la expansión de una política clave para la equidad social.

A esto se suma la falta de cupo para más de 250 mil estudiantes en centros públicos durante 2025, una situación que vuelve a trasladar al hogar responsabilidades que deberían ser asumidas por el sistema educativo.

Cuando el sistema educativo no responde, las mujeres terminan pagando el mayor costo, porque son las madres quienes deben reorganizar su tiempo para cuidar, acompañar o sustituir funciones que deberían garantizar las escuelas. Esto significa menos tiempo para trabajar, estudiar o emprender, y más obstáculos para su autonomía económica.

Otro dato alarmante es que, de acuerdo con el referido informe, el lugar de trabajo se ha convertido en uno de los principales escenarios de abuso contra las mujeres. Más del 95 % de las dominicanas identifica los espacios laborales como lugares donde pueden producirse situaciones de violencia o acoso.

Esto refleja la ausencia de políticas efectivas para prevenir la discriminación y garantizar entornos laborales seguros. La violencia contra las mujeres continúa siendo una tragedia que afecta a cientos de familias dominicanas.

Solo en enero y febrero de 2026 se registraron 13 feminicidios, frente a 4 en el mismo período del año anterior. Cada una de estas muertes representa una vida perdida, una familia destruida y niños y niñas que quedan en la orfandad. Ante a esta realidad, el país necesita más prevención, más protección y más acción institucional.

Desde el Partido de la Liberación Dominicana consideramos urgente avanzar en una agenda nacional que garantice:

1. Una legislación efectiva contra el acoso laboral y la violencia de género que reconozca estas prácticas como figuras jurídicas específicas.
2. Apoyo real para lograr la autonomía económica para las mujeres, garantizando el acceso a crédito, financiamiento y oportunidades productivas para las emprendedoras.
3. La expansión de la educación inicial, que permita incorporar a más de 500 mil niños de 0 a 5 años al sistema educativo y reducir la carga de cuidado que recae sobre las madres.

4. Acceso efectivo a la justicia, eliminando las barreras que impiden a muchas mujeres acceder a una protección judicial oportuna.

5. Políticas de corresponsabilidad en el cuidado, que reconozcan que la crianza y el cuidado de adultos mayores no puede recaer exclusivamente sobre las mujeres.

Las mujeres dominicanas no aspiran a depender permanentemente de subsidios. Aspiran a la educación, al empleo, a la seguridad y a oportunidades para desarrollarse plenamente.

La igualdad no se construye con discursos un día al año. Se construye con políticas públicas, con instituciones que funcionen y con una sociedad que entienda que cuando las mujeres avanzan, avanza toda la nación.

Desde el Partido de la Liberación Dominicana reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por un país donde todas las mujeres puedan vivir con dignidad, seguridad y oportunidades reales.

Porque las dominicanas merecen volver a vivir bien.

ECONOMÍA, DEUDA Y FINANZAS PÚBLICAS

45 PLD RESPONDE: NO BASTA CON ANUNCIOS, GOBIERNO DEBE MOSTRAR REAL INTENCIÓN DE SACRIFICIO. PROPONE PLAN DE AUSTRERIDAD Y AMPLIAR DECISIONES ESTRUCTURALES ANTE IMPACTO DEL CONFLICTO INTERNACIONAL.

23 de marzo, 2026

El Partido de la Liberación Dominicana reafirma ante el país su compromiso con la estabilidad económica, la protección del poder adquisitivo de las familias dominicanas y la construcción de soluciones responsables frente a los desafíos que enfrenta la nación.

En ese marco, hemos escuchado y analizado con detenimiento la alocución del Presidente de la República sobre el impacto de la situación internacional y el aumento de los precios del petróleo en el que expresó su intención de preservar la estabilidad macroeconómica, fiscal y social, además de anunciar medidas para mitigar los efectos inmediatos y el compromiso con la inversión pública. Ese enfoque es necesario.

Sin embargo, al evaluar el mensaje en su conjunto, el pueblo recibió una explicación del contexto y de las acciones de corto plazo, pero no una definición suficiente de cómo se abordarán las causas estructurales de nuestra vulnerabilidad.

El discurso presidencial reconoce que se trata de un choque externo que generará presiones sobre la energía, el transporte y los alimentos. Pero precisamente en contextos como estos es donde se define la calidad de la respuesta interna.

Si bien el origen del shock es externo, la forma en que se distribuyen sus efectos depende de las decisiones que se tomen a nivel nacional por el gobierno.

En ese sentido, el Partido de la Liberación Dominicana establece con claridad: el esfuerzo que exige este momento no puede recaer de manera desproporcionada sobre la población y las empresas. Si a las familias se les pide asumir mayores costos en transporte, electricidad y alimentos, y al sector privado hacer reajustes, el Estado también debe asumir su parte con disciplina y ejemplo.

Por ello, el PLD plantea con firmeza la necesidad de un Plan Nacional de Austeridad. No como una declaración, sino como una acción concreta y verificable.

Un plan que implique:

Reducción real del gasto corriente no prioritario.

Eliminación de excesos en publicidad, alquileres y estructuras innecesarias.

Revisión de programas de baja efectividad.

Y una priorización estricta del uso de los recursos públicos.

La sostenibilidad fiscal no puede descansar solo en subsidios y ajustes de precios; requiere decisiones claras de orden y el uso eficiente de los recursos del Estado.

Debemos ser claros: La estrategia anunciada es, en esencia, reactiva, transitoria y limitada frente a problemas estructurales de la economía dominicana.

Administra el impacto inmediato, pero no corrige las causas de fondo, la economía dominicana enfrenta vulnerabilidades:

Primero, una alta dependencia energética externa. Importamos prácticamente la totalidad del petróleo que consumimos.

Segundo, persisten elevados niveles de pérdidas y transferencias fiscales que limitan el espacio para la inversión pública. El presidente reconoció que el año pasado se subsidió el sector eléctrico con 105,000 millones de pesos.

Tercero, un modelo de transporte intensivo en combustibles, que concentra alrededor del 54% del consumo del petróleo. Este último punto es determinante. Porque más de la mitad de la

vulnerabilidad energética del país se concentra en el transporte.

Y eso implica que:

gran parte de los subsidios terminan financiando ineficiencias.

el costo del transporte impacta directamente el costo de vida.

y sin una reforma del transporte, cualquier política será insostenible.

A esta realidad se suma un elemento que impacta de manera directa a la población: la situación del sector agropecuario.

Esta crisis encuentra al campo dominicano en una condición de debilidad acumulada por el abandono del gobierno del PRM: aumento en los costos de producción, fertilizantes, pesticidas, herbicidas, maquinarias, transporte e insumos energéticos y mayor dependencia de importaciones, con una reducción de la autosuficiencia alimentaria.

Y esto tiene una consecuencia directa y cotidiana: el aumento en el precio de los alimentos que hoy acumula una inflación del 75 % con respecto al 2019.

Hoy las familias dominicanas lo sienten cuando compran arroz, pollo, habichuelas, plátanos, yuca y vegetales. Por eso, el apoyo al sector agropecuario no puede limitarse a medidas coyunturales. Debe formar parte de una estrategia sostenida de fortalecimiento productivo y seguridad alimentaria.

El enfoque actual evidencia cuatro debilidades principales:

- Primero, un predominio de subsidios sobre reformas.
- Segundo, la ausencia de una política integral de transporte.
- Tercero, la falta de una hoja de ruta clara de transición energética.
- Cuarto, el debilitamiento progresivo del sector agropecuario, que ha reducido la capacidad productiva nacional y hoy agrava el impacto de esta crisis en la mesa de los dominicanos.

Frente a esto, el PLD propone una estrategia en cuatro niveles:

Primero: medidas inmediatas. Subsidios focalizados y temporales, priorizando transporte público, producción agrícola y hogares vulnerables. Transparencia total del costo fiscal. Y protección directa al sector agropecuario, mediante apoyo a insumos, financiamiento preferencial y monitoreo de costos.

Segundo: ajuste estructural. Reducción de pérdidas del sistema eléctrico, revisión del esquema de subsidios y fortalecimiento institucional. Y, de manera prioritaria, transformación del sistema de transporte, mediante electrificación progresiva, renovación del parque vehicular e integración del sistema de movilidad siguiendo el plan que dejamos en marcha de movilidad urbana sostenible.

Tercero: transformación estratégica. Continuar acelerando las energías renovables, uso estratégico del gas natural y desarrollo de una política energética orientada a la sostenibilidad y la seguridad, ampliando Punta Catalina.

Cuarto: fortalecimiento productivo y seguridad alimentaria. Impulsar una política integral de apoyo al sector agropecuario orientada a reducir costos, aumentar la producción nacional y disminuir la dependencia de importaciones.

El Gobierno ha optado por mitigar los efectos parciales del shock, sacrificando el bolsillo de la población sin mostrar intención de austeridad gubernamental.

El PLD presenta un plan para corregir las causas que hacen que estas crisis terminen afectando a la gente. Porque la estabilidad es necesaria, pero no basta.

La República Dominicana necesita políticas que respondan al presente para salvaguardar el futuro. Y necesita, en este momento, una señal clara: austeridad en el Estado, eficiencia en el gasto y decisiones estructurales que reduzcan la vulnerabilidad del país.

MUJER Y POLÍTICAS DE GÉNERO

46 PLD ASEGURA EL 2026 SE ENCAMINA A SER EL AÑO MÁS SANGRIENTO PARA MUJERES DOMINICANAS.*30 de marzo, 2026*

La República Dominicana atraviesa problemas fundamentales de violencia. Con gran preocupación, observamos un aumento de los casos de asesinatos con armas de alto calibre y de otra índole en plena vía pública. Incluso, se registran casos de sicariato.

Dentro de esos casos de violencia, hoy nos presentamos ante el pueblo dominicano para denunciar el alarmante auge de feminicidios este 2026, que tristemente se encamina a ser el año más sangriento para las mujeres dominicanas.

A principios del mes de marzo, la Fundación Vida Sin Violencia observó que en los dos primeros meses del año 2026 los feminicidios se habían multiplicado por tres con respecto a los ocurridos en los primeros dos meses del año 2025. Entre enero y febrero del año pasado se cometieron 6 feminicidios, cifra que por sí debe alarmarnos; pero este año se cometieron 18 feminicidios entre enero y febrero, es decir se multiplicó por tres.

Son 18 vidas, en su mayoría menores de 35 años con hijos e hijas que vieron tronchado su futuro, dejando familias desgarradas y niños y niñas con traumas que, si no son tratados, pueden condenarlos a una vida de pobreza y depresión.

La cifra debió hacer sonar las alarmas de todas las instituciones públicas y de la sociedad civil. Pero no ha sido así, y arribamos al tercer mes del año con un incremento de seis vidas más, para contabilizar 24 feminicidios.

Para el PLD es inaceptable la muerte de una madre, hija, o esposa a manos de su pareja, expareja o algún relacionado que cree que las mujeres son seres sin derecho y voluntad destinados a satisfacerles. Por lo que reclama acciones urgentes de todo el Estado Dominicano para detener esta casi epidemia de feminicidios.

No se trata de estadísticas y números, simplemente. Cada persona fallecida cuenta un drama de horror, en donde hay niños y niñas huérfanos, que verán sus destinos truncados y que podrían ser víctimas o victimarios en el futuro, debido a la inexistencia de mecanismos estatales que ayuden con las secuelas que el feminicidio deja en las personas sobrevivientes de las familias afectadas.

A esta cifra hay que añadirle una situación que no recogen los organismos que deben velar por la seguridad de la ciudadanía, la cantidad de mujeres que son heridas, desfiguradas o mutiladas en intentos de feminicidio y que, entre otros aspectos, son condenadas junto a sus familias a la pobreza, por el costo de los tratamientos y por la imposibilidad de trabajar.

Sabemos que luchar por erradicar los feminicidios es una labor integral, de largo plazo, que incluye la calidad de la educación, el dar un sentido de futuro independiente a la mujer y ofrecer al hombre mayores herramientas para controlar el secular sentido de pertenencia sobre las mujeres, y preocupa que no se vean políticas actuales con ese objetivo en el largo plazo.

Pero aún: en lo inmediato, muchos de los feminicidios pudieron ser evitados, ya sea porque las víctimas buscaron la ayuda judicial y no la recibieron a tiempo o porque las personas encargadas, tanto en fiscalías como en destacamentos, no han recibido el entrenamiento necesario para tratar los casos con toda la gravedad que amerita.

Un agravante, en varios de los feminicidios ocurridos en este año el victimario ha sido un agente de la policía o militar que ha usado su arma de reglamento para cometer el hecho. Hay que evitar a toda costa que el año 2026 sea el año más sangriento para las mujeres.

El PLD propone que la tan cacareada nueva policía sea entrenada en el manejo de situaciones de violencia de género, hay que fortalecer a las unidades policiales y las fiscalías especializadas en las denuncias de violencia de género, pero hay que instruir a todos los agentes del orden sobre el manejo de estos casos y sobre el manejo de sus pasiones también.

No se debe olvidar que existen muchos mecanismos que buscan permitir que las mujeres forjen sus propios futuros y así evitar las relaciones tóxicas que pueden finalizar en un feminicidio.

El PLD entiende que programas como la Banca Solidaria, la tanda extendida, y los proyectos de cambios curriculares realizados en educación, que han sido abandonados por el actual Gobierno, dentro de la multidimensionalidad de los factores, contribuyen a reducir los feminicidios, por lo que proponemos que tales programas sean rescatados o fortalecidos y ejerzan sus misiones con perspectiva de género.

El PLD demanda una policía y fiscalías más conscientes del problema, tanto a nivel social,

como a lo interno de esas instituciones. Pero, a su vez, es necesario enviar un mensaje contundente a los agentes y fiscales ineficientes que no han prestado atención a quienes, con mucho esfuerzo, denuncian a sus parejas por violencia doméstica.

Lamentablemente, la información recopilada por las instituciones sociales muestra que solo el 29 % de los casos de denuncia de violencia doméstica da lugar a la emisión de una orden de protección contra las víctimas. El PLD hace un llamado a que el Gobierno entienda la gravedad del incremento de los feminicidios en este 2026, y demanda el uso de recursos para evitar que estos sigan creciendo. De igual modo, llamamos a la sociedad dominicana a luchar para detener tan preocupante incremento.

Entre las reflexiones de Semana Santa, hacemos la invitación a no olvidar la necesidad de una cultura de paz, de respeto por la vida humana y, en especial, por quienes están más cerca de nosotros; promovamos el diálogo como forma de solucionar los conflictos; evitemos que la ira e irrespeto hacia las mujeres, por creerlas vulnerables, las hagan víctimas de la incapacidad de muchos hombres para manejar las emociones.

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

47 PLD RESPALDA RECLAMO DE COMUNIDADES Y DENUNCIA AUSENCIA DEL GOBIERNO EN LA PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES.*06 de abril, 2026*

El Partido de la Liberación Dominicana comparece ante el país para fijar una posición clara sobre la situación ambiental que atraviesa la República Dominicana. Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales observamos con preocupación una tendencia en la gestión pública que pone en riesgo la protección de ecosistemas estratégicos y debilita el rol de la institucionalidad ambiental.

Recientemente las autoridades anunciaron procesar más de 6,500 autorizaciones ambientales promovidas como un indicador de eficiencia administrativa. Sin embargo, en materia ambiental la eficiencia no puede medirse por la cantidad de permisos emitidos.

El propósito del Sistema de Evaluación Ambiental establecido por la Ley 64-00 es garantizar que los proyectos de desarrollo se realicen dentro de límites ecológicos sostenibles, mediante evaluaciones rigurosas, fiscalización permanente y cumplimiento efectivo de las medidas de mitigación.

Cuando la gestión ambiental se reduce a la tramitación acelerada de permisos, el riesgo es evidente: el Estado pierde capacidad de regulación y los ecosistemas quedan expuestos a presiones crecientes. El problema, por tanto, no es la existencia de permisos y licencias. El problema es la ausencia de seguimiento, control y autoridad ambiental efectiva.

Diversos casos recientes han generado dudas razonables sobre la fortaleza del sistema de fiscalización ambiental.

Los daños a humedales y manglares asociados a un proyecto inmobiliario en Las Terrenas, así como la instalación de barcazas en zonas ambientalmente sensibles en Los Negros de Azua, plantean interrogantes legítimas sobre la

aplicación rigurosa de la normativa ambiental y erosionan la confianza pública en las instituciones encargadas de su protección.

La preocupación no surge únicamente de percepciones políticas o sociales. El Informe GEO República Dominicana 2024, elaborado con acompañamiento internacional, advierte que el crecimiento económico del país ha estado

acompañado de una presión creciente sobre los recursos naturales, deterioro de ecosistemas y pérdida de biodiversidad.

El propio informe reconoce que una parte importante del territorio nacional enfrenta altos niveles de vulnerabilidad climática, lo que exige fortalecer las políticas de adaptación, protección de cuencas hidrográficas y conservación de áreas protegidas.

En esa misma línea, incluso desde espacios de reflexión social en el reciente Sermón de las Siete Palabras del Viernes Santo, en su sexta palabra se abordó el deterioro ambiental del país, señalando la deforestación, la contaminación y el incumplimiento de la legislación ambiental.

Es en este contexto que se ha producido un incremento visible de movilizaciones sociales en defensa del medio ambiente. En diversas regiones del país las comunidades han tenido que asumir un rol que corresponde al Estado.

En Cotuí, la población ha salido a las calles reclamando acciones frente a la contaminación de la presa de Hatillo, una infraestructura con capacidad de almacenamiento de 700 millones de metros cúbicos de agua, clave para el abastecimiento y la seguridad hídrica nacional.

En la región del Cibao, sectores sociales y ambientales han expresado su preocupación ante permisos para exploración minera en la Cordillera

Septentrional, un sistema montañoso que alberga importantes fuentes de agua y ecosistemas de alto valor ecológico.

En San Juan de la Maguana, comunidades rurales han manifestado su rechazo a la posibilidad de actividades de minería metálica en zonas cercanas a fuentes hídricas.

En Valle Nuevo, uno de los parques nacionales más importantes del país por su función en la regulación hídrica, aún se espera el cumplimiento efectivo de disposiciones adoptadas para la recuperación de áreas intervenidas.

En Los Haitises, una de las reservas de biodiversidad más relevantes del Caribe, persisten actividades de tumba y quema, lo que evidencia debilidades en el control territorial y en la sostenibilidad de las intervenciones realizadas.

En el Parque Nacional Jaragua emergen preocupaciones sobre proyectos anunciados sin que hasta el momento se haya presentado públicamente una evaluación ambiental integral que permita sustentar su viabilidad.

La ausencia de una respuesta institucional coherente agrava los problemas ambientales,

debilita la gobernanza de los recursos naturales y genera incertidumbre en las comunidades.

Lo que estamos presenciando no responde a hechos aislados, sino a un modelo de gestión que ha priorizado la tramitación de permisos sobre la planificación territorial, la prevención de impactos y la fiscalización efectiva.

Frente a esta situación, es imprescindible abrir una discusión nacional sobre el rumbo de la política ambiental, fortaleciendo la fiscalización, la protección de las fuentes de agua y el cumplimiento de la normativa vigente.

La República Dominicana no puede seguir por un camino donde desarrollo y protección ambiental se perciban como incompatibles. Desde el Partido de la Liberación Dominicana reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los recursos naturales y una política ambiental sostenible.

El país necesita claridad en el rumbo, coherencia en las decisiones y una autoridad ambiental capaz de proteger, con firmeza y responsabilidad, el patrimonio natural que pertenece a todos los dominicanos.

TRANSPARENCIA, JUSTICIA Y FISCALIZACIÓN

48 PLD DENUNCIA GOBIERNO PAGA RD\$ RD\$22,369 MILLONES EN ALQUILERES DE LOCALES EN CINCO AÑOS; DICE ES “UN DERROCHE QUE HIPOTECA EL PATRIMONIO PÚBLICO”.

13 de abril, 2026

El Partido de la Liberación Dominicana, comprometido con una gestión pública responsable, el uso eficiente de los recursos del Estado y la defensa del interés nacional, considera necesario llamar la atención del país sobre una realidad que no puede ser ignorada.

Del 2021 a la fecha, el Gobierno ha comprometido más de RD\$22,369 millones de pesos en contratos de alquiler de inmuebles según datos oficiales publicados por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). Estas cifras corresponden únicamente a instituciones del Poder Ejecutivo y descentralizadas, excluyendo a los ayuntamientos y otras entidades del Estado.

Este no es un dato menor, es una señal de cómo se están utilizando los recursos que aporta la ciudadanía y, sobre todo, de las decisiones que se están tomando con el dinero público.

En 2025, la contratación en la cuenta presupuestaria de alquileres y rentas de edificios y locales superó los RD\$5 mil millones para el Gobierno Central, el nivel más alto del período, y al día de hoy existen 865 contratos activos en la Dirección General de Contrataciones. Para 2026, se tiene presupuestado un gasto de RD\$6,898 millones en alquileres y rentas de edificios y locales.

El punto no es si el Estado debe o no alquilar. Existen casos en los que es necesario. La situación es si corresponde hacerlo de esta manera, sin una política clara, cuando el país enfrenta demandas urgentes.

Porque mientras se comprometen miles de millones en alquileres:

se argumenta que no hay recursos suficientes para la indexación salarial,

se aplican aumentos en combustibles a la ciudadanía,

Y persisten limitaciones en los servicios de salud y en la cobertura de la seguridad social.

Porque lo que estamos viendo no es solo un aumento del gasto de manera descontrolada. Es la ausencia de una visión de país. Estos son recursos que pudieron destinarse a aliviar las presiones reales en la población, mejorar los servicios públicos básicos y construir soluciones permanentes.

Cada peso que se compromete en alquileres sin una estrategia clara es un peso que no se invierte en el patrimonio público.

Tan grave como esto es que el 80% de dicho gasto se concentra en 20 instituciones públicas. Lo cual no solo refleja una alta concentración que obliga a revisar con seriedad los criterios de planificación, y el manejo eficiente de los recursos públicos. Pues lo que debía ser una solución puntual, se está convirtiendo en una práctica estructural.

Y un gobierno que está normalizando el gasto en alquileres y no hace otra cosa que comprometer nuestra sostenibilidad y el futuro de nuestros hijos e hijas.

A esto se suma un elemento que no puede pasarse por alto: la existencia de contratos adjudicados a proveedores que han sido previamente sancionados por la Dirección General de Contrataciones. Y por su gravedad, este hecho no puede ser tratado como un simple detalle administrativo.

Tanto el PLD como el pueblo dominicano exigen explicaciones, revisión y responsabilidad. Tal es el caso del proveedor Kury Limited, que, a pesar de

haber sido suspendido por prácticas fraudulentas, mantiene contratos vigentes, según consta en la Dirección General de Contrataciones. Una inexplicable distorsión institucional.

Por ello, el Partido de Liberación Dominicana de manera responsable demanda:

Una auditoría integral de los contratos de alquiler del período 2021 a la fecha..

La formulación de un Plan Nacional de Infraestructura Pública, con metas claras de reducción progresiva del gasto en alquileres.

La creación de un inventario único de activos del Estado, que permita una gestión eficiente, transparente y de largo plazo.

El PLD continuará cumpliendo su rol de fiscalizar, proponer y advertir, con la responsabilidad que el momento exige y que nos caracteriza. Porque gobernar para el bien común y el sacrificio pueblo dominicano, requiere tomar decisiones que mejoren la vida de la gente, no que nos hipotequen el futuro.

AGROPECUARIA Y PRODUCCIÓN NACIONAL

49 PLD ALERTA SOBRE GRAVE CRISIS DEL SECTOR AGROPECUARIA Y ACUSA AL GOBIERNO DE DESMANTELAR LA PRODUCCIÓN.*20 de abril, 2026*

Tras un encuentro del expresidente Danilo Medina con productores agropecuarios, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advierte que el campo dominicano ha entrado en una fase crítica de colapso, reflejada en importaciones históricas de 114.5 millones de quintales en el 2025, es decir, 30.9 millones de productos agropecuarios más que el año anterior, llevándonos a una peligrosa dependencia externa.

Frente al desmantelamiento de la capacidad productiva agropecuaria, el PLD no puede ser ni será nunca indiferente ante el sufrimiento de los productores, quienes hoy están quebrados y, los que no, se encaminan a la quiebra.

Este descalabro del sector tiene nombre y apellido: “Gobierno del PRM”.

Precisamente el miércoles 15 de abril, los productores sufriendo el abandono, la dejadez y todo tipo de golpeo, se reunieron con el presidente del PLD para valorar su gestión con las Visitas Sorpresa, al tiempo de expresar el estado de descuido y sus grandes preocupaciones actuales.

Alzaron sus voces de la desesperación por la desatención del Gobierno y la falta que hacen las políticas públicas que anteriormente beneficiaban al sector.

Los tabacaleros, por ejemplo, señalaron que la cosecha de tabaco 2024-2025 se está echando a perder en los ranchos debido a la falta de compradores y precios justos. Denunciaron que los precios han caído de forma drástica: de venderse entre 17 mil y 20 mil pesos en años anteriores, ahora apenas alcanzan un promedio 8 mil pesos por quintal.

Hoy en vez de ganar, pierden aproximadamente 2 mil pesos por cada quintal producido.

De igual modo, productores de aguacate y naranja en la provincia de Peravia denuncian que los proyectos iniciados mediante las “visitas sorpresa” están en estado de abandono total, y lo poco que producen se pudre porque no puede ser transportada hacia los puntos de venta o exportación.

Los productores, además, no cuentan con asistencia técnica ni apoyo gubernamental de ningún tipo en la actualidad.

Tan mal como ellos, la pasan los productores de arroz del Bajo Yuna, quienes denuncian un retroceso en las condiciones laborales y logísticas. El deterioro de los caminos provoca que múltiples patanas se vuelquen diariamente, dificultando el traslado del arroz hacia las factorías.

Denuncian también que el arroz ya no se pesa ni se le asigna un porcentaje de calidad directamente en el campo. Ahora, la carga se traslada a la factoría sin control previo, y es allí donde los compradores determinan de manera unilateral las condiciones, lo que perjudica al productor.

En este mismo sentido, productores de cebolla se quejaron de que apatía gubernamental y las importaciones en el mismo tiempo de las cosechas los tienen en bancarrota.

Agregaron que hijos de agricultores se forman académicamente en el sector. Estudian y el gobierno no los nombra, por lo que terminan trabajando en zonas francas, debido a la falta de oportunidades reales de empleo y desarrollo en el campo dominicano.

En este sentido, nos apena que el gobierno quiera ocultar la realidad agropecuaria. Pues, contrario a las falsedades que promueven, aún persiste el déficit de pollo, por lo que importaron pollo durante el presente año, pese a que en el 2025

el gobierno ya había importado US\$125.5 en carne de pollo. Y los precios siguen en alrededor de RS\$90 la libra, y no baja a RS\$65 como estaba cuando el PLD gobernaba.

En el caso del arroz, hay que precisar que el gobierno tiene aún en almacén 1,466,873 quintales de las importaciones anteriores, incluyendo US\$20.1 comprado del cereal en el exterior durante el 2025; igualmente, los precios del plátano continúan por encima de los RD\$24.0 la unidad, un 71.4% más que en el 2020.

La falta de políticas efectivas y la desarticulación institucional, caracterizado por la reducción de más de 2 mil agrónomos, disminuye la asistencia técnica, el abandono de la investigación agropecuaria y el derrumbe de los servicios básicos para la producción.

Así se ha reducido la capacidad de mejorar la producción, el control de plagas y enfermedades y el deterioro de los servicios claves como mecanización, semillas, sanidad vegetal y animal, y el riego.

En tanto, el Banco Agrícola carece de liquidez para contribuir realmente con la producción, provocando que el financiamiento sea extremadamente precario.

En el 2025 desembolsó apenas 25 mil 899.8 millones de pesos, que es el monto más bajo desde el 2021. La entidad financiera abarcó una superficie de sólo 1,054,176 tareas, la cifra más baja desde el 2013, cuando fueron financiadas 1,364,544 tareas con el expresidente Medina. Llama mucho la atención que la recuperación del Banco Agrícola haya caído en RD\$2,532.4 millones menos, al bajar de RD\$27,149.2 millones en el 2023 a RD\$24,616.8 millones en el 2025. ¿Acaso se trata de los financiamientos otorgados con sentido político? Por esa falta de recursos el Banco Agrícola apenas favoreció a 18,826 productores en el 2025, que son 13,042 productores menos que en el 2013, cuando se atendieron a 31,868 productores.

A esto se suma el incremento descontrolado de los costos de producción, impulsado por combustibles altamente gravados con impuestos altos del gobierno, insumos caros y el alza del dólar.

Este panorama crítico del sector agropecuario dominicano se suma que las importaciones han crecido en los últimos seis años. En el 2025 se compró en el exterior 5,594.8 millones de dólares, que representa un 28.2% de la totalidad de alimentos consumido por los dominicanos.

Se importaron US\$87.8 millones en habichuelas; US\$16.9 millones en guandules; US\$125.5 millones en carne de pollo; US\$146.1 millones en carne de res; US\$278.2 millones en carne de cerdo; US\$20.1 millones en arroz, US\$187.8 millones en leche; US\$16.0 millones en cebolla; US\$20.5 millones en ajo; US\$127.3 millones en café; US\$229.3 millones en aceite; US\$5.5 millones en limones; US\$69.6 millones en papas; US\$9.2 millones en naranja; US\$1.2 millones en zanahoria; US\$20.2 millones en coco seco.

En cuanto a los volúmenes, tenemos que en el 2020 se importaron 3,796,173.00 de toneladas métricas, pero en el 2025 fueron importadas 5,204,054.00 toneladas métricas de productos agropecuarios, equivalente a 114,489,188 quintales.

¡Este es el verdadero récord del Gobierno, haber aumentado la cantidad de productos agropecuarios en un 37.1%!

En el cultivo del ajo. Tras la fallida reunión del ministro de Agricultura Francisco Oliverio Espallat en Constanza, el gobierno está compelido a garantizar de inmediato una variedad de buen rendimiento y con atractivas cualidades culinarias, pagarles las deudas a los cosecheros y compensar las pérdidas de los productores de Constanza.

La gravedad del arroz radica en que este gobierno ha importado 7,763,068 quintales en sus 68 meses, de los cuales aún tienen en almacén 1,466,873 quintales, que servirán para cubrir la deficitaria cosecha del 2026.

Así también, los productores de bananos perdieron parte del mercado externo, por la plagas y enfermedades atribuidas al descuido fitosanitario, las deudas de AGRODOS, el aumento del 30% en los costos de producción, la disminución del rendimiento por tarea de 2 cajas a 1.2 y la pérdida de 30 mil empleos.

Las políticas gubernamentales mantienen la producción porcina en apenas un 23% de su capacidad tradicional. El manejo irresponsable de la Peste Porcina Africana ha reducido en un 75% en la población porcina nacional.

Por otro lado, más de 34 invernaderos grandes han quebrados, mientras el gobierno aumenta la importación de vegetales, que se producían aquí.

Esta situación mantiene los precios de los alimentos básicos altos: El arroz no baja de RD\$45 la libra; habichuela roja está en RD\$87.3 por libra; carne de res RD\$265 por libra; carne de cerdo en RD\$315 la libra; pollo en RD\$90 la libra; plátano entre RD\$24; yuca a RD\$35 la libra; cebolla roja en RD\$78.5 la libra; y el ajo a RD\$199.95 la libra.

En conjunto, el costo de la canasta básica familiar en República Dominicana subió a RD\$48,879.38 en marzo del 2026, con un alza del 32%.

Ante esta situación, el PLD propone la reactivación de sector con las siguientes medidas:

1. Empezar de inmediato un plan masivo de siembra que permita incrementar la producción local y reducir la creciente dependencia de importaciones.

2. Preparar todas las tierras disponibles, gestionando los tractores privados ante la escasez de maquinarias en Agricultura. Aprovechar las bondades de las lluvias de primavera

3. Solucionar los reclamos de los agrónomos para integrarlos al sistema productivos.

4. Bajar los costos de producción, disminuyendo los precios de los fertilizantes pesticidas, herbicidas, maquinarias agrícolas y viabilizando la mano de obra. Que sean gratuitas la preparación de tierras y la entrega de semillas certificadas de alto rendimiento.

5. Revisar exhaustivamente el Banco Agrícola y fortalecerlos con recursos, para reducir la burocracia.

6. Rescatar el INDRHI de su sueño eterno, reorientarlo hacia la recuperación urgente de los sistemas de riego.

7. Disminuir en un 50% los impuestos en los combustibles a la agricultura.

¡Ya basta de atropellos! Los productores, el pueblo y el PLD demandan encarecidamente del Gobierno PRM enderezar el rumbo, dejar la improvisación y aplicar un plan que verdaderamente funcione.

SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS

50 PLD DENUNCIA CRISIS DE VIOLENCIA, INSEGURIDAD CIUDADANA Y AUSENCIA DE PLAN DE PREVENCIÓN DE PARTE DEL GOBIERNO.

27 de abril, 2026

La Comisión de Defensa y Seguridad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) comparece hoy ante el pueblo dominicano para expresar profunda preocupación, por el deterioro de la seguridad ciudadana y la violencia que se ha instalado en la vida cotidiana.

En ese sentido, de la manera más enérgica, reprochamos la falta de respuestas efectivas de las autoridades, frente a una realidad que no puede ocultarse detrás de discursos oficiales ni de cifras imprecisas, sin el debido soporte técnico.

Nos preocupa que el Gobierno insista en vender como logro una supuesta reducción de la criminalidad, mientras las familias dominicanas viven con miedo, los comerciantes cierran sus negocios por incertidumbre, los ciudadanos son víctimas de robos y hurtos a plena luz del día y la Policía Nacional, en más de un 80% de los casos, no ofrece una respuesta oportuna, eficaz, ni convincente.

No hablamos de percepciones fabricadas, hablamos de hechos que se repiten en sectores residenciales, en avenidas, en negocios, en parqueos, en colmados, en talleres, en mueblerías y en espacios donde la gente debería sentirse protegida.

El Gobierno afirma que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes fue de 8.15 en el año 2025. Sin embargo, esa cifra no tiene soporte técnico verificable.

La Procuraduría General de la República solo dispone de datos hasta 2024, los cuales muestran una tasa de 12.7, mientras el propio Gobierno informó 9.7 para ese mismo período.

Esa diferencia de tres puntos es una contradicción institucional que obliga a preguntar; ¿cuál es la

metodología, ¿cuáles son sus fuentes y cuál es la trazabilidad que utiliza la estadística oficial de seguridad?

Tan preocupante como el aumento de la criminalidad y las muertes por este flagelo, es que el 59% de las muertes violentas se producen en conflictos sociales cotidianos, según datos de la propia Procuradora General de la República.

¿A qué se debe esto? Cuando a un padre de familia la inflación le traga el salario, crece la violencia social.

El aumento desmedido de productos básicos de primera necesidad, de los alimentos, de las gasolinas, se ha combinado, además, con la precarización de los servicios públicos: el Metro ahora falla constantemente, ha empeorado el servicio de energía eléctrica, agua potable y otros.

No tener dinero para comprar, dormir al calor de la noche agobiado por mosquitos, tener que caminar kilómetros a pie o pagar sumas exorbitantes en transporte porque el Metro falla, es, en definitiva, caldo de cultivo para la violencia social.

El pueblo dominicano vive hoy en el hartazgo, porque el Gobierno del PRM ha empeorado su calidad de vida. ¡Esa es la verdad que está dimensionando la violencia social en nuestro país!

En los primeros dos meses del año se triplicaron los feminicidios en el país, respecto al 2025. Al mes pasado, la cifra ascendía a 24 mujeres asesinadas.

La convivencia se ha roto. En gran medida, de ahí viene la discusión entre vecinos, altercados de tránsito y riñas familiares que terminen en tragedia.

Un ejemplo claro y, a la vez, lamentable, es el asesinato del conductor en Santiago, ultimado

con un arma blanca; este pasó en frente de un destacamento policial, pidiendo ayuda, y fue ignorado.

A esto se le suma una autoridad preventiva ausente; la llamada “Reforma Policial” no ha logrado construir protocolos eficaces para intervenir antes de que la violencia termine en tragedia, incluso en sus mismos destacamentos policiales. Ese no es un hecho aislado. Es la expresión más visible de una violencia que se ha normalizado.

En el primer trimestre de 2026, la Policía Nacional mató a 51 personas. Todos esos casos fueron clasificados institucionalmente como “intercambios de disparos”.

Sin embargo, investigaciones periodísticas rigurosas apuntan a que una cantidad importante de esos episodios presentan indicios de ejecuciones extrajudiciales.

Un Estado democrático no puede combatir la violencia reproduciéndola. Cuando quienes tienen el mandato legal de proteger, se convierten en parte del problema, el desafío supera lo criminal y se vuelve moral e institucional.

Frente a esa realidad, el Gobierno habla de modernidad, de reforma, de planes y de proyectos. Pero nosotros preguntamos: ¿de qué modernidad y de qué reforma estamos hablando? La fiebre no está en las sábanas.

Debido a la falta de resultados de las autoridades y el incremento de la violencia y los ajusticiamientos extrajudiciales, desde el Partido de la Liberación Dominicana solicitamos al Gobierno:

Publicar datos verificables y con metodología transparente. El Gobierno debe sincerar las cifras de violencia, publicar series estadísticas completas con fuentes accesibles y permitir la auditoría independiente de los indicadores de seguridad. La discrepancia entre la tasa que presenta el Gobierno y la que registra la Procuraduría exige una respuesta oficial clara e inmediata.

Priorizar la prevención sobre la represión. Si el 59% de las muertes violentas provienen de conflictos sociales, el Estado necesita intervención comunitaria, mediación institucional y políticas de cohesión social. La prevención debe ser el eje central de la política de seguridad, no un anexo.

Investigar con rigor los casos de violencia policial. Los 51 fallecidos en “intercambios de disparos” durante el primer trimestre de 2026 deben ser investigados de forma independiente, respetando el debido proceso y garantizando la rendición de cuentas. La impunidad institucional es tan peligrosa como la delincuencia.

Revisar con seriedad técnica el proyecto de Ley policial. El proyecto de modificación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional que cursa en el Senado debe ser analizado con criterio institucional. Figuras como el “general superior” deben sustentarse doctrinalmente antes de ser aprobadas.

Transparentar los fondos de la reforma policial. El fideicomiso vinculado a la reforma debe ser sometido a auditoría social. La ciudadanía tiene derecho a saber; ¿cuánto se ha invertido?, ¿en qué?, y ¿con qué resultados concretos en el territorio?

El Partido de la Liberación Dominicana habla desde la responsabilidad, y no solo llama la atención sobre este grave problema que enfrenta nuestro país, sino que propone soluciones factibles.

Nuestro compromiso es con la vida, con la paz, con la ley, con la verdad y con el pueblo dominicano.

La República Dominicana necesita seguridad con transparencia, prevención con resultados, autoridad con legalidad y una reforma policial que deje de ser un lema para convertirse en una realidad palpable en cada barrio, en cada comunidad, en cada negocio y en cada hogar.

ECONOMÍA, DEUDA Y FINANZAS PÚBLICAS

51 PLD DENUNCIA FALSO PLAN DE AUSTERIDAD Y ADVIERTE SOBRE RIESGO A LA COMPETENCIA DEMOCRÁTICA.

04 de mayo, 2026

Luego de dos meses de iniciada la crisis provocada por los conflictos en el oriente medio, el Gobierno dominicano no ha presentado un plan serio que permita al país enfrentar de manera correcta los efectos negativos que dicha crisis ha provocado y continuará provocando a la economía nacional.

Por el contrario, a partir de los reclamos de diversos sectores políticos y sociales para que presente un plan de austeridad gubernamental, es ahora de manera tardía, que presenta unos lineamientos muy generales y vagos que no resolverán el problema, sino que, frente a la actual coyuntura internacional, pretende instalar en la opinión pública un falso dilema: que la solución se reduce a recortar el financiamiento a los partidos políticos.

El gobierno admite necesitar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos para enfrentar la crisis. Y la única medida que presenta con mayor énfasis mediático y con números reales es la que consiste en recortarles nuevamente el financiamiento público legal a los partidos políticos. Las demás medidas propuestas son un rosario de enunciados generales, algunos con forma poética y con matices de redacción de inteligencia artificial.

Ese planteamiento no es serio. Y, sobre todo, no resuelve el problema.

Nadie está en contra de la austeridad. Todo lo contrario. La austeridad, cuando es real, es una obligación en la gestión pública. Pero no puede ser un discurso; tiene que ser una práctica coherente, verificable y sostenida en el tiempo.

Este Gobierno ha tenido múltiples oportunidades para demostrar esa coherencia. Ha dictado decretos de austeridad que no ha cumplido. Y en la práctica, el gasto público no se ha reducido.

Por el contrario, lo que vemos es un gasto que se mantiene elevado y mal orientado.

En ese contexto, proponer recortar un 50% adicional al financiamiento a los partidos políticos no es una política de austeridad. Es una medida superficial, que no impacta el problema fiscal, y que desvía la atención del dispendio real de los recursos públicos, toda vez que dicho monto representa mucho menos del 2% del presupuesto que dice necesitar.

Eso no es un plan de austeridad, es un engaño con matices políticos.

Pero, además, no es la primera vez que ocurre.

El gobierno de Luis Abinader y el PRM ha intentado limitar los recursos de los partidos de oposición desde el mismo 2020, cuando intentó presentar un presupuesto nacional para 2021 que reducía el monto asignado a los partidos políticos y, más grave aún, en los hechos, desde el 2022 ha estado violando la Ley de Partidos, al asignar en los presupuestos partidas inferiores a la mitad de la que manda dicha ley.

Para que la sociedad dominicana esté debidamente informada, la ley establece que, en años no electorales, los partidos políticos deben recibir el 0.25% de los ingresos nacionales. Este porcentaje responde a la necesidad de garantizar condiciones mínimas de competencia política, evitar que los intereses empresariales se adueñen de los partidos a través del financiamiento privado y fortalecer la institucionalidad democrática, cerrando el paso además a posibles financiamientos espurios del narcotráfico y de la delincuencia organizada.

No obstante, en el 2022, en el contexto de la crisis derivada de la guerra entre Ucrania y Rusia, el gobierno redujo el financiamiento aproximadamente a la mitad, es decir en vez del 0.25 %, solo asignó en el presupuesto de ese año el 0.125% de los ingresos nacionales. Se justificó como una medida excepcional que se ha mantenido en el tiempo, pero sentó un precedente institucional

muy negativo, ya que abrió la posibilidad de que a través de la del presupuesto incumplía montos asignados según otras leyes.

Ya que en términos reales el gobierno está asignando, desde 2022, la mitad de lo que manda la ley, la realidad es que lo que pretende ahora es disminuir el financiamiento a apenas 0.0625%, lo que equivale a una cuarta parte del monto originalmente establecido por la ley. Este no es un ajuste menor: ya que disminuye drásticamente la capacidad de acción de los partidos de oposición, como contrapeso necesario en toda democracia.

No es un hecho aislado, como vemos se inscribe en un patrón de comportamiento. La reducción del financiamiento partidario y la expansión del aparato estatal combinadas crean condiciones de competencia desleal.

Los partidos políticos no son un gasto accesorio. Son instrumentos fundamentales de la democracia. Reducir de manera sistemática su capacidad operativa implica, en los hechos, limitar la competencia política.

Y sin competencia política real, no hay democracia sólida.

Además, debilitar el financiamiento público abre la puerta a una mayor dependencia de recursos privados, lo que distorsiona la representación política. Por eso, este no es un debate sobre los partidos. Es un debate sobre la necesidad de frenar el dispendio gubernamental de los recursos públicos.

Si el Gobierno quiere hablar en serio de austeridad, debe empezar por donde realmente está el problema. El país necesita un plan real, no medidas simbólicas ni populistas. La austeridad no se anuncia. Se practica en el día a día. Y empieza por el propio Gobierno.

El PLD no cederá ante el chantaje. Sabemos cómo empieza el autoritarismo y cómo termina ese camino. El PLD propuso un plan serio y fácil de implementar para atender la crisis, y hoy elevamos la apuesta: si el objetivo es austeridad, ponemos sobre la mesa un plan de austeridad real que este gobierno no tiene el valor de ejecutar:

Primero — reducción de la nómina pública improductiva y publicación inmediata y completa en los portales del Estado de todos los salarios, incluyendo los contratos de servicios que se han mantenido ocultos.

Desde 2020 la nómina pública creció en más de RD\$144,000 millones —no en servicios al ciudadano, sino en aumentos de salarios, garantías de privilegios y lujos para funcionarios que en muchos casos no generan ningún beneficio verificable para el país.

Segundo — Congelar, de inmediato, todas las declaratorias de compras de emergencia. Las compras de emergencia se han convertido en el principal mecanismo de evasión de la Ley de Compras. Suspensión total mientras dure la crisis. Ninguna excepción.

Tercero — Congelar los programas sociales que no estén vinculados al SIUBEN y publicar la lista completa de beneficiarios. Y responder con datos los avances de la investigación en los escándalos de corrupción en SENASA, en Educación, y en la repartición de los bonos navideños y de todo tipo.

Cuarto — Reducir el 50% en dietas, gastos de representación y bonos de funcionarios. Si gastaron RD\$1,037 millones en dietas en un solo mes, reducirlos a la mitad libera más recursos que los que les quitan a todos los partidos en el año.

Quinto — Eliminar total del gasto en eventos, actividades de entretenimiento y servicios de televisión por cable del Estado. Ese no es gasto del Estado. Es el festín de un partido.

Sexto — Suspender inmediatamente la práctica de otorgar pensiones especiales, comenzando por revisar todas las que superan RD\$100,000 mensuales a personas que nunca han trabajado en el Estado y que no cumplen con los criterios establecidos por la ley.

Es una burla: mientras el dominicano promedio trabaja jornadas extraordinarias sin poder cubrir la canasta básica ni pagar los servicios esenciales, el gobierno premia con pensiones de lujo a militantes y aliados políticos.

Séptimo — Desarrollar un plan vinculante con

metas trimestrales para reducir las pérdidas eléctricas de las distribuidoras del 41% actual al 25% en 18 meses, bajo interventoría independiente.

Octavo— Realizar una auditoría forense independiente sobre el destino de los US\$775 millones del contrato de AERODOM, con resultados públicos en 60 días y consecuencias penales si aplica. Ese dinero pertenece a todos los dominicanos.

En conjunto, estas ocho medidas representan más de 400 veces el presupuesto total de los partidos políticos. Que alguien le explique al país por qué no iniciar por acá — sino por algo tan marginal y económicamente limitado — si el objetivo no es puramente político.

Ese es el verdadero problema. Y ese es el debate que el Gobierno quiere evitar.

COSTO DE VIDA, SALARIOS Y CLASE TRABAJADORA

52 PLD DENUNCIA DESPROTECCIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA FRENTE A LA INFLACIÓN Y EXIGE RESPUESTAS INMEDIATAS.*11 de mayo, 2026*

El Partido de la Liberación Dominicana comparece hoy ante el pueblo dominicano para expresar su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del país, quienes viven en incertidumbre frente a las iniciativas de reforma de la seguridad social.

La reciente conmemoración del Día Internacional del Trabajo encuentra al país en un contexto de preocupación real: falta de políticas claras sobre los ingresos laborales, dificultad para acceder a pensiones dignas y ausencia de un Código de Trabajo actualizado a los cambios de los últimos 30 años. Esta realidad revela un hecho incuestionable: el crecimiento económico no se está traduciendo en bienestar suficiente para la mayoría de los trabajadores.

Hoy, la canasta familiar supera los RD\$48,000 mensuales. El salario mínimo más bajo ronda los RD\$29,988 y el ingreso promedio nacional, considerando formales e informales, se sitúa cerca de RD\$28,000. En el sector formal, el ingreso promedio ronda los RD\$35,831, igualmente insuficiente para cubrir la canasta básica.

Más del 54 % de los ocupados permanece en la informalidad, lo que reduce el ingreso promedio y agrava la vulnerabilidad. Sectores como comercio minorista, motoconcho, agricultura, trabajo doméstico y microempresas concentran gran parte de estos trabajadores.

La alta desigualdad salarial distorsiona el promedio: pocos ingresos altos elevan la media, mientras la mayoría se ubica por debajo. En la práctica, el ingreso promedio cubre apenas alrededor del 58 % de la canasta familiar. Esto obliga a que al menos dos personas por hogar trabajen para cubrir lo básico.

El resultado es claro: el trabajo individual ya no garantiza la subsistencia. Se impone el pluriempleo, la informalidad adicional, las remesas y el endeudamiento como estrategias de

supervivencia. Además, hoy se compra menos que hace cinco años, lo que confirma una reducción del salario real y un deterioro del nivel de vida.

En este contexto, resulta inaceptable que el gobierno se niegue a aplicar la indexación salarial, como manda la ley. La última indexación se realizó en 2017. Tras la pandemia, la inflación ha aumentado significativamente.

Sin indexación, los aumentos salariales pierden efectividad: la inflación y los impuestos absorben cualquier mejora. De aplicarse, muchos salarios bajos quedarían exentos del Impuesto sobre la Renta, aliviando la carga sobre los trabajadores.

Lo decimos con claridad: oponerse a la indexación es favorecer el abuso y la desigualdad.

Han pasado más de 30 años desde la aprobación del Código Laboral vigente. En seis años de gobierno y con mayoría absoluta en el Congreso, el partido oficial no ha aprobado una reforma que garantice derechos actualizados.

Mientras el Código Laboral duerme en los escritorios, los trabajadores siguen sin protección, sin estabilidad y sin futuro. Esto no es incapacidad: es falta de voluntad política y de sensibilidad social.

Millones de dominicanos viven en la informalidad, sin acceso pleno a seguridad social, sin pensiones y sin garantías. Esta situación es el resultado de un modelo que excluye y precariza, y que ha ido erosionando avances logrados anteriormente.

La fragilidad del sistema de protección social es evidente: cobertura incompleta, pensiones futuras insuficientes, alta dependencia del régimen contributivo y presión creciente sobre subsidios públicos. Las propuestas de reforma generan inquietud por posibles aumentos de costos, reducción de beneficios y falta de consenso.

La situación de las pensiones es alarmante. Más de un millón de trabajadores no logrará pensionarse adecuadamente. En los próximos ocho años, cerca de 1.3 millones de personas se jubilarán con ingresos insuficientes.

Las causas son conocidas: bajos salarios, alta informalidad, fallas del sistema de AFP y bajas densidades de cotización. Mientras tanto, se otorgan pensiones privilegiadas de manera discrecional. Esto es inaceptable.

El país enfrenta riesgos si no se actúa con responsabilidad: mayor pérdida de poder adquisitivo, aumento de la informalidad, presión social, conflictividad y desconfianza en las reglas económicas. Cualquier reforma que reduzca derechos sin fortalecer la protección social agravará la vulnerabilidad de millones.

Ante la realidad antes descrita, el PLD reafirma los siguientes principios:

1. El trabajo digno debe garantizar condiciones de vida adecuadas.
2. Los derechos laborales no pueden debilitarse sin compensaciones efectivas.
3. La seguridad social debe ampliarse, no reducirse.
4. El crecimiento debe traducirse en bienestar compartido.

Por lo que proponemos:

1. Una Reforma laboral equilibrada que incluya
 - o Preservar la cesantía
 - o Evaluar un seguro de desempleo complementario
 - o Incentivar la formalización sin precarizar el empleo

- o Ampliar cobertura a informales
- o Fortalecer el régimen subsidiado
- o Garantizar pensiones dignas y sostenibles
- o Impulsar sectores de mayor valor agregado
- o Promover capacitación técnica
- o Vincular salarios a productividad
- o Simplificar el régimen tributario
- o Reducir costos de formalización
- o Crear incentivos para la transición a la formalidad
- o Reducir subsidios ineficientes
- o Aumentar inversión productiva
- o Priorizar empleos de calidad

La República Dominicana está en una encrucijada. El modelo ha generado crecimiento, pero no ha garantizado bienestar para la mayoría.

No basta con crecer. Es imprescindible que ese crecimiento se traduzca en ingresos dignos, empleo de calidad y seguridad económica para las familias.

El Partido de la Liberación Dominicana reitera su compromiso con una agenda que coloque al trabajador en el centro de la política económica y social.

Porque en la República Dominicana, trabajar debe ser impulso y razón para superar la pobreza, no para estancarse en ella.

TRANSPARENCIA, JUSTICIA Y FISCALIZACIÓN

53 PLD EXIGE MINISTERIO PÚBLICO PRESENTE AVANCES SOBRE SENASA Y SU VÍNCULO CON LA CAMPAÑA DEL PRM.*18 de mayo, 2026*

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hace un llamado al Ministerio Público para que presente al país los avances de la segunda fase de la investigación del presunto desfalco multimillonario del SeNaSa que ellos han denominado “SeNaSa 2.0”, y que han anunciado previamente las propias autoridades.

Recordamos que, en el marco de la investigación inicial, fueron sometidos algunos funcionarios y empresarios acusados de corrupción y de operar estructuras fraudulentas dentro del Seguro Nacional de Salud.

Sin embargo, posteriormente el propio Ministerio Público informó que dichas investigaciones habían revelado una red más amplia que participó en las irregularidades y sustracción de fondos públicos. Por esa razón, se habló de una segunda fase de investigación y sometimientos judiciales.

Hoy, el país sigue esperando la conclusión de esa investigación y parecería que se intenta jugar al olvido para que no se conozca el alcance real del desfalco.

La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió con los recursos destinados a millones de dominicanos afiliados a SeNaSa y quiénes son los responsables y beneficiarios finales del desfalco detectado, que aún no han sido sometidos a la justicia.

Nunca sabremos cuántas personas pudieron haber resultado afectadas e incluso perdido la vida, como consecuencia de estos actos bochornosos que sustrajeron fondos destinados a garantizar la salud del pueblo dominicano.

Durante años, miles de afiliados al régimen contributivo de SeNaSa acudieron a farmacias con recetas médicas válidas y recibían la inesperada respuesta de que ya habían agotado el monto disponible para medicamentos, aun cuando

aseguraban no haber utilizado previamente esa cobertura.

Pero en adición, el presidente Luis Abinader afirmó públicamente en su discurso de rendición de cuentas de este año, que las imágenes diagnósticas médicas pasaron de 2 millones 451 mil a más de 4 millones 338 mil en 5 años, mientras que las cirugías aumentaron de 356 mil a más de 629 mil procedimientos.

Son cifras que llaman la atención y que requieren una explicación seria, tomando en cuenta que República Dominicana tiene una población aproximada de 11 millones de habitantes y que, luego del COVID, el país no ha atravesado ninguna crisis pandémica ni epidemiológica extraordinaria que justificara un aumento tan elevado de procedimientos médicos y quirúrgicos.

Ese patrón repetitivo representa una señal alarmante y merece una explicación clara y transparente, así como el sometimiento a la justicia de todos los responsables de estos hechos indignantes.

Estamos hablando de recursos públicos destinados a garantizar el derecho a la salud y la protección social de millones de dominicanos, derechos fundamentales consignados en la Constitución, la cual establece además en su artículo 146 que el Estado debe perseguir y sancionar toda forma de corrupción y sustracción de fondos públicos.

Pero aquí hay un elemento que hace este caso todavía más grave e indignante. Que gran parte de los recursos destinados a medicamentos, tratamientos y atención de salud para millones de dominicanos, especialmente los más pobres, terminaran presuntamente financiando estructuras políticas y la pasada campaña del partido de gobierno, según interrogatorios y líneas investigativas contenidas en el propio expediente del ministerio público, en los que se afirma que

parte del dinero tenía como destino la campaña del PRM.

Estamos hablando de dinero que debió servir para aliviar dolor, salvar vidas y garantizar atención médica, pero que fue utilizado para sostener intereses políticos y electorales.

Por eso el PLD exige que esta investigación no se limite a mandos medios, proveedores de salud o figuras operativas. Debe llegar hasta todo el componente político-electoral de esta estructura que, evidentemente, hasta la fecha ha sido tratado con paños tibios.

Reiteramos lo que ya hemos planteado anteriormente. El 1 de diciembre de 2025 exigimos al ministerio público presentar resultados y someter a los responsables; el 8 de diciembre denunciamos el trato diferenciado y selectivo en la persecución penal; y el 20 de enero de 2026 advertimos que el eventual uso de fondos sustraídos de SeNaSa para fines electorales agravaría de manera extrema este escándalo.

En consecuencia, solicitamos formalmente por cuarta vez que el ministerio público informe al país:

Primero: El estado actual de la investigación del caso “SeNaSa”;

Segundo: Que precise cuáles diligencias se han realizado;

Tercero: Que explique por qué no se ha presentado la segunda fase anunciada;

Cuarto: Que establezca si existió conexión entre fondos sustraídos y financiamiento político-electoral durante el proceso electoral de 2024, conforme a las líneas de investigación contenidas en el expediente conocido hasta ahora; y

Quinto: Que la Cámara de Cuentas, con el mismo nivel de diligencia y celeridad con que ha actuado en otros procesos de investigación y auditoría, realice y publique la auditoría integral al SeNaSa, correspondiente al período 2020-2025, y remita sus resultados al Ministerio Público, dada la magnitud de las irregularidades denunciadas y el enorme impacto social de este caso.

El pueblo dominicano merece conocer toda la verdad sobre estas investigaciones y sobre cualquier estructura criminal y política que haya utilizado el sistema de salud para enriquecerse de manera ilícita a costa de los afiliados.

Este caso no puede quedar en la impunidad.

MIGRACIÓN Y SOBERANÍA

54 PLD ASUME DEFENSA DE COMERCIANTES FRONTERIZOS ANTE AMENAZAS DE MODIFICAR LA DINÁMICA ECONÓMICA DE LA ZONA BAJO EL PRETEXTO DE “MODERNIZACIÓN”.

25 de mayo, 2026

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresa preocupación ante la implementación de proyectos de puertos secos en la frontera dominico-haitiana.

En ese sentido, consideramos que estas iniciativas amenazan el comercio tradicional que, durante décadas, ha servido de sustento para miles de familias fronterizas.

El comercio dominico-haitiano no fue construido por grandes corporaciones multinacionales ni por élites económicas alejadas de la realidad fronteriza.

Por el contrario, fue levantado, durante décadas, por el esfuerzo cotidiano de miles de comerciantes, transportistas, productores y pequeños emprendedores de las provincias de la frontera, que lograron desarrollar uno de los mercados binacionales más dinámicos del Caribe.

Ese tejido económico constituye una importante economía social fronteriza que ha permitido sostener empleos, ingresos y estabilidad en comunidades históricamente abandonadas por el Estado.

Hoy, más de 13 mil comerciantes dependen directamente de la dinámica comercial fronteriza y esto impacta de manera indirecta a más de 100 mil personas en las provincias de Jimaní, Elías Piña, Dajabón y Pedernales, entre familias, transportistas, trabajadores informales, productores agrícolas, suplidores y pequeños negocios locales.

Por esto, el PLD considera que cualquier iniciativa orientada a modernizar el comercio con Haití debe partir de un principio fundamental: la modernización no puede significar el

desplazamiento de los actores económicos tradicionales de la frontera ni la concentración del comercio en pocas manos.

El Decreto 166-26, mediante el cual el Gobierno declara de alto interés nacional la construcción y operación de puertos secos en la zona fronteriza, plantea objetivos legítimos como ordenar el comercio, fortalecer controles y desarrollar infraestructura logística.

Sin embargo, el problema no está únicamente en los objetivos declarados, sino en las consecuencias económicas reales y sociales que podría generar un modelo mal diseñado en un país con debilidades institucionales y limitaciones históricas en materia de control aduanero y lucha contra el contrabando.

Particular preocupación genera el artículo 5 del referido decreto, el cual establece que toda sociedad comercial que pretenda obtener la habilitación para la operación de los denominados puertos secos deberá construir y desarrollar una terminal intermodal terrestre, además de cumplir con múltiples requisitos en materia de infraestructura de transporte, capacidad operativa, plataformas tecnológicas, servicios especializados, manejo logístico y estándares ambientales.

La realidad es que esas exigencias técnicas, financieras y operativas resultan prácticamente imposibles de cumplir para la mayoría de los comerciantes tradicionales de la frontera, pequeños y medianos empresarios que históricamente han sostenido el comercio binacional.

Esto crea el riesgo de excluirlos del nuevo modelo económico y transferir la actividad comercial hacia grandes operadores con alta capacidad de inversión.

A la situación se suma la necesaria articulación con los puestos interagenciales ya existentes en la frontera, estructuras implementadas precisamente para fortalecer el control migratorio, aduanero, sanitario y de seguridad.

El país necesita claridad sobre cómo coexistirán ambos modelos operativos, cómo se evitará la duplicidad institucional y cuáles serán las garantías reales para impedir mayores espacios para el contrabando y la informalidad.

El riesgo es evidente. Primero, que el comercio fronterizo tradicional sea sustituido por estructuras altamente concentradas; segundo, que pequeños y medianos comerciantes dominicanos sean desplazados; tercero, que grandes operadores importen mercancías extranjeras destinadas supuestamente al mercado haitiano y que una parte significativa de esos productos termine penetrando ilegalmente al mercado dominicano, afectando la producción nacional, el empleo y las recaudaciones fiscales.

La experiencia dominicana demuestra que cada vez que los mecanismos de control fallan, quienes terminan pagando las consecuencias son los productores nacionales, especialmente los sectores agropecuario, industrial y comercial.

Más preocupante aún es que el modelo propuesto parece privilegiar una lógica de enclave logístico bajo régimen de zona franca, orientada más hacia grandes operadores económicos que hacia el fortalecimiento del aparato productivo nacional y las economías fronterizas.

El PLD considera que la frontera no puede ser concebida exclusivamente como un corredor para importaciones y reexportaciones.

La frontera debe ser un espacio de desarrollo nacional, producción, integración territorial y fortalecimiento de la soberanía económica dominicana.

Por eso, el PLD propone que cualquier proceso de modernización del comercio fronterizo se sustente en cinco principios fundamentales:

1. Protección del comercio fronterizo tradicional y de los pequeños y medianos comerciantes dominicanos.
2. Garantías estrictas contra el contrabando y la triangulación comercial, mediante controles tecnológicos, trazabilidad y supervisión independiente.
3. Participación obligatoria de productores y comerciantes fronterizos en la gobernanza de los puertos secos.
4. Prioridad para productos dominicanos y encadenamientos productivos nacionales.
5. Transparencia absoluta en las concesiones, permisos y operadores autorizados, para evitar monopolios y concentración económica.

El intercambio comercial con Haití tiene una enorme importancia para la economía dominicana.

Las exportaciones dominicanas hacia Haití superan ampliamente las importaciones y constituyen una fuente relevante de ingresos para miles de empresas y trabajadores.

Pero precisamente por esa importancia, las decisiones sobre la frontera no pueden adoptarse sin consenso nacional ni sin evaluar cuidadosamente sus impactos económicos, sociales y de seguridad.

La República Dominicana necesita modernizar su frontera. Pero modernizar no puede significar sustituir la economía nacional por un modelo de intermediación importadora vulnerable al contrabando, la evasión y la concentración económica. Desde el Partido de la Liberación Dominicana asumimos la defensa de los comerciantes y familias que dependen de esta dinámica económica; el comercio fronterizo no puede modernizarse destruyendo la frontera. El desarrollo de la frontera debe hacerse con la frontera, no contra la frontera.

PARTIDO DE LA LIBERACIÓN DOMINICANA

SEGUNDA PARTE

Compendio propuestas sobre Políticas Públicas

Propuestas organizadas por área de gobierno

El Partido de la Liberación Dominicana no se limita a señalar: propone, denuncia y sugiere líneas de acción pública. Esta sección reúne, agrupadas por área de gobierno, las propuestas sobre políticas públicas formuladas por el Partido en sus ruedas de prensa. Frente a cada problema señalado, una ruta de solución; junto a la crítica, una orientación al gobierno.

Cada lineamiento conserva su sentido original y se ubica en el área de gobierno de mayor pertinencia; asimismo, se agrega una tabla resumen de propuestas por cada área, para una lectura ejecutiva.

ECONOMÍA, DEUDA Y FINANZAS PÚBLICAS

De la rueda de prensa:

EL PLD EXIGE AL GOBIERNO MÁS RESPONSABILIDAD FISCAL ANTE MÁS DEUDA Y MENOS FUTURO.

· 12 de marzo, 2025

Propuestas:

- P-01 1º. El Partido de la Liberación Dominicana hace un llamado urgente al gobierno, para que presente al país, sin más demora, un plan claro y responsable para manejar las finanzas del Estado y proponemos que se tomen como referencia las medidas de ahorro implementadas en septiembre del 2012, en virtud del decreto 499-12, que estableció controles efectivos del gasto público y permitieron ahorros millonarios al gobierno.
- P-02 2º. Exhortamos al Poder Ejecutivo a presentar el Reglamento de Aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal para definir cómo lograr lo establecido en la Ley, el cual debió ser emitido a más tardar el 2 de febrero de este año.

De la rueda de prensa:

PLD ADVIERTE SOBRE DETERIORO ECONÓMICO: “HOY LA DEUDA PESA MÁS Y EL PAÍS AVANZA MENOS”

· 6 de octubre de 2025

Propuestas:

- P-03 1º. Reactivar la inversión pública, con obras que generen empleo y desarrollo local.
- P-04 2º. Garantizar que las bajas en la tasa de interés lleguen al crédito real, al bolsillo de la gente y a las MIPYMES.
- P-05 3º. Fortalecer los programas de apoyo a los pequeños negocios, para evitar más quiebras y despidos.
- P-06 4º. Proteger el poder de compra del salario, reduciendo los costos de los bienes y servicios básicos.

De la rueda de prensa:

PLD DENUNCIA DESPLOME DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN; PRESENTA MEDIDAS URGENTES DE RESCATE

· 03 de noviembre, 2025

Propuestas:

- P-07 1º. Implementar incentivos fiscales y financieros que reduzcan los costos de construcción y faciliten el acceso a créditos, especialmente para las MiPymes constructoras.
- P-08 2º. Liberar una partida del encaje legal, de manera focalizada, para financiar viviendas de bajo costo, con tasas preferenciales y garantía de transparencia.
- P-09 3º. Aumentar la asignación presupuestaria para bonos de vivienda, asegurando que más familias de clase media y trabajadora puedan adquirir su hogar.
- P-010 4º. Agilizar los procesos de permisos de construcción mediante una ventanilla única digital, que reduzca los plazos a un máximo de 90 días.
- P-011 5º. Revisar y revertir el aumento desproporcionado de las tarifas de inspección impuestas por el Ministerio de Vivienda.
- P-012 6º. Crear un fondo especial de reactivación para obras paralizadas, permitiendo su terminación mediante financiamiento puente.
- P-013 7º. Establecer un mecanismo de supervisión ciudadana y multisectorial, para monitorear la ejecución de las políticas públicas y garantizar la transparencia en el uso de los fondos.

De la rueda de prensa:

PLD DENUNCIA DESPLOME DE LA ECONOMÍA GOLPEA A MIPYMES; PROPONE SOLUCIONES

· 17 de noviembre de 2025

Propuestas:

- P-014 1º. Prestar atención a los emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas, quienes aportan el 32 % del PIB de la economía dominicana. Ellos merecen que el gobierno les atienda y les escuche.
- P-015 2º. Impulsar los encadenamientos productivos mediante los programas que el PLD dejó en marcha y que han sido abandonados.
- P-016 3º. Eliminar las trabas burocráticas que frenan la inversión, agilizando los permisos y los procedimientos para que el sector productivo pueda crecer y generar empleos.

- P-017 4º. Volver a poner en funcionamiento los 25 Centros MiPymes que acompañaban y ofrecían servicios de asesoría gratuita en alianza con las academias y el sector privado.
- P-018 5º. Focalizar los subsidios sociales en las familias que realmente lo necesitan, garantizando que cada peso invertido proteja el consumo de los hogares más vulnerables.

De la rueda de prensa:

PLD REPROCHA BAJA INVERSIÓN; TILDA AL PRM DE SER GOBIERNO DE “ANUNCIOS Y EXCUSAS”

· 09 de febrero, 2026

Propuestas:

- P-019 1º. Elevar progresivamente el gasto de capital hasta un mínimo del 4% del PIB.
- P-020 2º. Fortalecer la capacidad de ejecución del Estado.
- P-021 3º. Plan Nacional de Infraestructura con prioridades claras.
- P-022 4º. Reactivación del sector de la construcción privada.
- P-023 5º. Establecer por ley un mínimo para el gasto de capital.
- P-024 6º. Implementar cronogramas obligatorios con hitos trimestrales y responsables identificados.
- P-025 7º. Introducir sanciones administrativas y contractuales a funcionarios y contratistas que incumplan plazos sin justificación técnica.
- P-026 8º. Crear un Sistema Público de Monitoreo de Obras, accesible a la ciudadanía, con información actualizada sobre avance físico, financiero y contratistas.
- P-027 9º. Realizar auditorías técnicas independientes para proyectos de alto impacto.
- P-028 10º. Programa temporal de reducción de tasas de interés para proyectos de vivienda y construcción productiva.
- P-029 11º. Ampliación del monto y la cobertura de los bonos de vivienda, priorizando viviendas de bajo y mediano costo.
- P-030 12º. Revisión y reducción de las tarifas de supervisión.
- P-031 13º. Incentivos fiscales temporales para proyectos que generen empleo formal.

De la rueda de prensa:

PLD RESPONDE: NO BASTA CON ANUNCIOS, GOBIERNO DEBE MOSTRAR REAL INTENCIÓN DE SACRIFICIO. PROPONE PLAN DE AUSTERIDAD Y AMPLIAR DECISIONES ESTRUCTURALES ANTE IMPACTO DEL CONFLICTO INTERNACIONAL.

· 23 de marzo, 2026

Propuestas:

Frente a esto, el PLD propone una estrategia en cuatro niveles:

- P-032 1º. Medidas inmediatas. Subsidios focalizados y temporales, priorizando transporte público, producción agrícola y hogares vulnerables. Transparencia total del costo fiscal. Y protección directa al sector agropecuario, mediante apoyo a insumos, financiamiento preferencial y monitoreo de costos.
- P-033 2º. Ajuste estructural. Reducción de pérdidas del sistema eléctrico, revisión del esquema de subsidios y fortalecimiento institucional. Y, de manera prioritaria, transformación del sistema de transporte, mediante electrificación progresiva, renovación del parque vehicular e integración del sistema de movilidad siguiendo el plan que dejamos en marcha de movilidad urbana sostenible.
- P-034 3º. Transformación estratégica. Continuar acelerando las energías renovables, uso estratégico del gas natural y desarrollo de una política energética orientada a la sostenibilidad y la seguridad, ampliando Punta Catalina.
- P-035 4º. Fortalecimiento productivo y seguridad alimentaria. Impulsar una política integral de apoyo al sector agropecuario orientada a reducir costos, aumentar la producción nacional y disminuir la dependencia de importaciones.

De la rueda de prensa:

PLD DENUNCIA FALSO PLAN DE AUSTERIDAD Y ADVIERTE SOBRE RIESGO A LA COMPETENCIA DEMOCRÁTICA.

· 04 de mayo, 2026

Propuestas:

- P-036 1º. Reducción de la nómina pública improductiva y publicación inmediata y completa en los portales del Estado de todos los salarios, incluyendo los contratos de servicios que se han mantenido ocultos.
- P-037 2º. Congelar, de inmediato, todas las declaratorias de compras de emergencia. Las compras de emergencia se han convertido en el principal mecanismo de evasión de la Ley de Compras. Suspensión total mientras dure la crisis. Ninguna excepción.

- P-038 3º. Congelar los programas sociales que no estén vinculados al SIUBEN y publicar la lista completa de beneficiarios. Y responder con datos los avances de la investigación en los escándalos de corrupción en SENASA, en Educación, y en la repartición de los bonos navideños y de todo tipo.
- P-039 4º. Reducir el 50% en dietas, gastos de representación y bonos de funcionarios. Si gastaron RD\$1,037 millones en dietas en un solo mes, reducirlos a la mitad libera más recursos que los que les quitan a todos los partidos en el año.
- P-040 5º. Eliminar total del gasto en eventos, actividades de entretenimiento y servicios de televisión por cable del Estado. Ese no es gasto del Estado. Es el festín de un partido.
- P-041 6º. Suspender inmediatamente la práctica de otorgar pensiones especiales, comenzando por revisar todas las que superan RD\$100,000 mensuales a personas que nunca han trabajado en el Estado y que no cumplen con los criterios establecidos por la ley.
- P-042 7º. Desarrollar un plan vinculante con metas trimestrales para reducir las pérdidas eléctricas de las distribuidoras del 41% actual al 25% en 18 meses, bajo interventoría independiente.
- P-043 8º. Realizar una auditoría forense independiente sobre el destino de los US\$775 millones del contrato de AERODOM, con resultados públicos en 60 días y consecuencias penales si aplica. Ese dinero pertenece a todos los dominicanos.

COSTO DE VIDA, SALARIOS Y CLASE TRABAJADORA

De la rueda de prensa:

PLD PROPONE MEDIDAS URGENTES PARA ENFRENTAR LA CRISIS DE LA CANASTA FAMILIAR.

· 02 de junio, 2025

Propuestas:

- P-044 1º. Diseñar y ejecutar una política de apoyo efectiva a la producción agropecuaria nacional, que garantice la implementación de tecnologías para aumentar la productividad de los rubros agropecuarios.
- P-045 2º. Implementar programas dirigidos a aumentar la productividad laboral de los trabajadores dominicanos, con el propósito de contribuir a incrementar los ingresos de las familias dominicanas.
- P-046 3º. Ejecutar un programa de desarrollo de infraestructuras rurales, que incluya construcción de presas, canales de riego, rehabilitación de caminos vecinales e interparcelarios, para aumentar las áreas de producción y reducir los costos de transporte de insumos y cosechas.

De la rueda de prensa:

**PLD DENUNCIA CENA NAVIDEÑA 2025 ALCANZA COSTO RÉCORD DE RD\$16,825.14;
PROPONE MEDIDAS URGENTES**

· 17 de diciembre, 2025

Propuestas:

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) propone cinco acciones urgentes e impostergables, para proteger a los hogares y rescatar la producción nacional:

- P-047 1º. Garantizar el acceso universal a la cena navideña con acciones económicas, sociales y financieras inmediatas. El gobierno debe disponer que cada familia pueda cenar el 24 de diciembre.
- P-048 2º. Restablecer las cajas navideñas para los sectores vulnerables y distribuirlas mediante organizaciones sociales, comunitarias y religiosas.
- P-049 3º. Corregir distorsiones, el abandono del sector agropecuario, y eliminar negocios oscuros en el ministerio de Agricultura, asegurando producción suficiente y precios asequibles para todos los dominicanos.
- P-050 4º. Reincorporar los agrónomos cancelados y reactivar programas técnicos de dotación de semillas certificadas, preparación de suelos, planes científicos fitosanitarios y de apoyo agrícola.
- P-051 5º. Respaldar a los productores, regulando importaciones sólo a su necesidad y asegurando estabilidad y apoyo técnico. Además, establecer precios de sustentación de las cosechas.

De la rueda de prensa:

**PLD DENUNCIA DESPROTECCIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA FRENTE A LA INFLACIÓN
Y EXIGE RESPUESTAS INMEDIATAS**

· 11 de mayo, 2026

Propuestas:

- P-052 1º. Generar una reforma al Código Laboral para garantizar derechos actualizados.
- P-053 2º. Aplicar la indexación salarial.
- P-054 3º. Fortalecer el sistema de protección social.
- P-055 4º. Evaluar un seguro de desempleo complementario.
- P-056 5º. Incentivar la formalización sin precarizar el empleo.
- P-057 6º. Crear incentivos para la transición a la formalidad.

- P-058 7º. Reducir costos de formalización
- P-059 8º. Ampliar cobertura a informales
- P-060 9º. Fortalecer el régimen subsidiado
- P-061 10º. Garantizar pensiones dignas y sostenibles
- P-062 11º. Impulsar sectores de mayor valor agregado
- P-063 12º. Promover capacitación técnica
- P-064 13º. Vincular salarios a productividad
- P-065 14º. Simplificar el régimen tributario
- P-066 15º. Reducir subsidios ineficientes
- P-067 16º. Aumentar inversión productiva
- P-068 17º. Priorizar empleos de calidad

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

De la rueda de prensa:

PLD PRESENTA PROPUESTAS PARA SOLUCIONAR CRISIS DEL SENASA.

· 08 de julio de 2025

Propuestas:

- P-069 1º. Simplificación de procesos administrativos: Eliminar requisitos presenciales innecesarios y habilitar canales digitales que permitan representación autorizada y entrega a domicilio para afiliados con movilidad reducida.
- P-070 2º. Pago justo y oportuno a prestadores: Establecer un sistema transparente que evite morosidades y glosas arbitrarias, garantizando continuidad y calidad en la atención médica.
- P-071 3º. Fortalecimiento institucional: Reforzar las capacidades internas del SeNaSa en evaluación actuarial, auditoría médica y gestión del gasto.
- P-072 4º. Financiamiento estructural: Que el Consejo Nacional de Seguridad Social implemente progresivamente un per cápita ajustado por riesgo, de forma que el financiamiento responda al perfil epidemiológico y demográfico de la población cubierta.
- P-073 5º. Gobernanza técnica y transparente: Consolidar un sistema de dirección autónoma, con vigilancia independiente, uso eficiente de los fondos y sin clientelismo.

- P-074 6º. Reforma del sistema de seguridad social: Avanzar con responsabilidad en la reforma estructural prometida al sistema, actualizando el Plan de Servicios de Salud (PDSS), mejorando el recaudo, combatiendo la informalidad laboral y fortaleciendo la Red Pública de Servicios de Salud.

De la rueda de prensa:

PLD EVIDENCIA CON DATOS DESASTRE EN EL SISTEMA DE SALUD; PROPONE MEDIDAS URGENTES DE RESCATE

· 11 de agosto, 2025

Propuestas:

- P-075 1º. Puesta en funcionamiento inmediata y en su totalidad de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, con un plan acelerado de apertura de todas las áreas y reactivación de equipos, priorizando especialidades críticas como cardiología, trasplantes y cuidados intensivos.
- P-076 2º. Plan Nacional de Mantenimiento Hospitalario, con presupuesto garantizado, para recuperar quirófanos, climatización, salas de espera y equipos médicos esenciales, evitando la degradación de la infraestructura.
- P-077 3º. Reactivación de cirugías de alta complejidad (cardíacas, renales, neuroquirúrgicas) en la red pública, garantizando insumos y personal especializado.
- P-078 4º. Programa nacional de abastecimiento seguro de medicamentos, con inventarios en tiempo real, compras planificadas y distribución oportuna para garantizar que las Farmacias del Pueblo siempre tengan los fármacos esenciales.
- P-079 5º. Concluir el hospital Regional San Vicente de Paul San Francisco de Macorís que fue iniciado por el PLD y en 5 años no lo han terminado.
- P-080 6º. Continuar el modelo de centros diagnósticos y atención primaria, los cuales no solo descongestionaban los hospitales de segundo y tercer nivel, sino que dotaban de mayor capacidad resolutive el primer nivel de atención.

De la rueda de prensa:

PLD EXIGE TRANSPARENCIA E INTERVENCIÓN URGENTE PARA GARANTIZAR ATENCIÓN DIGNA EN HOSPITALES PÚBLICOS

· 02 de febrero, 2026

Propuestas:

- P-081 1º. Publicación periódica y transparente de los criterios de aprobación de procedimientos en Senasa y del volumen de solicitudes pendientes en el régimen subsidiado.

- P-082 2º. Auditoría técnica independiente del estado de situación de los hospitales intervenidos en los últimos años.
- P-083 3º. Plan nacional de mantenimiento hospitalario, con cronograma público y presupuesto asignado.
- P-084 4º. Mesa técnica permanente con sociedades médicas, universidades y colegios profesionales.
- P-085 5º. Sistema de indicadores abiertos sobre tiempos de espera, abastecimiento y operatividad de equipos.
- P-086 6º. Un informe detallado sobre las reclamaciones presentadas en el programa de Alto Costo y su estatus actual ya que los pacientes están muriendo por falta de medicamentos.
- P-087 7º. Que el Ministerio Público informe con claridad sobre el avance de las investigaciones relativas a presuntas irregularidades en la adquisición de equipos en el Servicio Nacional de Salud.
- P-088 8º. Que la dirección actual del SNS presente un plan verificable para mejorar los indicadores de calidad y eficiencia en los servicios.
- P-089 9º. Que se mejore la planificación y se asegure una ejecución rigurosa y transparencia en el uso de los recursos.

AGROPECUARIA Y PRODUCCIÓN NACIONAL

De la rueda de prensa:

EL PLD PROPONE MEDIDAS PARA RESCATAR EL BANANO DOMINICANO DEL COLAPSO

· 09 de junio, 2025

Propuestas:

- P-090 1º. La implementación del “Proyecto Rescate de la Competitividad de la Industria del Banano” con financiamiento real para renovación, introducción de tecnologías y mantenimiento de plantaciones.
- P-091 2º. El pago inmediato de los RD\$170 millones adeudados por AGRODOSA. Además, es necesario destinar recursos suficientes para dar una respuesta rápida y efectiva ante los daños ocasionados por los frecuentes fenómenos naturales.
- P-092 3º. Establecer mecanismos aduanales ágiles que eviten contenedores varados, lo que interrumpe la cadena de frío.
- P-093 4º. Otorgar préstamos a bajas tasas de interés y ampliar los plazos a los productores afectados por eventos climáticos.

- P-094 5º. Reconstruir los caminos vecinales que permiten el acceso a fincas y reducir las pérdidas por transporte.
- P-095 6º. Diseñar e implementar un plan sanitario nacional integral, para combatir las plagas que afectan la calidad y producción del banano.
- P-096 7º. Conformar un equipo técnico multidisciplinario para apoyar a los productores en el cumplimiento de estándares internacionales requeridos por los mercados destino de las exportaciones de banano.
- P-097 8º. Igualmente, es fundamental apoyar a los productores ante inspecciones europeas excesivas. La República Dominicana no puede permitir que el banano, sector estratégico para la economía rural y las divisas nacionales, colapse por la indiferencia gubernamental.

De la rueda de prensa:

PLD PROPONE MEDIDAS PARA FORTALECER LA REFORMA AGRARIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

· 27 de junio de 2025

Propuestas:

- P-098 1º. Cumplir con los aspectos establecidos en la Constitución de la República y las leyes, específicamente la Ley No. 5879 de Reforma Agraria, respecto al objetivo de la política social del Estado que se refiere a la promoción de la reforma agraria y la integración efectiva de la población campesina al desarrollo nacional.
- P-099 2º. Provisión de asistencia técnica de alta calidad a los productores de reforma agraria.
- P-0100 3º. Capacitación especializada en innovaciones tecnológicas, que contribuyan a incrementar la productividad de los rubros agropecuarios.
- P-0101 4º. Fomento a la formación de cooperativas y empresas agropecuarias, dirigidas a lograr una mayor participación de los productores en los procesos de transformación y comercialización de sus productos.
- P-0102 5º. Del mismo modo, es fundamental el apoyo a la introducción de tecnologías que aumenten la rentabilidad de los productores agropecuarios nacionales, como sistemas de riego modernos, mecanización agrícola y manejo postcosecha de productos.
- P-0103 6º. Igualmente importante es continuar la política de titulación de terrenos del Estado implementada por el gobierno del PLD, a fin de garantizar seguridad jurídica y acceso a crédito formal a los productores de reforma agraria.

De la rueda de prensa:

PLD PRESENTA MEDIDAS URGENTES PARA PROTEGER A LOS PRODUCTORES Y LA PRODUCCIÓN ARROCERA

· 21 de julio de 2025

Propuestas:

- P-0104 1º. Controlar la competencia desleal y adoptar mecanismos transparentes de importaciones de arroz, garantizando el control para situaciones comprobadas de desabasto, autorizadas en el marco de la Comisión Nacional Arrocera. Esto debe ejecutarse por el resto del presente año 2025.
- P-0105 2º. Restablecer la subasta pública de permisos de importación, siendo este el mecanismo más transparente que pueda existir para la asignación de estos permisos y activarla únicamente cuando sea necesario, como instrumento para asegurar la estabilidad de precios y el correcto funcionamiento de toda la cadena de distribución.
- P-0106 3º. Estabilidad de precios. Garantizar el cumplimiento estricto de la banda de precios establecidos por la Comisión Nacional Arrocera, para evitar cambios en los precios del arroz que afecten al productor y consumidor dominicano.
- P-0107 4º. Fortalecimiento de la pignoración. Aumentar el presupuesto destinado a la pignoración del arroz, con el propósito de lograr la recepción de la cosecha, el pago en tiempo oportuno a los productores y la participación de varias entidades bancarias.
- P-0108 5º. Proponemos formalizar estas iniciativas en un acuerdo tripartito —productores, industriales y autoridades— bajo el auspicio de la Comisión Nacional Arrocera, de modo que se garantice la recepción oportuna de la cosecha de segunda etapa y se fortalezca la estabilidad del sector, asegurando la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestra nación.

De la rueda de prensa:

PLD ALERTA POLÍTICA AGROPECUARIA DEL PRM ENCAMINA A MILES DE PRODUCTORES A LA QUIEBRA; PROPONE MEDIDAS URG

· 01 de septiembre, 2025

Propuestas:

- P-0109 1º. Programar, junto a los productores avícolas, la producción de pollos, incubando las cantidades de huevos fértiles que garanticen una producción de carne de pollo que satisfaga la demanda del país y establezca los precios de la principal fuente de proteína de las familias dominicanas.
- P-0110 2º. Otorgar créditos a largo plazo y a bajas tasas de interés, para que pequeños y medianos productores avícolas introduzcan tecnologías que aumenten la eficiencia productiva.

- P-0111 3º. Controlar y limitar las importaciones de arroz a situaciones comprobadas de desabastos y aprobadas por los productores en el marco de la Comisión Nacional Arroceras.
- P-0112 4º. Prohibir la importación y entrada de arroz con permisos de importación con fechas vencidas. Esto aplica para contenedores de arroz en puertos dominicanos que no hayan concluido el protocolo de desaduanización y entrada al país.
- P-0113 5º. Aumentar el presupuesto destinado al Programa de Pignoración de Arroz, para lograr que los industriales (factorías y molinos) paguen a tiempo a los productores.
- P-0114 6º. Compensar el precio de venta del arroz a los productores que le ha aplicado una tara superior al 15% por fanega, con el propósito de reducir las pérdidas y evitar que quiebren.

De la rueda de prensa:

EL PARTIDO DE LA LIBERACIÓN DOMINICANA (PLD) DENUNCIA QUE EL GOBIERNO LLEVA A LOS ARROCEROS A LA RUINA; PROPONE MEDIDAS URGENTES DE RESCATE

· 11 de noviembre, 2025

Propuestas:

Por eso, consciente de que el arroz es cultivado en 21 provincias e involucra a 31,123 productores y 304 mil empleos directos e indirectos, el PLD exige la implementación de siete acciones inmediatas para rescatar el sector.

- P-0115 1º. Detener por un año las importaciones de arroz y, posteriormente, evaluar junto a los productores su necesidad o no futura, restableciendo la subasta pública de permisos de importación como mecanismo transparente y regulador.
- P-0116 2º. Vender a Haití un millón y medio de quintales del inventario de arroz importado. El resto, de lo importado, colocarlo en planes sociales en la franja de la población más pobre, que ha disminuido el consumo per-cápita de arroz en los últimos dos años, y dejar la otra parte del arroz importado para cubrir el déficit de la producción del cereal en este año 2025, porque el arroz importado y el de contrabando, superan los 4 millones de quintales, que entorpecen la comercialización de la cosecha nacional.
- P-0117 3º. Habilitar factorías y cooperativas de productores organizados para el acopio de una parte de la cosecha nacional, ofreciendo servicios de procesamiento a productores individuales o colectivos, ante la saturación que han ocasionado las importaciones en las factorías tradicionales.
- P-0118 4º. Ampliar el programa de pignoración correspondiente a este año hasta abril de 2026, y entregar definitivamente RD\$4,000 millones adicionales a través del Banco de Reservas o el Banco Agrícola.

- P-0119 5º. Pagar los RD\$448.0 millones pendientes a los productores, aprobados mediante la Resolución 01-2023 (RD\$100 por fanega), incluyendo el remanente del año 2022, equivalente a RD\$82.0 millones.
- P-0120 6º. Restablecer y democratizar el programa de subsidio a los fertilizantes, cuyo costo han experimentado aumentos sostenidos. Con esta medida, se garantizaría la rentabilidad del productor y sostendría la estabilidad de precios al consumidor. Pero en esta ocasión deben tomar en cuenta los pequeños y medianos productores, sin ningún tipo de distinción.
- P-0121 7º. Organizar la siembra en dos cosechas anuales (primavera e invierno, o un ciclo con retoño), lo que contribuiría a una mejor planificación, control de plagas y enfermedades. Para esto se debe involucrar al Indrhi y a las Juntas de Regantes. Las empresas comercializadoras de semillas deberán ajustarse a este calendario.

De la rueda de prensa:

PLD TILDA EL 2025 DE NEFASTO PARA LA AGRICULTURA; CONDENA MALTRATO A PROFESIONALES AGROPECUARIOS.

· 02 de marzo, 2026

Propuestas:

- P-0122 1º. Transparentar el tema y las cantidades de las importaciones y la producción nacional.
- P-0123 2º. Mejorar mejores atenciones del Ministerio de Agricultura, Banco Agrícola e INDHRI con los productores agrícolas.
- P-0124 3º. Entrega de 1,600 pensiones pendientes a técnicos que trabajaron toda una vida en el sector agropecuario.
- P-0125 4º. Mejorar la atención fitosanitaria para evitar continúen siendo afectadas las exportaciones hacia mercados internacionales.

De la rueda de prensa:

PLD ALERTA SOBRE GRAVE CRISIS DEL SECTOR AGROPECUARIA Y ACUSA AL GOBIERNO DE DESMANTELAR LA PRODUCCIÓN

· 20 de abril, 2026

Propuestas:

Ante esta situación, el PLD propone la reactivación de sector con las siguientes medidas:

- P-0126 1º. Empezar de inmediato un plan masivo de siembra que permita incrementar la producción local y reducir la creciente dependencia de importaciones.

- P-0127 2º. Preparar todas las tierras disponibles, gestionando los tractores privados ante la escasez de maquinarias en Agricultura. Aprovechar las bondades de las lluvias de primavera
- P-0128 3º. Solucionar los reclamos de los agrónomos para integrarlos al sistema productivos.
- P-0129 4º. Bajar los costos de producción, disminuyendo los precios de los fertilizantes pesticidas, herbicidas, maquinarias agrícolas y viabilizando la mano de obra. Que sean gratuitas la preparación de tierras y la entrega de semillas certificadas de alto rendimiento.
- P-0130 5º. Revisar exhaustivamente el Banco Agrícola y fortalecerlos con recursos, para reducir la burocracia.
- P-0131 6º. Rescatar el INDRHI de su sueño eterno, reorientarlo hacia la recuperación urgente de los sistemas de riego.
- P-0132 7º. Disminuir en un 50% los impuestos en los combustibles a la agricultura.

EDUCACIÓN Y JUVENTUD

De la rueda de prensa:

PLD DENUNCIA COLAPSO DEL SISTEMA EDUCATIVO Y PROPONE PLAN DE EMERGENCIA

· 04 de Agosto, 2025

Propuestas:

- P-0133 1º. Un Plan de emergencia para garantizar cupo a todos los estudiantes.
- P-0134 2º. Detener de manera inmediata los aprestos para unificar el ministerio de Educación y el de Educación Superior, ya que no han podido gestionar uno solo, por lo que la catástrofe será peor con ese mal entramado de unificación.
- P-0135 3º. Transparencia total en los recursos del INABIE.
- P-0136 4º. Garantizar la aplicación de la evaluación del desempeño a los maestros y maestras conforme está establecido en la normativa.
- P-0137 5º. Presentar un plan nacional de construcción escolar con un cronograma público al que podamos dar seguimiento para completar los miles de aulas que siguen abandonadas desde nuestra gestión para garantizar la cobertura en un 100 % en todos los niveles de la Educación hacia el 2030, como un compromiso del Pacto Educativo.
- P-0138 6º. Cumplir con los compromisos del Pacto Educativo, que incluye la universalización de la Jornada Escolar Extendida, dando garantía de permanencia en todos los centros donde ya se habían establecido.

De la rueda de prensa:

JÓVENES DENUNCIAN ABANDONO Y DESPRECIO DEL GOBIERNO PRM; EXIGEN POLÍTICAS INTEGRALES

· 26 de enero, 2026

Propuestas:

- P-0139 1º. Empleo juvenil y primer empleo formal, con subsidios temporales y programas de formación dual.
- P-0140 2º. Creación de la Red Nacional de Cuidados, para reducir la exclusión laboral femenina.
- P-0141 3º. Asumir el anteproyecto de ley “MIPyME Joven”, sometido por la Secretaría de Juventud del PLD ante la Cámara de Diputados, el cual promueve un apoyo real a los jóvenes emprendedores dominicanos, mediante acompañamiento técnico y acceso a capital semilla para el desarrollo y sostenibilidad de sus emprendimientos.
- P-0142 4º. Desarrollar programas de reenganche educativo y laboral para jóvenes en condición “ni-ni”.
- P-0143 5º. Implementar una política pública integral, que garantice más becas con criterios claros y equitativos, el fortalecimiento real de programas como Inglés por Inmersión, y que las instituciones educativas técnicas vuelvan a enfocarse exclusivamente en su misión formativa.
- P-0144 6º. Crear programas de atención integral a la salud mental juvenil, integrada a las escuelas y a la atención primaria.
- P-0145 7º. Impulsar políticas de seguimiento al manejo de las estancias infantiles del país.

SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS

De la rueda de prensa:

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL ESTADO DE DERECHO

· 08 de septiembre, 2025

Propuestas:

- P-0146 1º. Creación de una Comisión Especial de Seguimiento a Muertes por Intervención Policial, con facultad de requerir información y celebrar audiencias públicas.
- P-0147 2º. Regla de 72 horas: Publicación, del parte técnico mínimo de cada caso (hora, lugar, unidad actuante, motivo de la intervención, evidencia levantada, armas incautadas y videos disponibles).
- P-0148 3º. Cobertura nacional de cámaras corporales y protocolo de activación obligatoria, con integración a la cadena de custodia digital.

- P-0149 4to. Plan de capacitación y recertificación en uso diferenciado de la fuerza, desescalada y armas no letales para las unidades de mayor letalidad.
- P-0150 5to. Asistencia técnica internacional (CIDH/ONU) para revisar el marco operativo y elevar los estándares de rendición de cuentas.

De la rueda de prensa:

PLD DENUNCIA CRISIS DE VIOLENCIA, INSEGURIDAD CIUDADANA Y AUSENCIA DE PLAN DE PREVENCIÓN DE PARTE DEL GOBIERNO

· 27 de abril, 2026

Propuestas:

- P-0152 1ro. Priorizar la prevención sobre la represión. Si el 59% de las muertes violentas provienen de conflictos sociales, el Estado necesita intervención comunitaria, mediación institucional y políticas de cohesión social. La prevención debe ser el eje central de la política de seguridad, no un anexo.
- P-0153 2do. Investigar con rigor los casos de violencia policial. Los 51 fallecidos en “intercambios de disparos” durante el primer trimestre de 2026 deben ser investigados de forma independiente, respetando el debido proceso y garantizando la rendición de cuentas. La impunidad institucional es tan peligrosa como la delincuencia.
- P-0154 3ro. Revisar con seriedad técnica el proyecto de Ley policial. El proyecto de modificación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional que cursa en el Senado debe ser analizado con criterio institucional. Figuras como el “general superior” deben sustentarse doctrinalmente antes de ser aprobadas.
- P-0155 4to. Transparentar los fondos de la reforma policial. El fideicomiso vinculado a la reforma debe ser sometido a auditoría social. La ciudadanía tiene derecho a saber; ¿cuánto se ha invertido?, ¿en qué?, y ¿con qué resultados concretos en el territorio?
- P-0156 5to. Publicar datos verificables y con metodología transparente. El Gobierno debe sincerar las cifras de violencia, publicar series estadísticas completas con fuentes accesibles y permitir la auditoría independiente de los indicadores de seguridad. La discrepancia entre la tasa que presenta el Gobierno y la que registra la Procuraduría exige una respuesta oficial clara e inmediata.

TRANSPARENCIA, JUSTICIA Y FISCALIZACIÓN

De la rueda de prensa:

EL PLD PRESENTA IRREGULARIDADES DEL BONO NAVIDEÑO 2024. ALERTA LA NO ENTREGA DE 600 MILLONES DE PESOS

· 22 de enero 2025

Propuestas:

- P-0157 1ro. Consideramos esencial reformar el sistema de ayudas sociales mediante el uso obligatorio del SIUBEN para la focalización, un sistema centralizado de verificación y la participación activa de la sociedad civil en la supervisión.
- P-0158 2do. También abogamos por la creación de una Ley de Programas Sociales que garantice criterios técnicos claros para la selección de beneficiarios, transparencia total mediante un registro público y la rendición de cuentas periódica.
- P-0159 3ro. Desarrollar una plataforma digital integral con datos abiertos, que permita a la ciudadanía monitorear en tiempo real la distribución de todas ayudas sociales que se realizan, asegurando así un control efectivo y público sobre los recursos destinados a estos fines.

De la rueda de prensa:

PLD RECLAMA TRANSPARENCIA EN INABIE LLAMA AL GOBIERNO A INVESTIGAR TODOS LOS PROCESOS DESDE 2021

· 22 de septiembre, 2025

Propuestas:

- P-0160 1ro. Fortalecer los controles internos y la supervisión en cada etapa de las licitaciones.
- P-0161 2do. Garantizar la trazabilidad digital de todos los procesos y expedientes.
- P-0162 3ro. Establecer pagos oportunos y mecanismos de factoring que protejan financieramente a las MIPYMES suplidoras.
- P-0163 4to. Verificar de manera rigurosa las plantas físicas de los oferentes y eliminar mecanismos de intermediación o subcontratación que encarecen y concentran las contrataciones.
- P-0164 5to. Proteger a los denunciantes frente a represalias.
- P-0165 6to. Promover una cultura institucional de cero tolerancias a la corrupción.

De la rueda de prensa:

¿A QUÉ SE DEBE LA INERCIA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN QUE SOLO REBUSCA EN EL PASADO, IGNORANDO EL DESORDEN DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN?

· 13 de octubre, 2025

Propuestas:

- P-0166 1ro. Presentar al Congreso Nacional el informe anual de auditoría correspondiente a la gestión en curso.
- P-0167 2do. La Cámara de Cuentas debe rendir al Congreso, a más tardar el 30 de abril de cada año, el informe completo de auditorías realizadas, conforme al artículo 33 de la Ley 18-24. Dicho informe debe incluir las auditorías practicadas a la gestión del gobierno actual y ser publicado para conocimiento ciudadano.
- P-0168 3ro. Informar qué entidades están siendo auditadas, en qué etapas se encuentran los procesos y cuáles son los hallazgos preliminares, en cumplimiento del principio de transparencia (artículos 4 y 8 de la Ley 18-24). El silencio institucional favorece la opacidad.
- P-0169 4to. Reorientar el plan de auditorías hacia la fiscalización preventiva y concurrente de la gestión actual. En virtud del artículo 15, numeral 9, la CCRD tiene el deber de participar en la prevención de la corrupción. El PLD exige auditorías en tiempo real, especialmente en programas sociales, compras públicas y obras en ejecución, para evitar que los escándalos se descubran años después.
- P-0170 5to. Dar cumplimiento obligatorio a las recomendaciones de auditoría y establecer mecanismos de seguimiento.

De la rueda de prensa:

PLD DENUNCIA GOBIERNO PAGA RD\$ RD\$22,369 MILLONES EN ALQUILERES DE LOCALES EN CINCO AÑOS; DICE ES “UN DERROCHE QUE HIPOTECA EL PATRIMONIO PÚBLICO”

· 13 de abril, 2026

Propuestas:

- P-0171 1ro. La formulación de un Plan Nacional de Infraestructura Pública, con metas claras de reducción progresiva del gasto en alquileres.
- P-0172 2do. La creación de un inventario único de activos del Estado, que permita una gestión eficiente, transparente y de largo plazo.
- P-0173 3ro. Transparentar los excesivos alquileres realizados por el gobierno dominicano.
- P-0174 4to. Generar una auditoria integral de los contratos de alquiler del periodo 2021 a la fecha.

P-0175 5to. Fortalecimiento institucional, mejora de la planificación pública, aumento de la transparencia, monitoreo ciudadano y enfoque en resultados.

De la rueda de prensa:

PLD EXIGE MINISTERIO PÚBLICO PRESENTE AVANCES SOBRE SENASA Y SU VÍNCULO CON LA CAMPAÑA DEL PRM

· 18 de mayo, 2026

Propuestas:

En consecuencia, solicitamos formalmente por cuarta vez que el ministerio público informe al país:

P-0176 1ro. El estado actual de la investigación del caso “SeNaSa”;

P-0177 2do. Que precise cuáles diligencias se han realizado;

P-0178 3ro. Que explique por qué no se ha presentado la segunda fase anunciada;

P-0179 4to. Que establezca si existió conexión entre fondos sustraídos y financiamiento político-electoral durante el proceso electoral de 2024, conforme a las líneas de investigación contenidas en el expediente conocido hasta ahora; y

P-0180 5to. Que la Cámara de Cuentas, con el mismo nivel de diligencia y celeridad con que ha actuado en otros procesos de investigación y auditoría, realice y publique la auditoría integral al SeNaSa, correspondiente al período 2020-2025, y remita sus resultados al Ministerio Público, dada la magnitud de las irregularidades denunciadas y el enorme impacto social de este caso.

MIGRACIÓN Y SOBERANÍA

De la rueda de prensa:

PLD ESTÁ DISPUESTO A CONTRIBUIR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA MIGRATORIA EFICAZ QUE PROTEJA LA SOBERANÍA DOMINICANA

· 29 de abril 2025

Propuestas:

Ante la situación planteada, proponemos una política migratoria basada en:

P-0181 1ro. Un sistema de control fronterizo moderno y efectivo, con verdaderas sanciones y consecuencias para quienes permiten el acceso irregular a nuestro territorio, junto al uso de tecnología de punta, que garantice una real protección del país y nuestra frontera.

P-0182 2do. La implementación de un Plan Nacional de Regularización ordenado y transparente, que permita identificar quienes se encuentran en nuestro territorio y aquellos que contribuyen a los sectores productivos.

- P-0183 3ro. El fortalecimiento de las relaciones diplomáticas para compartir la responsabilidad de la crisis haitiana con la comunidad internacional, evitando que República Dominicana cargue sola con esta situación y abogar por más facilidades para esa nación, iniciando por la eliminación de los aranceles impuestos del 10 % a sus exportaciones al territorio norteamericano.
- P-0184 4to. Que toda acción migratoria se realice en estricto apego al marco de la Constitución dominicana, las leyes nacionales y a los procedimientos establecidos, garantizando transparencia y rendición de cuentas.
- P-0185 5to. Y ante el llamado del Presidente de la República a los partidos políticos para construir un pacto nacional, el PLD está dispuesto a dialogar y llegar a acuerdos en un tema como el migratorio, que es un tema país, procurando que este diálogo:
- Se base en información verificable y transparente sobre migración irregular, repatriaciones y comercio binacional.
 - Que además del control fronterizo, incluya la estrategia de regularización, la cooperación internacional y el establecimiento de estrategias de desarrollo.
 - Que incluya a todos los sectores vinculados, desde productores nacionales, organizaciones civiles e instituciones académicas.
 - Se establezcan compromisos concretos con plazos definidos y mecanismos de seguimiento que aseguren el cumplimiento de los acuerdos, junto a un calendario de trabajo concreto accesibles a toda la ciudadanía.
 - Declaración pública del Gobierno de que toda acción migratoria respetará la dignidad humana y rechazará la xenofobia.
 - El propósito del dialogo no puede ser bajo el interés político – electoral, sino basado en una política real de Estado, que se implemente de manera rigurosa y organizada, rindiendo cuentas de forma transparente.

De la rueda de prensa:

PLD ASUME DEFENSA DE COMERCIANTES FRONTERIZOS ANTE AMENAZAS DE MODIFICAR LA DINÁMICA ECONÓMICA DE LA ZONA BAJO EL PRETEXTO DE “MODERNIZACIÓN”

· 25 de mayo, 2026

Propuestas:

- P-0186 1ro. Protección del comercio fronterizo tradicional y de los pequeños y medianos comerciantes dominicanos.
- P-0187 2do. Garantías estrictas contra el contrabando y la triangulación comercial, mediante controles tecnológicos, trazabilidad y supervisión independiente.

- P-0188 3ro. Participación obligatoria de productores y comerciantes fronterizos en la gobernanza de los puertos secos.
- P-0189 4to. Prioridad para productos dominicanos y encadenamientos productivos nacionales.
- P-0190 5to. Transparencia absoluta en las concesiones, permisos y operadores autorizados, para evitar monopolios y concentración económica.

MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS

De la rueda de prensa:

POR UNA MOVILIDAD CON DIGNIDAD: PLD PRESENTA SOLUCIONES.

· 14 de julio, 2025

Propuestas:

- P-0191 1ro. Descongestionar el Gran Santo Domingo reactivando y construyendo terminales interurbanas:
- Finalizar la construcción de las terminales de autobuses en las estaciones de Mamá Tingó y Los Alcarizos
 - Iniciar la Terminal de 6 de noviembre
- P-0192 2do. Diseñar y edificar la Terminal de la Carretera Sánchez
- P-0193 3ro. Poner en funcionamiento la Terminal del Este
- P-0194 4to. Dar continuidad a la expansión del Metro de Santo Domingo e implementar un programa de mantenimiento preventivo del Metro y adquirir nueva flota de vagones para cubrir la demanda actual.
- P-0195 5to. Establecer políticas públicas que coordinen la entrega y distribución de mercancías en horario nocturno (9:00 p.m. – 6:00 a.m.), descongestionando las arterias viales en horas pico.
- P-0196 6to. Garantizar la plena aplicación de la Ley 63-17, priorizando la voluntad política necesaria para dotar de semáforos inteligentes, cámaras de monitoreo y sanciones efectivas.
- P-0197 7mo. Integrar de manera permanente la materia de seguridad vial en todos los niveles del sistema educativo, formando ciudadanos responsables desde la infancia.
- P-0198 8vo. Lanzar campañas sociales de concienciación que promuevan el respeto a las normas de tránsito y un cambio de conducta en conductores y peatones
- P-0199 9no. Regular el crecimiento del parque vehicular —con especial énfasis en motocicletas.

- P-0200 10mo. Rediseñar y revisar carreteras, identificando los puntos de mayor riesgo para dotarlos de: bordes audibles, iluminación adecuada, señalización horizontal y vertical, control de vegetación, recuperación del derecho de vía
- P-0201 11ro. Proteger al peatón, ausente de todas las medidas de este gobierno, mediante la recuperación de aceras y espacios públicos ocupados, instalación de cruces inteligentes, mejoras en el entorno e iluminación.

De la rueda de prensa:

PLD EXIGE SOLUCIONES REALES ANTE LA CRISIS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y EL ABANDONO A LAS FAMILIAS DOMINICANAS.

· 25 de agosto de 2025

Propuestas:

- P-0202 1ro. Terminar las 11 mil aulas que el PLD dejó en proceso de construcción para evitar el colapso del sistema educativo y garantizar educación digna para cada niño y niña y reparar con carácter de urgencia los centros educativos que se encuentran en deterioro por falta de mantenimiento.
- P-0203 2do. Garantizar la entrega de los útiles escolares al 100 % de los estudiantes.
- P-0204 3ro. Transparencia total en cada licitación y que se investigue todo lo ocurrido en el INABIE y las cancelaciones de los contratos reportados.
- P-0205 4to. Reducir el déficit energético y terminar con los apagones que desesperan a las familias y quiebran a los pequeños negocios.
- P-0206 5to. Abastecer las Farmacias del Pueblo, para que la salud deje de ser un lujo y vuelva a ser un derecho.
- P-0207 6to. Reiteramos la necesidad de que se completen las remodelaciones y construcciones de hospitales que dejamos en marcha, incluida la ciudad sanitaria.

De la rueda de prensa:

EL CAMBIO APAGÓ EL PAÍS: PLD PROPONE MEDIDAS URGENTES ANTE CRISIS ELÉCTRICA

· 18 de agosto de 2025

Propuestas:

- P-0208 1ro. Mejorar la operación y mantenimiento de Punta Catalina, evitando salidas por fallas previsibles.

- P-0209 2do. Asegurar contratos de gas natural oportunos y transparentes, para reducir costos de generación.
- P-0210 3ro. Auditar y revisar los contratos eléctricos lesivos al Estado.
- P-0211 4to. Planificar eficientemente la entrada de energías renovables.
- P-0212 5to. Retomar planes con organismos internacionales para reducir las pérdidas.
- P-0213 6to. Implementar un plan agresivo de mantenimiento y normalización de redes, subestaciones y de tele-medición.
- P-0214 7mo. Reducir pérdidas técnicas y comerciales con metas verificables.
- P-0215 8vo. Construir la segunda planta Punta Catalina, aprovechando la infraestructura existente, tales como el muelle, el almacén, las líneas y subestaciones, los depósitos etc... Esto aseguraría energía eficiente y a buen precio.

De la rueda de prensa:

PLD ALERTA GOBIERNO GASTÓ MÁS CUBRIENDO PÉRDIDAS ELÉCTRICAS QUE EN INVERSIÓN PÚBLICA

· 16 de febrero, 2026

Propuestas:

Debido a esta situación que compromete recursos que deberían destinarse a salud, infraestructura, transporte, el Partido de la Liberación Dominicana exige formalmente:

- P-0216 1ro. Ejecución inmediata del Pacto Eléctrico
- P-0217 2do. Presentación de un Plan de Acción que sea:
- Medible: Metas cuantificables trimestrales
 - Transparente: Indicadores públicos en tiempo real
 - Monitoreado: Sistema de seguimiento ciudadano
 - Con consecuencias: Penalidades automáticas por incumplimiento
 - Integral: Que incluya reducción de pérdidas y ampliación de la oferta energética
- P-0218 3ro. Rendición de cuentas sobre el descalabro del sector eléctrico.

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

De la rueda de prensa:

PLD PROPONE MEJORAS A PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS. APUESTA A UNA REFORMA QUE FORTALEZCA EL DESARROLLO LOCAL Y LA COMPETITIVIDAD

· 23 de junio de 2025

Propuestas:

- P-0219 1ro. Consensuar con todos los actores esta reforma antes de la aprobación final, permitiendo una revisión participativa en la cual se involucre el sector productivo, las municipalidades, los ambientalistas y la sociedad civil.
- P-0220 2do. Garantizar que toda contribución empresarial sea proporcional, progresiva, basada en estudios y vinculada a metas ambientales claras y verificables, con base en estudios de generación de residuos y capacidad contributiva.
- P-0221 3ro. Fortalecer el rol de los municipios y la transparencia en el uso de los fondos.
- P-0222 4to. Incluir medidas de incentivo, no solo de penalización, que permitan una transición justa hacia modelos sostenibles.
- P-0223 5to. Establecer mecanismos de fiscalización a los recursos gestionados a través de la fiducia.
- P-0224 6to. Incluir al Ministerio de Hacienda en el Consejo del Fideicomiso, ya que esta entidad debe cuidar la sostenibilidad financiera del Estado en el mismo.
- P-0225 7mo. Que los contratos de gestión de residuos sólidos sean llevados a plazos razonables, para evitar vulnerar el principio de la libre competencia.

De la rueda de prensa:

PLD DENUNCIA COLAPSO AMBIENTAL EN RÍOS OZAMA E ISABELA: "LAS PROMESAS DE SANEAMIENTO SE AHOGARON EN LA INACCIÓN GUBERNAMENTAL"

· 28 de julio de 2025

Propuestas:

- P-0226 1ro. La protección efectiva de los humedales y riberas del Ozama, con la detención y sanción inmediata de rellenos ilegales.
- P-0227 2do. La restitución y ampliación del presupuesto público ambiental para la reducción de la contaminación, saneamiento ambiental y ordenación de aguas residuales.
- P-0228 3ro. Retomar la implementación del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del Gran Santo Domingo, con prioridad en el subsistema La Zurza–Mirador Norte.

- P-0229 4to. Incorporar esfuerzos para acelerar el cierre técnico del Vertedero de Duquesa con especial atención a los lixiviados vertidos al río.
- P-0230 5to. Reactivar el programa de saneamiento de cañadas que descargan directamente en el Ozama e Isabela, iniciado durante los gobiernos del PLD.
- P-0231 6to. Sancionar ejemplarmente a los responsables del vertido ilegal de residuos sólidos mediante camiones cisterna sépticos.
- P-0232 7mo. Reactivar la operación del Interceptor y la eliminación definitiva de los barcos abandonados.

De la rueda de prensa:

PLD RESPALDA RECLAMO DE COMUNIDADES Y DENUNCIA AUSENCIA DEL GOBIERNO EN LA PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

· 6 de abril de 2026

Propuestas:

- P-0233 1ro. Que mejore el seguimiento, control y autoridad ambiental vinculada a los permisos y licencias ambientales.
- P-0234 2do. Abrir una discusión nacional sobre el rumbo de la política ambiental, fortaleciendo la fiscalización, la protección de las fuentes de agua y el cumplimiento de la normativa vigente.
- P-0235 3ro. Priorización de la planificación territorial, la prevención de impactos y la fiscalización efectiva a la hora de emitir un permiso ambiental.

DESARROLLO HUMANO Y POLÍTICAS SOCIALES

De la rueda de prensa:

PLD PRESENTA 8 PROPUESTAS PARA MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO.

· 19 de mayo 2025

Propuestas:

- P-0236 1ro. Transformación integral del sistema de salud: Priorizar la atención primaria con iniciativas comunitarias en todo el país, fortaleciendo la educación sanitaria y la promoción de hábitos saludables.
- P-0237 2do. Plan Nacional para la Salud Materna: Retomar el sistema de seguimiento para cada embarazo y garantizar atención prenatal universal de calidad, con énfasis en zonas vulnerables.

- P-0238 3ro. Estrategia para enfermedades crónicas: Asegurar disponibilidad de medicamentos esenciales, combinando prevención, diagnóstico temprano y seguimiento continuo para evitar interrupciones en tratamientos vitales.
- P-0239 4to. Hospitales autosuficientes: Recuperar el modelo eficiente de gestión hospitalaria implementado en nuestros gobiernos, mejorando administración de recursos y calidad de servicios.
- P-0240 5to. Ampliación de la cobertura básica: Expandir la protección para incluir tratamientos y procedimientos no cubiertos que representan gastos considerables para las familias, especialmente aquellos con incrementos desproporcionados.
- P-0241 6to. Inversión prioritaria en salud: Incrementar progresivamente el presupuesto sanitario desde el actual 1.7% del PIB hasta alcanzar estándares internacionales.
- P-0242 7mo. Plan específico para adultos mayores: Desarrollar una cobertura integral para nuestros envejecientes, revisando urgentemente la ley de seguridad social.
- P-0243 8vo. Reabastecimiento de las Farmacias del Pueblo: Recuperar este programa para garantizar medicamentos de calidad a precios justos, solucionando el desabastecimiento actual.

MUJER Y POLÍTICA DE GÉNERO

De la rueda de prensa:

PLD DENUNCIA RETROCESOS EN EL BIENESTAR DE MUJERES Y LLAMA A FORTALECER POLÍTICAS PÚBLICAS.

· 09 de marzo, 2026

Propuestas:

Desde el Partido de la Liberación Dominicana consideramos urgente avanzar en una agenda nacional que garantice:

- P-0244 1ro. Una legislación efectiva contra el acoso laboral y la violencia de género que reconozca estas prácticas como figuras jurídicas específicas.
- P-0245 2do. Apoyo real para lograr la autonomía económica para las mujeres, garantizando el acceso a crédito, financiamiento y oportunidades productivas para las emprendedoras.
- P-0246 3ro. La expansión de la educación inicial, que permita incorporar a más de 500 mil niños de 0 a 5 años al sistema educativo y reducir la carga de cuidado que recae sobre las madres.
- P-0247 4to. Acceso efectivo a la justicia, eliminando las barreras que impiden a muchas mujeres acceder a una protección judicial oportuna.

P-0248 5to. Políticas de corresponsabilidad en el cuidado, que reconozcan que la crianza y el cuidado de adultos mayores no puede recaer exclusivamente sobre las mujeres.

De la rueda de prensa:

PLD ASEGURA EL 2026 SE ENCAMINA A SER EL AÑO MÁS SANGRIENTO PARA MUJERES DOMINICANAS.

· 30 de marzo, 2026

Propuestas:

- P-0249 1ro. Entrenamiento a la policía y a las Fiscalías especializadas en el manejo de situaciones de violencia de género, fortalecer a las unidades policiales y las fiscalías especializadas en las denuncias de violencia de género, pero hay que instruir a todos los agentes del orden sobre el manejo de estos casos y sobre el manejo de sus pasiones también.
- P-0250 2do. Implementar acciones del gobierno dominicano de características integrales para detener feminicidios.
- P-0251 3ro. Que el gobierno recupere y priorice proyectos integrales que ayudaban a disminuir los feminicidios como la Banca Solidaria, la tanda extendida, y los proyectos de cambios curriculares realizados en educación, que han sido abandonados por el actual Gobierno, dentro de la multidimensionalidad de los factores, contribuyen a reducir los feminicidios, por lo que proponemos que tales programas sean rescatados o fortalecidos y ejerzan sus misiones con perspectiva de género.

RESUMEN POR ÁREA DE GOBIERNO

Cantidad de Propuestas únicas por área de gobierno

TOTAL DE PROPUESTAS	251
----------------------------	------------

Las propuestas formuladas en distintas ruedas de prensa han sido depuradas, articuladas y consolidadas como una agenda programática coherente, contabilizándose aquellas de naturaleza coincidente y ubicándose en el área de gobierno de mayor pertinencia.

Este resumen ofrece una lectura ejecutiva del acumulado de propuestas, destacando su alcance sectorial y su vocación de respuesta pública ante los principales desafíos nacionales.

No.	Área	Propuestas únicas
1	Economía, deuda y finanzas públicas	43
2	Costo de vida, salarios y clase trabajadora	23
3	Salud y seguridad social	20
4	Agropecuaria y producción nacional	42
5	Educación y juventud	14
6	Seguridad ciudadana y derechos humanos	12
7	Transparencia, justicia y fiscalización	26
8	Migración y soberanía	10
9	Movilidad, infraestructura y servicios básicos	28
10	Medio ambiente y recursos naturales	17
11	Desarrollo humano y políticas sociales	8
12	Mujer y política de género	8
	TOTAL GENERAL DEPURADO	251



54

**Intervenciones
Públicas Registradas**



251

**PROPUESTAS TÉCNICAS
de políticas públicas para
sectores claves del gobierno**



+12

**ÁREAS DE GOBIERNO
Abordadas y Fiscalizadas**



**Evaluación
Monitoreo y
Fiscalización**

**Un compromiso inquebrantable
con el rigor técnico y la
transparencia**

Ejercer la oposición con responsabilidad democrática exige denuncia, pero la trasciende. Implica estudiar la realidad nacional con datos, anticipar el impacto de las políticas públicas y, fundamentalmente, presentar soluciones viables a los problemas de la ciudadanía.

La presente publicación recoge el análisis riguroso, las posiciones y críticas, pero también la propuesta constructiva del PLD ante los desafíos de la nación.